

HISTORIA ARGENTINA

Publicar una nueva Historia Argentina encarada como obra colectiva es una empresa que parece requerir cierta justificación. Cuando comenzamos a planear la presente, la escasez de tentativas comparables realizadas durante el lapso transcurrido desde que apareció la patrocinada por la Academia Nacional de la Historia, dirigida por Ricardo Levene, parecía sugerir que, si no imposible, el proyecto resultaba cuanto menos extremadamente difícil. La relativa abundancia de obras similares que desde entonces se publicaron, no asegura necesariamente que dicha dificultad fuese ilusoria, pero hace mucho más problemática la fundamentación de todo intento que venga a sumarse a los ya concretados.

El que sometemos al juicio del lector no pretende tener otro signo distintivo que la aspiración —común a sus colaboradores— de narrar la historia, según la fórmula de Huizinga, “de la mejor manera que les es posible”. Pero esa fórmula es (a la vez que falsamente modesta) falsamente simple: no sólo supone que esa “mejor manera” es tolerablemente buena; implica además que ella no deja de otorgar un carácter común (que no podría ser tan sólo la ubicación, real o imaginada, en cierto nivel de calidad) a los escritos inspirados por esa común aspiración. En la Argentina de los años setenta, ese signo distintivo acaso podría encontrarse sobre todo en un interés más vivo por ciertas dimensiones del pasado que —según escuchamos decir a menudo— nuestros historiadores no solían sentir. Pero no podría ser éste, sin más, el carácter distintivo de la presente Historia Argentina. En primer lugar, porque la preocupación por los aspectos no propiamente políticos del proceso histórico —y el intento de desentrañar los nexos entre éstos y los acontecimientos que llenan la historia que solemos llamar “tradicional”— impregna esa historia tradicional más de lo que suele admitirse. Ese intento no estaba libre de propósitos apologéticos; no estaba tampoco exento de los riesgos (de inexactitud, de imprecisión) quizás inevitables cuando se afrontan vastos problemas de historia económica y social, asignándoles a la vez un lugar que, a pesar de todo, no deja de ser marginal en el propio esfuerzo de reconstrucción del pasado. Pero tampoco están libres de esas limitaciones los ensayos que con igual ambición (y desde perspectivas ideológico-políticas a menudo opuestas a las de los precursores del siglo XIX) se suceden hoy con ritmo desenfrenado. Estos son con demasiada frecuencia pasibles de otra censura: ignoran serenamente casi todo cuanto ha aportado de nuevo la historiografía desde los tiempos de Mitre y López, para quienes Michelet había sido aún un contemporáneo.

Los trabajos aquí reunidos no quisieran merecer ese reproche: sus autores se consideran estudiosos profesionales de la historia y las ciencias sociales, y como tales quieren ser juzgados; su primer deber es, por lo tanto, practicar un estilo de indagación histórica que esté a la altura de los tiempos, no sólo en cuanto haga suya la perspectiva que este problemático presente impone al pasado nacional (y que no podría ser desde luego la misma cuya justeza parecía evidente hace un siglo), sino también en cuanto busque utilizar una cultura histórica menos arcaica de lo que todavía suele ser habitual entre nuestros historiadores, y por último, en cuanto no se niegue a extraer las conclusiones necesarias del hecho de que la historia es —en una de sus dimensiones— ciencia social: la colaboración entre historiadores y cultores de otras ciencias humanas constituye en esta obra el reflejo más visible, pero no el único, de este enfoque.

TULIO HALPERIN DONGHI

VOLUMEN 7

ARGENTINA

LA DEMOCRACIA DE MASAS

Tulio Halperin Donghi

ARGENTINA

LA DEMOCRACIA DE MASAS



EDITORIAL PAIDOS
Buenos Aires

Impreso en la Argentina — Printed in Argentina
Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

© Copyright de todas las ediciones en castellano by
EDITORIAL PAIDOS S. A. I. C. F.
Defensa 599 — Buenos Aires

Diseño gráfico de la tapa:
GUSTAVO G. PEDROZA

INDICE

Indice de figuras	9
-------------------	---

POLITICA Y SOCIEDAD

1. ARGENTINA 1943	13
1. Un sistema político en disgregación	13
2. Una sociedad que secretamente se transforma	20
2. UNA REVOLUCION QUE BUSCA SU RUMBO	28
3. LA ARGENTINA PERONISTA	51
4. DESPUES DEL PERONISMO	88
5. LAS EXPERIENCIAS CONSTITUCIONALES	114
BIBLIOGRAFIA	163
Indice de nombres y lugares	167
Indice de temas	171

INDICE DE FIGURAS

En colores (entre págs. 80 y 81)

Villa Miseria

(entre págs. 128 y 129)

Estación Constitución

En blanco y negro

- Fig. 7.1. Revolución del 4 de junio de 1943. Oficiales en marcha hacia la Casa Rosada (Archivo General de la Nación). 16
- Fig. 7.2. Revolución del 4 de junio de 1943. Tropas pasando frente a la Escuela de Mecánica de la Armada, después de haber sostenido un tiroteo (Archivo General de la Nación). 19
- Fig. 7.3. Manifestaciones populares. Revolución del 4 de junio de 1943 (Archivo General de la Nación). 20
- Fig. 7.4. Revolución del 4 de junio de 1943. Quema de ómnibus en Plaza de Mayo (Archivo General de la Nación). 22
- Fig. 7.5. Revolución del 4 de junio de 1943. Manifestaciones de violencia en la Plaza de Mayo (Archivo General de la Nación). 23
- Fig. 7.6. Perón en el Consejo Nacional de Posguerra, abril de 1945 (Archivo General de la Nación). 32
- Fig. 7.7. 12 de octubre de 1945. Manifestantes frente al Círculo Militar (Archivo General de la Nación). 45
- Fig. 7.8. 17 de octubre de 1945. Aspecto de la concentración popular (Archivo General de la Nación). 48
- Fig. 7.9. 17 de octubre de 1945. Concentración popular en Plaza de Mayo en adhesión al coronel Perón (Archivo General de la Nación). 52
- Fig. 7.10. Mitin de la Unión Democrática. 8 de diciembre de 1945 (Archivo General de la Nación). 56

Fig. 7.11. Gira de Eva Perón por Santa Fe (Archivo General de la Nación).	61
Fig. 7.12. Ceremonia de imposición de la Gran Cruz de Isabel la Católica a Eva Perón por el generalísimo Franco. Madrid, junio de 1947 (Archivo General de la Nación).	63
Fig. 7.13. Eva Perón dirigiéndose a una audiencia privada del Papa Pío XII. Junio de 1947 (Archivo General de la Nación).	66
Fig. 7.14. Perón, 17 de octubre de 1949 (Archivo General de la Nación).	68
Fig. 7.15. Perón hablando ante concentración popular, 1950 (Archivo General de la Nación).	70
Fig. 7.16. Público reunido en Plaza de Mayo. Fiesta del Trabajo, 1º de mayo de 1950 (Archivo General de la Nación).	71
Fig. 7.17. El general Perón y su plana mayor durante la concentración del 1º de mayo de 1950 (Archivo General de la Nación).	73
Fig. 7.18. Esperando turno para entrar al velatorio de Eva Perón, julio de 1952 (Archivo General de la Nación).	74
Fig. 7.19. Sepelio de Eva Perón, 10 de agosto de 1952. La cureña en momentos en que inicia la marcha desde el Congreso (Archivo General de la Nación).	76
Fig. 7.20. Incendio del Jockey Club, abril de 1953.	77
Fig. 7.21. Convento e iglesia de San Francisco después del incendio y saqueo, 16 de junio de 1955 (Archivo General de la Nación).	82
Fig. 7.22. El almirante Isaac Rojas desembarcando en el puerto de Buenos Aires.	85
Fig. 7.23. Aspecto de la Plaza de Mayo en la asunción del mando por el General Lonardi, 23 de setiembre de 1955 (Archivo General de la Nación).	87
Fig. 7.24. El General Lonardi y Busso. Juramento de la Suprema Corte (Archivo General de la Nación).	95
Fig. 7.25. Reunión de la Junta Consultiva Nacional presidida por el contraalmirante Isaac Rojas (Archivo General de la Nación).	97
Fig. 7.26. El General Lonardi con Palacios, Ghioldi, Zavala Ortiz y Perette (Archivo General de la Nación).	98
Fig. 7.27. Lonardi con los interventores de las universidades nacionales (Archivo General de la Nación).	102
Fig. 7.28. Aramburu, Rojas y Frondizi, mensaje postelectoral del 23 de febrero de 1958 (Archivo General de la Nación).	112
Fig. 7.29. Tanque del Regimiento 8 de Tanques Cazadores, 20 de setiembre de 1962 (Archivo General de la Nación).	119
Fig. 7.30. Policía custodiando la entrada de la Casa de Gobierno. Crisis militar del 30 de marzo de 1962 (Archivo General de la Nación).	121
Fig. 7.31. El Papa Juan XXIII recibe en audiencia especial al presidente Frondizi, 1960 (Archivo General de la Nación).	122
Fig. 7.32. Frondizi en Grecia, 1961 (Archivo General de la Nación).	124
Fig. 7.33. Manifestación peronista en presidencia de Frondizi.	127
Fig. 7.34. Frondizi camino a Martín García.	129
Fig. 7.35. Público haciendo cola para proveerse de víveres. Crisis militar (Archivo General de la Nación).	135
Fig. 7.36. Propaganda electoral para las elecciones de 1963.	139
Fig. 7.37. El presidente Illia y el vicepresidente Perette acompañan hasta la puerta principal de la Casa Rosada al presidente saliente J. M. Guido, 12 de octubre de 1963 (Archivo General de la Nación).	142
Fig. 7.38. El presidente Illia en compañía del secretario de Energía y combustible Dr. Pizzio, el teniente general Onganía y el contraalmirante Varela en el Aeroparque antes de viajar a San Rafael (Archivo General de la Nación).	151

POLITICA Y SOCIEDAD

1. ARGENTINA 1943

1. Un sistema político en disgregación

La restauración conservadora terminaba, como había comenzado trece años antes, en una intervención militar. Pero allí concluían las semejanzas entre el episodio que la había abierto y el que la clausuraba. En 1930 la revolución había sido el desenlace de una agitación dirigida por vastos sectores de nuestra clase política, capaces de ganar para sus puntos de vista, si no a indiscutibles mayorías del electorado, a una porción muy amplia de éste, y sobre todo de imponer en tono cada vez más militante a una oposición crecida en número. En ese clima la intervención militar fue discutida, esgrimida como amenaza, anunciada como esperanza, meses antes de que se desencadenara; una vez producida fue vista como la etapa final de un proceso que abarcaba sectores mucho más amplios que los de la oficialidad revolucionaria.

Nada semejante se da en 1943. Por lo contrario, la jornada revolucionaria está marcada por la misma atonía política de las etapas que la precedieron; si a nadie podía sorprender demasiado que el gobierno del doctor Castillo ofreciera resistencia sólo nominal, esa pasividad no era sino un aspecto de la que manifestó en la circunstancia toda la opinión pública, sólo quebrada por la presencia junto a algunos jefes revolucionarios de dirigentes por otra parte secundarios de tendencias políticas que iban

desde el radicalismo alvearista hasta el nacionalismo filofascista, y que sólo tenían en común, junto con la incapacidad de allegar a la nueva situación política adhesiones que fueran más allá del plano individual, la esperanza de dar orientación a un movimiento cuyas perplejidades comenzaron a adivinarse desde que se desencadenó sobre un país tan poco dispuesto a resistirlo como a apoyarlo.

Esas perplejidades, que bien pronto se iban a manifestar claramente, se debían sin duda en buena medida a la heterogeneidad de puntos de vista del cuerpo de oficiales. Pero se vinculaban también con la herencia política de los trece años de restauración conservadora: si son muy evidentes las influencias ideológicas y los ejemplos externos que estaban dando prestigio creciente a las alternativas que desde la derecha se ofrecían a la democracia constitucional con pluralidad de partidos, no son menos evidentes los estímulos que la experiencia clausurada brindaba al avance de esos puntos de vista, más capaces que en 1930 de oponerse a los que proponían entregar el destino del país a la decisión del sufragio universal. Sin duda, era injusto ver en la restauración conservadora, marcada por un falseamiento sistemático de los resultados electorales, que había asegurado el gobierno a los representantes de una minoría política y social, un ejemplo lo bastante típico para medir a través de él la eficacia del constitucionalismo pluripartidista; aun así, era indudable que todos los partidos políticos efectivamente existentes en la Argentina, aun los más brutalmente desfavorecidos por el sistema, habían terminado por participar en la experiencia que se cerraba; las víctimas de la Restauración, sin perder su carácter de tales, se habían transformado a la vez en cómplices —no siempre sólo pasivos— de ella. Esto es particularmente válido para el radicalismo, que seguía ofreciendo la única alternativa constitucional viable a la hegemonía conservadora (tal como lo admitían los demás grupos políticos no conservadores, que desde 1936 se orientaban paulatinamente hacia una coalición cuyo núcleo debía ser el reluctantante partido radical).

Las consecuencias de este proceso, que afectaba tanto al partido de gobierno como al más importante entre los de oposición, no sólo se hacían sentir en el plano moral en que gustaban por entonces ubicarse la mayor parte de los críticos del sistema, sino que también afectaban la solidez política de éste. Disminuían desde luego la del partido oficial: formado por un conjunto de corrientes más heterogéneas que contrastantes (aun las diferencias entre conservadores y radicales antipersonalistas no alcanzaban a tocar puntos importantes de política), la cohesión que alcanzó —y que en ciertas etapas de la restauración conservadora fue muy considerable— fue fruto sobre todo de las influencias ejercidas por el titular

del poder nacional. Ya la última etapa de la presidencia de Justo marcó la decadencia de un arte político que en las primeras de su gobierno había alcanzado un virtuosísimo comparable con el de las horas más brillantes de la experiencia conservadora anterior a 1916. Pero fue sobre todo a partir de 1938 cuando la cohesión del oficialismo fue sometida a pruebas cada vez más difíciles de superar. Si la tentativa de retorno a una práctica más sincera del sufragio universal, comenzada por Ortiz, suele despertar sólo escaso interés retrospectivo entre estudiosos que subrayan no sin justicia la afinidad profunda entre la política de la coalición conservadora y la de los sectores radicales a los que favorecía particularmente la actitud presidencial, es comprensible que los dirigentes situacionistas, amenazados por ella de una rápida pérdida de influencia política, la hayan visto con menos ecuanimidad. La desaparición de Ortiz, y el retorno inmediato a los usos electorales que desde 1930 habían asegurado la victoria al oficialismo, eliminaron esa causa de tensión dentro de éste, pero sólo para reemplazarla por otras que de pronto se hacían más urgentes.

Sin duda la política de neutralidad frente a la guerra adoptada por el doctor Castillo y su ministro Enrique Ruiz Guiñazú no encontraba oposición seria dentro del oficialismo; durante un par de años a partir de 1940 pareció la más prudente ante un conflicto cuyo desenlace era aun imprevisible; aun después siguió contando con el apoyo discreto de Gran Bretaña, que seguía siendo el más importante interlocutor externo de la Argentina conservadora; sólo lentamente, y no sin vacilaciones, comenzó a manifestarse a través de la actitud de algunos dirigentes conservadores el influjo creciente que gracias a la coyuntura mundial los Estados Unidos estaban ganando también en la Argentina. Para consolidar ese influjo la política norteamericana favorecía una más plena integración argentina en el sistema panamericano, volcado a partir de 1942 en favor de las Naciones Unidas que esos dirigentes apoyaban frente a la neutralidad previamente recibida sin protestas.

Esta causa de divergencia era sin embargo menos importante que las que surgían en torno del sentido político —interno y exterior— de la neutralidad argentina. Pareció cada vez más evidente que (por lo menos para el presidente Castillo) la neutralidad era algo más que un recurso inspirado por la prudencia; era casi un modo de definición político-ideológica, una negativa a cualquier adhesión a la causa de la democracia liberal en lucha contra el fascismo (y aun, para intérpretes poco benévolos, la mayor prueba de benevolencia que, en esa coyuntura local y mundial, podía ser ofrecida a este último). En ese contexto ideológico que cambiaba el sentido mismo de la neutralidad argentina, se hizo cada vez

más frecuente la afirmación solemne, por parte de importantes políticos conservadores, de su adhesión a la causa de las Naciones Unidas, que parecía corresponder al sentimiento dominante en el oficialismo, poco dispuesto en el pasado a condenar aun los aspectos más repulsivos de la acción política fascista, pero más inclinado ahora a marcar su reprobación frente a la tentativa de deshacer por la violencia el orden internacional en el que la Argentina conservadora se había integrado tan aca-
badamente.

He aquí una causa nueva de tensión dentro del oficialismo, y no hay duda de que su utilización por el general Justo —que hasta su muerte la empleó con su destreza habitual para preparar un nuevo ascenso a la presidencia— contribuyó a dotarla de mortal eficacia. Pero no deben subestimarse tampoco las consecuencias del particular estilo político del doctor Castillo; entre él y su partido se repetía la oposición —vieja en la Argentina— que ha solido enfrentar a un presidente decidido a dejar de ser figura marginal de la vida política y la máquina oficialista que, como gran dispensador de favores y castigos, se cree en situación de dominar. El autoritarismo nada disimulado del presidente, su indife-



Fig. 7.1. Revolución del 4 de junio de 1943. Oficiales en marcha hacia la Casa Rosada (Archivo General de la Nación).

rencia ante los conflictos que él despertaba entre sus seguidores, o buyeron a restar cohesión y fuerza al partido oficial; el doctor Ca parecía creer que la adhesión partidaria podía ser reemplazada e del ejército (es decir, la del cuerpo de oficiales) y no vaciló en exhibirla como su arma de triunfo frente a sus inquietos correligionarios.

Desde la cima del poder volvía así a solicitarse, en términos casi explícitos, el retorno a una más abierta tutela militar sobre la vida política. Las mismas solicitaciones comenzaban a surgir de la oposición, sobre todo de la radical, que ya había tenido oportunidad sobrada de perder toda ilusión sobre las posibilidades de un retorno al poder negociado con la coalición conservadora dominante. Puesto que los oficiales radicales carecen de toda posibilidad de acción revolucionaria, el radicalismo debe buscar en el ejército aliados más bien que adictos; parece aceptar así el papel que le es asignado en la vasta maniobra emprendida por el general Justo para reconquistar el poder, y luego de la muerte de éste no faltan tampoco dirigentes radicales que buscan persuadir al general Ramírez, ministro de Guerra de Castillo, de que asuma el papel de restaurador de la verdad electoral: su premio sería la presidencia de la República. Justo se había identificado por completo con la causa de las Naciones Unidas, y buscaba el apoyo de sectores políticos que iban desde los más liberales dentro del conservadorismo hasta los socialistas; Ramírez, identificado con la neutralidad, sospechoso de simpatías personales por el Eje, representaba soluciones casi totalmente opuestas. Pero si ambos pudieron contar con la adhesión de sectores radicales, ello no se debió tan sólo al oportunismo de un partido ansioso por sacudir la pesada hegemonía conservadora, sino también a las perplejidades crecientes que la experiencia argentina y mundial despertaba en el radicalismo.

Sin duda, éste había sido entregado por la presión del orden conservador al predominio del sector alvearista, que se mantenía identificado con las posiciones de liberalismo conservador que habían sido siempre las suyas; sin embargo la dureza que la restauración mostró con un radicalismo así domesticado —y el clamoroso avance de la corrupción en las filas de éste— aceleraron el retorno ofensivo de los grupos de extracción yrigoyenista que el solo paso del tiempo debía provocar: no cabía duda, en efecto, de que para su vasto electorado el radicalismo se identificaba sobre todo con el recuerdo de su máximo caudillo. Ese común yrigoyenismo no aseguraba sin embargo verdadera cohesión en los sectores anti-alvearistas que en casi todos los distritos hacían oír ahora su voz disidente, desde Córdoba —donde el doctor Sabattini, el taciturno oráculo de Villa María, había dado al partido no sólo un heredero de dimensiones única-

mente locales del estilo político de Yrigoyen, sino también el prestigio derivado de su paso por el gobierno de la provincia, señalado por una probidad escrupulosa (en esos años casi anacrónica) y por una excelente capacidad administrativa— hasta los corrompidos jefes secundarios de la máquina radical de la Capital que levantaban contra no menos corrompidos y más afortunados rivales el recuerdo de Yrigoyen, y hasta los grupos de inspiración más ideológica que en la misma Capital y en la provincia de Buenos Aires hacían de Yrigoyen el precursor de un populismo, cuyas efectivas fuentes de inspiración buscaban (en actitud ecléctica que estaba lejos de romper con las tradiciones radicales) en sistemas tan remotos entre sí como los del comunismo, el fascismo y los movimientos de emancipación de áreas marginales desde la India y la China hasta el Perú. A falta de coincidencias a largo plazo, los grupos antialvearistas tenían en común la hostilidad a toda coalición con otras fuerzas políticas y la adhesión a la política de neutralidad en el conflicto mundial.

Pero ni aun el conflicto interno era capaz de brindar vitalidad nueva a un radicalismo íntimamente desarticulado por trece años de marginalidad resignadamente aceptada. Cualesquiera que fuesen las justificaciones para esa actitud ambas alas radicales coincidían en esperar el fin de esa humillante situación, no del esfuerzo propio, sino de una decisión de los árbitros del orden político argentino, ya los buscaran en los sectores políticamente dominantes o en el cuerpo de oficiales.

Tanto el gobierno como el único sector de la oposición juzgado capaz de ofrecer una alternativa viable, se inclinaban entonces a favorecer una nueva intervención del ejército. Todavía impulsaba a ella un sentimiento muy generalizado: el que creía percibir una distancia creciente entre las *élites* políticas dirigentes y un país que, en esos trece años de azarosa defensa de la restauración, no había interrumpido su camino, que parecía alejarlo progresivamente de un mundillo político encerrado en las alternativas creadas por el alzamiento de 1930. ¿Qué rasgos nuevos llevaba ya inscritos, como consecuencia de esas transformaciones, la Argentina de 1943? Sin duda los contemporáneos de ella hubieran sido menos capaces de indicarlos que los estudiosos actuales, a veces demasiado seguros de sus análisis retrospectivos; aun la novedad misma de esos rasgos era adivinada más que advertida, y ello sobre todo a través de la dificultad creciente de comunicación entre el país y quienes se consideraban no sólo sus guías, sino también sus intérpretes. Sólo la experiencia posterior, al revelar hasta dónde podían llegar las consecuencias de ese recíproco aislamiento, permitió ubicar en ciertos sectores particularmente sensibles de la sociedad y de la economía el núcleo de los cambios que si no estaban creando necesariamente una Argentina



FIG. 7.2. Revolución del 4 de junio de 1943. Tropas pasando frente a la Escuela de Mecánica de la Armada, después de haber sostenido un tiroteo (Archivo General de la Nación).

nueva, sí estaban destruyendo la trabazón de la que había alcanzado un prodigioso crecimiento en el medio siglo anterior a 1930.

2. Una sociedad que secretamente se transforma

¿Debe extrañar que esos cambios no fuesen claramente advertidos? Pero el orden político instaurado en 1930 se había fijado entre otros objetivos el de consolidar el predominio de los sectores sociales que habían venido controlando la economía exportadora; sin duda la reordenación que la crisis impuso dentro de esos sectores tuvo consecuencias que no dejaron de suscitar la encendida protesta de los perjudicados, volcadas sobre un gobierno dispuesto a avalar discriminaciones nuevas en el bloque antes homogéneo de los privilegiados; en esa protesta —relativamente ineficaz, pero extremadamente ruidosa— encontramos la más articulada expresión de un conflicto entre grupos socioeconómicos que la etapa de restauración conoce; otros sectores aun más duramente golpeados, que se sabían de antemano ubicados entre los vencidos de 1930, aceptaron con mayor resignación su adverso destino. Es decir que la



FIG. 7.3. Manifestaciones populares. Revolución del 4 de junio de 1943 (Archivo General de la Nación).

revolución de esa fecha había significado una definición social no nos que política, y el orden de ella surgido había contado siempre la fuerza necesaria para mantenerla; de nuevo como en el plano político, la presencia amenazante de esa fuerza era suficiente para disuadir de toda tentativa sería de discutir en sus aspectos esenciales el equilibrio social impuesto al país.

Pero la crisis y la guerra cambiaron los datos fundamentales de la economía argentina; la política de la Restauración debió adaptarse a ese clima nuevo, y no era demasiado importante que —aun para más de uno de los que introdujeron las innovaciones que él imponía— la perspectiva a largo plazo ofreciera un ilusorio retorno a la normalidad anterior a 1929; de hecho su acción contribuía a alejar cada vez más al país de ese paraíso irrevocablemente perdido.

Aun para el más lúcido de los políticos que orientaron ese esfuerzo de adaptación —Federico Pinedo— su finalidad principal debía ser la de asegurar la posición de los productores primarios en la distribución del ingreso, para evitar de este modo un colapso de las exportaciones. Pero —como es bien sabido— una consecuencia ineludible de esa política (o, más bien, de la situación económica mundial que obligaba a adoptarla) fue la expansión industrial. No fue ésta sin duda la única causa para las migraciones internas que iban a caracterizar a la etapa abierta en 1930, que en parte reemplazaban a la ahora frenada inmigración europea, y eran sólo un aspecto de un proceso de urbanización cuyo único motor no era por cierto la expansión industrial (aun en las cifras propuestas por Bunge, sistemáticamente orientadas a subrayar la importancia de la industria como fuente de trabajo, si la población ocupada en actividades industriales crece en un 73 % entre 1914 y 1933 y en un 122.3 % entre esa primera fecha y 1940, la ocupada en actividades comerciales crece en esos lapsos el 73 y el 114,9 %, respectivamente) y que tenía estímulo adicional en la crisis de la economía rural. Aunque ésta fue atenuada por medidas de gobierno (que obraban de manera selectiva, atendiendo sobre todo a las producciones para exportación y favoreciendo dentro de ellas en especial a los sectores dominantes) en extensas áreas rurales las consecuencias de esa política se hacían sentir muy poco, y era de ellas —y de las urbanas del Interior— de donde provenían los mayores contingentes de migrantes internos.

Para integrar esa población nueva, que cambiaba no sólo su lugar de residencia sino también sus modos de vida, y que entre 1936 y 1945 daría un contingente de cerca de un millón de personas al conglomerado urbano de Buenos Aires, la organización política y social vigente contaba

con mecanismos clamorosamente insuficientes. En la jurisdicción de la Capital Federal los partidos políticos predominantes —el radical y el socialista—, que gracias a la libertad electoral mantenida en el distrito lo representaban en el parlamento y el Consejo municipal, tenían muy escasas posibilidades de brindar a los migrantes los servicios que les hubieran permitido organizarlos en sólidas clientelas políticas; el socialismo, por otra parte, se había vedado desde el comienzo esos métodos de penetración en los sectores populares. La coalición conservadora, que contaba con la inclinación y los medios adecuados para realizar esa tarea, había ya renunciado a presentar batalla electoral seria en la Capital Federal. Algo distinta era la situación en la provincia de Buenos Aires, donde el socialismo contaba con muy escasa gravitación electoral y el conservadorismo había llevado a sus últimos extremos el fraude electoral. En particular en los distritos suburbanos de la Capital una larga tradición de corrupción política había consolidado máquinas íntimamente vinculadas con la explotación de la prostitución y el juego clandestinos; la misma existencia del fraude, sin embargo, hacía innecesaria la ampliación de esas máquinas para incluir en ellas a contingentes



FIG. 7.4. Revolución del 4 de junio de 1943. Quema de ómnibus en Plaza de Mayo (Archivo General de la Nación).

importantes de nuevos migrantes. Aun así, esos migrantes participaban en el sistema de pequeños favores con que las organizaciones conservadoras buscaban asegurarse una popularidad más vasta, y acaso habrían contribuido a la larga a arraigar más sólidamente el oficialismo en el cinturón de suburbios populares de la Capital.

Los sindicatos, que hubieran podido ofrecer un medio complementario o alternativo de integración, estaban aún peor preparados para ello que las organizaciones políticas: sin contar con el favor oficial, sin haber tomado a su cargo (salvo excepciones que se daban sobre todo en los más antiguos y poderosos, y por lo tanto en ramas de actividad donde el influjo de los migrantes era escaso) tareas asistenciales de importancia, limitados a una función de lucha que el clima político obligaba a llevar adelante con extrema cautela, librados para ampliar sus filas a un reclutamiento no facilitado por la existencia de cláusulas de *union shop* en los contratos colectivos, los sindicatos podían ejercer sólo moderada atracción sobre nuevos sectores populares urbanos, que por otra parte no siempre ha-



Fig. 7.5. Revolución del 4 de junio de 1943. Manifestaciones de violencia en la Plaza de Mayo (Archivo General de la Nación).

bían adquirido en su experiencia anterior (al revés de lo que ocurría con los partidos políticos) ni aun la noticia de que en efecto existían organizaciones sindicales.

Las posibilidades abiertas por esa situación, tal como se ha señalado, no eran demasiado claramente advertidas. El peso del fraude electoral, la presencia de una mayoría anticonservadora de viejo arraigo en la Capital Federal hicieron que también se prestara atención escasa a un proceso aun menos espectacular: la nacionalización de los sectores obreros, que desde fines del siglo XIX hasta 1940 había llevado de una situación en que la mayoría de trabajadores extranjeros era abrumadora a otra en que la mayor parte de los trabajadores eran nativos y por lo tanto estaban dotados de franquicia electoral. Esta transformación del cuerpo electoral, que aproximaba cada vez más su distribución ocupacional a la de la población del distrito respectivo, abría sin embargo también ella toda clase de posibilidades, apenas el equilibrio político creado por la restauración fuese mínimamente alterado; mientras tanto el cambio en la composición de los sectores obreros, aportado por el solo paso del tiempo y la sucesión de las generaciones, no sólo hacía sentir en pleno su peso en el padrón electoral, sino —en términos más generales— integraba mejor a los trabajadores en el cuerpo nacional. Ello puede explicar en parte el relativo vigor que (pese al adverso clima político y también económico) mostró la organización sindical sobre todo en los años finales de la restauración conservadora. Sin duda esa organización enfrentaba las mismas duras disyuntivas que las fuerzas políticas de arraigo popular, y —si a menudo podía vérsela al lado de ellas, en las estériles jornadas de protesta contra la política de la Restauración— más de un dirigente obrero había comenzado a sacar las conclusiones que esa esterilidad misma sugería, buscando abrir el diálogo con quienes tenían efectivamente el poder, ya para obtener ventajas para sus representados, ya —como suponían quienes no veían sin alarma ese desarrollo— con finalidades más políticas y menos impersonales. Esos primeros signos de la presencia de dirigentes obreros dispuestos a jugar el juego político según las reglas fijadas por la Restauración no eran en sí demasiado importantes, pese a la virtuosa indignación que lograban provocar en otros dirigentes más apegados a los antiguos usos. No lo eran sobre todo porque la voluntad de insertarse en los mecanismos del aparato político, aun a nivel modesto, no encontraba eco alguno en quienes dominaban ese aparato; aun así esa actitud nueva era también ella un anticipo de rumbos futuros.

Por debajo de las tensiones sociales inmediatamente visibles —que, como se ha visto, en el clima de la restauración conservadora surgían sobre todo a partir de reajustes internos en los sectores dominantes— otras

tensiones potenciales iban siendo preparadas por los cambios sociales y económicos que siguieron a la crisis de 1929; en particular la industrialización estaba creando un terreno nuevo para algunas de ellas. ¿Las vicisitudes del sector campesino no acentuaban también ellas otras tensiones, dispuestas a manifestarse apenas se debilitara la pesada tutela que sobre el orden rural impuso la Restauración? Aquí sería preciso dar una respuesta localmente diferenciada. Estaban desde luego las zonas de agricultura tradicional del Interior, mal defendidas por la política económica oficial contra las consecuencias de la crisis, que ofrecieron contingentes importantes a las corrientes de migración interna. Estaban los oasis de agricultura subtropical y tropical del norte, viejos y nuevos, para los cuales por lo contrario se habían elaborado a menudo políticas de regulación; si los grupos sociales vinculados con esas explotaciones mostraban variaciones locales muy importantes, se encontraban aquí los más típicos ejemplos de agricultura de plantación, con masas de peones atados por deudas y por el terror a la violencia administrativa; con peones temporarios cuyas peregrinaciones se daban en condiciones de extrema miseria y a veces eran impuestas mediante la fuerza por quienes real o supuestamente los habían contratado. Estas situaciones, que numéricamente podían no afectar a grupos demasiado considerables de trabajadores, estaban sin embargo muy presentes en la opinión pública alertada por la literatura, el periodismo y aun el cine nacional. Acaso más significativa para ese tipo de agricultura era la hegemonía de los comercializadores sobre los productores, que se daba allí donde la tierra se encontraba más dividida y contrarrestaba en buena parte las consecuencias sociales de esa división (así en algunas zonas azucareras de Tucumán, yerbateras de Misiones, algodóneras del Chaco. . .). Ese predominio, que adquiere aquí rasgos extremos, no hace por otra parte sino acentuar un rasgo también presente en los oasis agrícolas del Interior templado (viñedos de Cuyo, viñedos y frutales en Río Negro) donde se buscaría en vano paralelo a la dura explotación de la masa de peones que se practica en el norte.

Ese predominio de los comercializadores está también muy presente en el núcleo mismo de la Argentina agrícola, en la zona del cereal, y se inserta aquí en un complejo juego de relaciones sociales sobre el cual incide tanto la crisis como las medidas que para enfrentarla elabora la restauración. Al lado de la relación entre productores y comercializadores es decisiva la que se da entre propietarios y cultivadores; el arrendamiento sigue siendo el régimen dominante, salvo en algunos rincones de la pampa cerealera, y hace más complicado el panorama la gravitación creciente de un sector de arrendatarios grandes y medianos que practica el subarrendamiento, que en algunas áreas (sin duda restringidas) llega a ser él también predominante. La victoria de conservadores y radicales

filoconservadores parecía anunciar un futuro muy oscuro para los arrendatarios; el poder político, nunca perdido del todo por los sectores terratenientes, se encontraba ahora más firmemente que nunca en sus manos y en efecto en los primeros años que siguen a 1930 los desalojos de arrendatarios a los que la crisis no permite cumplir con los términos de su contrato se hacen en exceso frecuentes. Sin embargo, el balance de la época conservadora no es —desde la perspectiva de los cultivadores en tierra ajena— tan desfavorable como habría podido temerse. Esto ocurre porque la crisis los ha colocado ya al borde de la imposibilidad de continuar produciendo; estando así las cosas, es interés esencial de los sectores terratenientes —y de los dirigentes de la economía nacional, que muy justamente consideran tarea de primera urgencia mantener los saldos exportables— impedir que ese deterioro se agrave. Para ello la restauración no recurrirá (como ya se había hecho en 1912, bajo el impacto de otra crisis) a transformar los términos de la relación entre cultivadores y terratenientes; intervendrá con una energía y un espíritu de sistema antes desconocidos en la comercialización, fijando precios de sostén y asegurando así que el ingreso de los cultivadores de cereales no bajará a niveles que los obliguen a retirarse del mercado. Sin duda, su condición de comunes beneficiarios de la política de precios no crea por el momento ninguna solidaridad entre terratenientes y arrendatarios; estos últimos aprecian poco el beneficio sólo negativo que el sistema les proporciona y sienten muy vivamente —en la situación de penuria en que a pesar de todo se encuentran— la presión de los dueños de la tierra, que no se rehusan a paliar las consecuencias que para ellos ha traído la crisis buscando transferirlas a los cultivadores. Y por otra parte el hambre de tierras (de tierras propias, pero —en zonas de población más densa— aun de tierras para cultivar bajo cualquier régimen) se traduce en un antagonismo que sólo espera el estímulo de un orden político menos celosamente defensor del *statu quo* para revelar su hondura. Aun así, año tras año, la fijación de los precios de sostén provoca la ocasional unanimidad de la zona cerealera; de este modo se anticipa, pese a las oposiciones que vienen de atrás y que la restauración acentúa, una solidaridad que abarca a toda la Argentina del cereal y la opone al país urbano al que la industrialización está dando peso creciente; también en este punto los cambios aportados por la restauración anticipan el futuro.

Menos fácil es encontrar huellas de esos cambios en el marco social en que se desenvuelve la ganadería del área pampeana, salvo en los ya evocados conflictos internos al sector dominante. Para los peones de la estancia ganadera el tiempo no pasa; más que las necesidades de la economía ganadera (las de mano de obra son aquí numéricamente reducidas, una legislación social que la hiciera más costosa no afectaría entonces

gravemente las condiciones económicas de la explotación) es el arcaísmo político y cultural que domina el área el que explica esta estabilidad de un sistema de peonaje rural que, si ha desconocido desde su origen los duros perfiles del que predomina en el norte, ofrece de todos modos garantías jurídicas muy limitadas a los trabajadores. ¿Hay aquí también una línea de larvado antagonismo dispuesta a aflorar apenas las circunstancias políticas se hagan propicias? Pocos se atreverían en 1943 a afirmarlo; la disciplina de las peonadas tuteladas por sus patrones se hace sentir de modo demasiado constante en la vida política, aun en las circunstancias más adversas, para que esa transformación parezca probable.

De este modo, pese a que la estricta disciplina impuesta por la Restauración les quitó relevancia inmediata, las tensiones sociales heredadas estaban lejos de haber desaparecido, y a ellas se sumaban las que la adaptación a la nueva coyuntura económica iba provocando. De ellas la que iba a revelar mayor importancia estratégica en las luchas políticas de la etapa que se avecinaba era la agudizada por la urbanización y la industrialización; de allí que la visión apocalíptica de una Argentina transformada hasta sus raíces por las multitudes que desde los rincones más arcaicos del país acudían a poner silencioso sitio a la Capital (ya fuera visto el proceso negativamente como un "aluvión zoológico", ya positivamente como el retorno a una línea vernácula que medio siglo de crecimiento hacia fuera y masiva inmigración europea habían soterrado pero no eliminado) haya tenido tanta aceptación entre quienes vivieron el proceso, antes de encontrarla acaso demasiado plena entre sus estudiosos. Ya la matizada herencia social de la Restauración permite esperar un desarrollo más complejo y, en efecto, las transformaciones que la Argentina va a sufrir una vez clausurada la etapa conservadora no excluyen elementos de continuidad que esa imagen demasiado simple no toma suficientemente en cuenta.

2. UNA REVOLUCION QUE BUSCA SU RUMBO

El 4 de junio de 1943, cuando la coalición gobernante debía proclamar la fórmula presidencial encabezada por el doctor Patrón Costas, que con tanto esfuerzo el doctor Castillo había impuesto a sus discolos correccionarios, estalló finalmente la muy anunciada revolución militar; una proclama evocaba la hondura de la crisis institucional y subrayaba sus aspectos éticos; era en cambio mucho menos precisa para anunciar los remedios que el movimiento preveía para ella. ¿Retorno a la práctica honrada del sufragio universal o eliminación del sistema representativo? Eran ésas de nuevo —como en 1930— las alternativas que el movimiento enfrentaba, y su vaguedad frente a ellas no se debía tan sólo al deseo de no enajenarse, con una prematura franqueza, posibles apoyos; provenía de la perplejidad tanto como de la duplicidad de los dirigentes de la jornada. No era ese el único punto en que la perplejidad reinaba; sin duda entre los oficiales que apoyaban a la revolución los más eran apasionadamente adictos a la política de neutralidad (y reprochaban sobre todo al presidente Castillo haber ungido a un candidato presidencial decidido a abandonarla). Pero, como se iba a ver bien pronto, estaban también hondamente preocupados por el ascenso del Brasil, que pese a estar gobernado por un presidente-dictador no siempre insensible al ejemplo fascista, desde fines de 1940 se había alineado decididamente sobre la política de los Estados Unidos y hacía de esa alianza el punto de partida para su ascenso a la hegemonía sudamericana.

Muy comprensiblemente, el avance de la nación que nuestro ejército suele considerar enemiga tradicional de la Argentina provocaba en el cuerpo de oficiales actitudes íntimamente contradictorias: voluntad, por una parte, de evitar un acercamiento con los Estados Unidos, que había arbitrado en la vieja puja por la hegemonía en favor de nuestro tradicional adversario, y también tentación reprimida pero nunca totalmente eliminada de imitar a ese adversario en una política que tan rendidora le estaba resultando. Para vencer esa tentación nuestros oficiales encontraban estímulo, por una parte, en la ilusión largamente mantenida sobre la invencibilidad de las potencias fascistas; por otra, en la desconfianza nueva que provocaba la inclusión de la Unión Soviética como socio de pleno derecho de la alianza antifascista; el anticomunismo seguía siendo —iba a seguir siendo por mucho tiempo— el elemento más estable de la cambiante visión del mundo de nuestros militares.

Una proclama secreta —y acaso apócrifa, pero bien pronto tan difundida como la pública— mostraba muy claramente ese trasfondo del movimiento revolucionario; ella lo declaraba el punto de partida de una lucha por la hegemonía en Latinoamérica, que sólo podría concluir en victoria si un régimen autoritario imponía decididamente a las masas sacrificios cuyo peso, según se sabía de antemano, no sería espontáneamente aceptado; el ejemplo de las potencias fascistas, que no sólo habían superado las consecuencias de la crisis económica sino también logrado, gracias a su nueva disciplina política, un vertiginoso ascenso al poder mundial, era allí explícitamente evocado para justificar esa propuesta renovación política.

Para sectores enteros de la opinión pública, esa proclama secreta daba una versión más sincera que la pública de los proyectos de los dirigentes revolucionarios. No faltaban, en efecto, motivos para creerlo así; ella era supuestamente expresión de una organización clandestina —el COU— que, al calor del auge neutralista, había llegado a dominar al cuerpo de oficiales. Pero bien pronto los nuevos gobernantes demostraron advertir muy bien que las vacaciones impuestas a la democracia representativa no los eximían de la necesidad de buscar apoyos entre sus gobernados; en esas condiciones los avances del autoritarismo no podían ser acompañados por los de la proyectada austeridad. Si el nuevo gobierno no se prohibió lanzar sobre todo el país una ola de moralización administrativa y privada, que no estuvo libre de modalidades ridículas, nada quiso menos que sacrificar el bienestar popular a sus ambiciones de hegemonía sudamericana: por lo contrario, bien pronto se dieron los primeros pasos por el camino que menos de dos años después de esa austera invocación del sacrificio colectivo llevaría al presidente Farrell a oponer a las cuatro libertades de

las Naciones Unidas las tres libertades argentinas; a saber, la de comer, la de beber y la de divertirse. . . Como notaba una norteamericana cuyos modestos ingresos le permitieron conocer por propia experiencia las perspectivas de la pequeña clase media de Buenos Aires, "las autoridades militares desarrollaron una técnica muy efectiva para tener tranquilo al público; pocas veces el 'hombre común' encontró tanta solicitud para su bolsillo. A veces, yo misma desarrollé sentimientos afectuosos hacia la dictadura militar, especialmente cuando el dueño de casa vino a verme para decirme que mi alquiler había bajado el 15 por ciento".

Esos expedientes destinados a ganar rápida popularidad no configuraban sin embargo una política, y durante meses el gobierno pareció no tener ninguna. Tres días después de la revolución el general Rawson, al que ésta había hecho presidente provisional, debía dejar ese cargo: la elección de dos ministros demasiado cercanos a la causa del Eje había provocado cierto escándalo en el país y en los Estados Unidos, cuya benevolencia el gobierno provisional no había renunciado aún a ganar. Lo reemplazó el general Ramírez, que como ministro de Guerra hasta el 4 de junio había asegurado al GOU posiciones dominantes en el ejército y contaba con el apoyo de esa influyente y ya apenas secreta asociación.

El gobierno de Ramírez enfrentó las mismas alternativas que el de Castillo, y frente a ellas se mostró por el momento dispuesto a perseverar en la política de neutralidad. Esto le confirmó la adhesión de la prensa nacionalista y neutralista, que tras haber prodigado sus elogios al gobierno de Castillo no era la menos severa en la expresión de su condena moral contra ese régimen de corrupción que el movimiento militar había relegado al pasado. Sin duda, en esos primeros meses de régimen militar, los partidos políticos no se mostraban tampoco dispuestos a tomar la iniciativa de un distanciamiento que de todos modos parecía cada vez más inevitable. Pero, también para ellos, la piedra de toque para juzgar al nuevo gobierno estaba en su política exterior; a esa altura en el desarrollo del conflicto mundial, ninguna fracción de los partidos tradicionales (excepto la intransigencia radical) estaba dispuesta a acompañar activamente la de neutralidad.

¿Era ésta definitiva? El ministro de Relaciones Exteriores sugería en todos los tonos que no; el presidente, de modo más prudente y privado, parece haber dado a la diplomacia de Estados Unidos promesas precisas de ruptura con el Eje. El 14 de agosto, sin embargo, era entregada al secretario de Estado, Hull, una carta en que el canciller argentino explicaba por qué la ruptura era imposible y pedía de los Estados Unidos un gesto amistoso consistente en el urgente envío de armamentos mo-

demons para rehacer el equilibrio militar sudamericano. El 30 de agosto una despiadada respuesta de Hull negaba esos auxilios; una vez publicada la singular correspondencia, su iniciador debió renunciar, después de tomar sobre sí toda la responsabilidad del episodio (Ramírez, que había participado en la redacción de la carta de su canciller Storni, quedaba entonces en libertad de desvincularse de las que llamaba “expresiones confidenciales de un funcionario”).

Así el país aparecía confirmado en la política de neutralidad; el presidente (limitado en su libertad de movimientos porque el apoyo de la *clique* de oficiales neutralistas, que lo había instalado en el gobierno, seguía siéndole indispensable) no dejaba de advertir sin embargo que esa política iba haciéndose insostenible; tras formular algunos vagos pronunciamientos acerca de las bellezas de un régimen de libertad, parece haber incitado a un grupo de políticos, intelectuales y jefes sindicales a solicitarle públicamente definición más precisa mediante un manifiesto en que esas figuras adherían a la democracia representativa y una política de solidaridad americana. La reacción oficial y oficiosa a esta iniciativa fue en extremo violenta; a juicio del gobierno los firmantes eran gentes que no querían resignarse “a expiar en silencio su falta de lealtad para con el país”. El 16 de octubre eran destituidos todos los funcionarios incluidos en el grupo, entre ellos no pocos profesores universitarios. De este modo el intento, tibiamente apoyado desde la más alta magistratura, de suscitar en el gobierno una definición en favor de la liberalización interior y el alineamiento internacional junto con las Naciones Unidas acercaba a ese gobierno a la solución opuesta.

A partir de este episodio la estrella de Ramírez comenzó visiblemente a palidecer; por encima del presidente eran los coroneles del GOU, que esperaban encontrar instrumento más dócil en el general Farrell, llevado al ministerio de Guerra y a la vicepresidencia de la República, los que hacían sentir cada vez más su influjo. Entre ellos sobresalían sobre todo el coronel Ramírez, jefe de la policía federal, el coronel González, jefe de prensa, y el coronel Juan Domingo Perón, titular desde fines de octubre de la recién creada secretaría de Trabajo y Previsión, y por añadidura subsecretario de Guerra. A mediados de noviembre, una entrevista concedida al *Mercurio* de Santiago mostraba a Perón como el poder detrás del trono, a la vez que lo colocaba entre los defensores del mantenimiento estricto de la política de neutralidad. La trayectoria anterior de Perón lo mostraba menos alejado que sus compañeros del GOU de las experiencias políticas llevadas adelante en la Argentina de la restauración. Revolucionario de 1930, no había formado entre los adictos al general Uriburu, sino entre los que, bajo la dirección del general Sa-

robe, empujaron el retorno a la normalidad del que iba a ser beneficiario el general Justo. Bajo el gobierno de éste, y antes de tomar a su cargo misiones en el extranjero que lo llevaron a Chile y luego a la Italia fascista de 1939-41, Perón fue secretario del ministro de Guerra y mantuvo en carácter de tal estrechos contactos parlamentarios. Sin duda, esas experiencias no le habían dejado ninguna nostalgia de la etapa clausurada por la revolución de junio ni de las instituciones representativas, pero le proporcionaron por lo menos una experiencia que le permitía tener de ellas (y de sus propias posibilidades políticas dentro del marco que ellas proporcionaban) una imagen más sobria y matizada que la del común de sus camaradas. Acaso se relacione con ello su discreta oposición a la disolución de los partidos políticos, dispuesta el último día del año 1943. Cuando esta medida se tomó, ya el gobierno había avanzado mucho en la instauración de un régimen autoritario. Había aplicado con más energía el heredado estado de sitio, no sólo multiplicando las prisiones de reales o supuestos comunistas, sino utilizándolas como medio de aligerar presiones sindicales; como en 1930, a la ola de detenciones correspondía el auge creciente de la tortura... Por otra parte se tomaban medidas tales como la disolución o intervención de asociaciones (las de adictos a las Naciones Unidas solían correr el primer destino, las sindicales el segundo), la censura de prensa y radio y la transformación de esta última en vehículo de una literatura inspirada, caracterizada por su estilo altisonante y su extrema confusión de ideas, atribuida por algunos al



Fig. 7.6. Perón en el Consejo Nacional de Posguerra, abril de 1945 (Archivo General de la Nación).

deseo del gobierno de mantener alguna ambigüedad en cuanto a sus propósitos, y por otros a una muy sincera perplejidad por parte de adictos al nuevo orden mundial que sólo hallaban posibilidad de proclamar sus fervorosas convicciones cuando ese orden entraba en su temprana agonía.

La disolución de los partidos políticos (acompañada por la introducción de la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas) venía entonces a anticipar la línea política que iba a ser dominante a lo largo de 1944, cuando ya había perdido su dimensión internacional, al romper la Argentina sus relaciones con el Eje en febrero de 1944, luego de que los servicios de las Naciones Unidas descubrieran que funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino formaban en las filas de organismos rivales alemanes. Pese a que la ruptura fue resultado de una decisión colectiva, en la que participaron las figuras más representativas del círculo de coroneles neutralistas, la reacción entre los sectores adictos a la neutralidad —que fue muy intensa— fue utilizada por ese círculo para librarse del ya molesto Ramírez; una solicitud dudosamente espontánea de éste permitió reemplazarlo por Farrell, primero interina y luego (marzo) definitivamente. Ya para entonces era evidente que las Naciones Unidas estaban decididas a aprovechar el nuevo cambio de titular del poder para retirar su reconocimiento del régimen militar argentino. El año 1944 transcurrió entonces en medio de una severa cuarentena diplomática; ni los países del Eje ni la mayor parte de sus enemigos mantenían ya relaciones con Buenos Aires.

Ello anuló las posibilidades que para un cambio de rumbo traía consigo la ruptura con Berlín. Por lo contrario, la línea autoritaria fue mantenida y acentuada, y celebró ostentosamente su victoria en una exposición que conmemoraba el primer aniversario de la revolución de junio en medio de un despliegue escenográfico evocador del que las circunstancias estaban poniendo fuera de moda en Europa; no faltaban tampoco allí las máximas que unían al influjo de un Nietzsche algo deteriorado por el excesivo uso, otros mucho más tradicionales, que se manifestaban por ejemplo en la alternativa propuesta a las muchachas argentinas, cuyos dos términos eran la maternidad y el convento. Movidó por esta doble inspiración el gobierno hacía una guerra cada vez más activa contra las ideas que uno de sus más entusiastas servidores declaraba bebidas en las aguas cenagosas del Sena; en suma, contra toda la tradición liberal que —pese a las laboriosas tentativas de inventar retrospectivamente otras— es la única que ha conocido la Argentina independiente (y que en muy poco se opone —contra lo que quieren otras fantasías simétricas— al vigoroso autoritarismo vernáculo). Fue esa compleja inspiración la que guió la política revolucionaria en el

campo de la enseñanza, desde la universitaria hasta la elemental; en la primera se sucedieron los más desconcertantes renovadores-restauradores, a menudo no menos ignorantes de las tradiciones que se proponían implantar que de las que combatían (uno de los más autorizados voceros del nuevo régimen en la Universidad demostró confundir a Santo Tomás de Aquino, cuyo exaltado panegírico tejía, con el desconfiado apóstol cuyo nombre llevaba); en la segunda el doctor José Ignacio Olmedo matizó sus declaraciones de principios, de las que tampoco fue avaro, con una tarea depuradora que afectó a algunos centenares de maestros, destituidos porque sus ideas o su origen no eran del agrado del señor intervector.

El avance de la corriente autoritaria correspondía por otra parte al aumento del influjo de Perón, que luego de sus veleidades de disidencia parecía dispuesto a utilizar al máximo el retorno ofensivo de los coroneles neutralistas: a mediados de febrero encabezaba al pelotón de oficiales que expulsaba del edificio del ministerio al canciller al que ahora se hacía responsable de la ruptura con el Eje; el 26 de ese mes era ministro de Guerra; en marzo la disolución del COU, en cuyo seno la superioridad jerárquica de los generales le había impedido enfrentarlos abiertamente, hizo que como jefe del grupo menos institucionalizado pero más homogéneo de los coroneles, quedara cada vez más resueltamente dueño del campo; en julio ocupaba la vicepresidencia, y ya para entonces muchos reemplazos en los altos mandos colocaban a sus adictos, ascendidos oportunamente al generalato, en situación de controlar el equilibrio interno del ejército...

Pero, si no enfrentaba la línea política dominante, y por lo contrario parecía identificarse resueltamente con ella, Perón se reservaba a la vez un campo en el que llevaría adelante su propia política: era el obrero y sindical. Sin duda esa política encontraba estímulo tanto en la tendencia a buscar adhesiones otorgando ventajas concretas que había mostrado desde sus comienzos el gobierno militar, cuanto en los aspectos genéricamente anticapitalistas de la propaganda fascista, que no dejaron de tener eco entre los coroneles argentinos (pero —en cuanto a esto último— Perón demostró desde el principio sólo moderado interés en las luchas contra los monopolios de comercialización y servicios públicos, y aun más escaso empeño en el desenmascaramiento de sus actividades corruptoras, que a menudo estaban lejos de ser imaginarias; en la política social vio un medio de ganar amigos más bien que adversarios, y con ese criterio la orientó). Sin duda, las circunstancias contribuyeron a facilitar su éxito: la revolución de 1943 encontró a la Confederación General del Trabajo dividida en dos fracciones; mientras la llamada número 2, que

contaba con los sindicatos más politizados (los de obediencia comunista y la mayoría entre los socialistas) era víctima favorita de la persecución oficial, la llamada número 1, cuyo sindicato más influyente era la Unión Ferroviaria, comenzó por contar con mayor libertad. Desde octubre, Perón iba a inaugurar una política más matizada, buscando adhesiones sin tomar en cuenta la trayectoria anterior de quienes se le acercaban; ese extremo realismo tuvo su manifestación acaso más clamorosa cuando, ante una demasiado vigorosa huelga de los obreros de frigoríficos, su dirigente, el comunista Peter, fue traído desde la cárcel de Neuquén en avión del ejército y logró volcar a la asamblea del gremio en favor de la vuelta al trabajo. Con todo, el episodio es poco representativo de las relaciones más usuales entre la Secretaría de Trabajo y Previsión y los dirigentes de extracción comunista, y aun en este caso el solicitado concurso de Peter fue utilizado luego para socavar su prestigio en el gremio, mostrándolo incurso en blandura frente a la parte patronal, y favorecer así a grupos disidentes, antes cercanos al socialismo, que se mostraban dispuestos a organizar un sindicato rival para hacer desde él la política del secretario de Trabajo. No fue este el único caso, por cierto, en que éste usó como elemento de negociación la libertad o la prisión de dirigentes sindicales; esa desprejuiciada elección de recursos no basta sin embargo para explicar que haya llegado a contar tan prontamente con adhesiones tan numerosas entre ellos.

¿Eran éstas —como propone una versión canónica, que ha encontrado luego amplio crédito— la consecuencia de la presión de una nueva masa en rápido proceso de sindicalización sobre dirigentes que no osaban ignorar sus inclinaciones? No parece demasiado evidente: la reorientación de las bases sindicales (dejado de lado el problema de la parte que en ella tuvieron los reclutas más recientes de sus organizaciones) no fue previa sino posterior a la aparición de un grupo de dirigentes de antiguo arraigo dispuestos a colaborar con el nuevo secretario de Trabajo. Seis meses después de su instalación en la Secretaría, Perón podía exhibir, en ocasión de un discurso de 1º de mayo, un sólo discreto séquito obrero, pero uno mucho más impresionante de líderes sindicales. . . ¿Cuál era la causa de ese éxito? En cuanto a los dirigentes, por lo menos una de las razones se vincula con la experiencia acumulada durante la Restauración, y la evidente insuficiencia de las orientaciones que frente a ella les habían dado los movimientos políticos con los cuales se vinculaban.

En particular el socialismo (que había renunciado —aun como ficción— a toda vocación revolucionaria, pero no a mantener un orgulloso aislamiento frente a los partidos que había juzgado burgueses y a los que ahora condenaba sobre todo por su carencia de programa

definido y su bajo nivel de moral política) imponía a los jefes sindicales de su orientación una disciplina política tan rigurosa como estéril, que ni aun era premiada con avances en la jerarquía del propio partido, siempre desconfiado de figuras que podrían eventualmente contar con bases propias y quebrar el dominio hasta entonces conservado por el grupo fundador, sólo dispuesto a ampliarse por cooptación. No es casual que hayan sido dirigentes socialistas de sindicatos ya poderosos antes de 1943 (de Empleados de Comercio, de Empleados del Estado, de Prensa) los que primero se exhibieron en los actos organizados en la nueva secretaría; no es verosímil que entre los afiliados de esos sindicatos de clase media hayan abundado los migrantes internos, que como un salvaje viento —barbarizador o purificador— estarían cambiando la orientación del sistema sindical argentino.

Pero no sólo para los dirigentes de extracción socialista la tentación de participar en la redistribución del poder político que la revolución de junio había abierto era muy intensa; los formados en la escuela de un sindicalismo en el cual la bandera del apoliticismo había ido perdiendo desde hacía décadas sus connotaciones revolucionarias y había permitido abundantes contactos informales con gobiernos interesados en contar con la benevolencia sindical, no habrían de encontrar motivo para no perseverar en esa actitud abierta al encontrar frente a sí a un gobierno más receptivo que cualquiera en el pasado, y que por cierto no exhibía en su trato con dirigentes obreros la misma intolerancia ideológica de que hacía gala en otros campos.

Si para los dirigentes sindicales la aproximación al nuevo centro de decisión política que era la Secretaría de Trabajo implicaba una reorientación menos dolorosa de lo que gustaban suponer tanto los dirigentes políticos que los habían creído indefinidamente sometidos a su tutela, como los sectores de clase media que veían en el aparato sindical un seguro y poco exigente apoyo para sus propias ambiciones de democratización política, los obreros —sindicalizados o no— tampoco tendrían que vencer una dura resistencia interior para identificarse con la política de la nueva secretaría. El autoritarismo, en cuanto dejaba amplios márgenes a la arbitrariedad y la brutalidad, podía no ser de su agrado; aun así, es preciso tomar en cuenta que sus rasgos negativos eran menos novedosos para los sectores obreros que para los que —desde otros niveles sociales— luchaban ahora más activamente por objetivos políticos o de cualquier orden. Aun el gobierno de Yrigoyen —el más popular que había conocido el país— había intervenido en represiones sangrientas de movimientos obreros, y ni aun esa barrera de sangre impidió que

las relaciones entre ese gobierno y las organizaciones sindicales conocieran luego etapas de notable cordialidad. La revolución de 1930 había inaugurado un período de persecuciones indiscriminadas, atenuadas luego pero nunca totalmente interrumpidas, en las que alcanzó su paroxismo la hostilidad de principio del poder político hacia toda forma de militancia obrera. A todo eso había tenido que acostumbrarse el movimiento sindical: incapaz de quebrar el orden político vigente, debía conquistar dentro del marco que él le brindaba, y cuidando cada vez más escrupulosamente de no mostrar hacia él ninguna hostilidad abierta, victorias siempre modestas y precarias. Cuando ese dispensador de tantos males que era el Estado pareció mostrar de pronto un rostro más benévolo nada tenía de extraño que las prevenciones se atenuaran rápidamente. Esa benevolencia se tradujo por otra parte en medidas muy concretas: el mecanismo de negociación de convenios colectivos adquirió mayor efectividad; las normas sobre despidos aseguraron indemnizaciones por el momento muy considerables; en los convenios comenzaron a introducirse cláusulas sobre vacaciones pagadas; la ampliación del sistema jubilatorio incluyó en él a empleados y obreros de industria y comercio. Todas esas innovaciones eran presentadas como aspectos de una demasiado tardía reparación que el país debía a sus clases trabajadoras, que eran invitadas a verse a sí mismas como una parte de pleno derecho del cuerpo nacional. Sin duda —por lo menos al principio— toda noción de antagonismos de clase era enérgicamente descartada de la propaganda oficial; a medida que el antagonismo se hacía presente en los hechos, esa propaganda debía recogerlo, y supo hacerlo en forma ideológicamente poco coherente pero extremadamente sugestiva para sus destinatarios. Utilizando un término tradicional en nuestra política (el de oligarquía, primero favorito del radicalismo, muy utilizado a comienzos del siglo XX por el diario *La Prensa*, empleado a partir de 1930 por todas las oposiciones al régimen restaurado) se buscaba dar de los adversarios que la nueva política social encontraba en su camino una caracterización menos social que política y aun ideológica. Pero los destinatarios de esa propaganda tendían a identificar a la oligarquía con los sectores altos en su conjunto, y a asignar dentro de ella un lugar muy importante al empresariado industrial, que en los hechos estaba sólo parcialmente integrado en ella, pero que aparecía como el principal antagonista para la clase obrera en ascenso.

De este modo la nueva tendencia aparecía para sus beneficiarios como un distribucionismo que, sin poner en tela de juicio la estructura de clases, se proponía mejorar la parte que tocaba a la trabajadora en la repartición del ingreso. La apelación a una empresa nacional común, capaz de cancelar las oposiciones de clase, que en las tentativas más

elaboradas de dotar de una ideología al naciente movimiento político tiene lugar primordial, no figuró por cierto del mismo modo entre los motivos concretos de adhesión a él; el movimiento de unanimidad nacional que debía cumplir la hazaña de incluir en sus filas a una clase obrera hasta entonces poco dispuesta a identificarse con movimientos políticos policlasistas, se disponía a resolverse en un movimiento a la vez muy poco revolucionario y muy sólidamente enraizado en una perspectiva de clase. ¿Por qué era así? Puede decirse que esto se debía en parte a la gravitación conservada por la tradición socialdemócrata que era la más poderosa en el movimiento obrero, y que pese al personalismo bien pronto adoptado por el nuevo movimiento (que lo aleja en este aspecto de ella) sigue gravitando fuertemente en la imagen que ese movimiento se hace de la sociedad en que incide y de su concreta función dentro de ella: tal como confesó melancólicamente el doctor Repetto, la conquista de la clase obrera por el peronismo fue facilitada por una tradición previa en que la lucha de clases era vista como combate por avances limitados en el ingreso y otras ventajas marginales.

Pero si las tradiciones del movimiento obrero tuvieron sobre el peronismo una influencia a la vez casi clandestina y determinante, ello se debió a que el esfuerzo exitoso de captación de ese sector social no fue acompañado por otros igualmente afortunados sobre otros. Sin duda, el favorecimiento de los obreros industriales no debía, por lo menos en pura teoría, provocar antagonismos en los sectores terratenientes. Sin embargo estos antagonismos surgieron con gran fuerza, y por razones muy comprensibles. En primer lugar, existía ya en la Argentina una conciencia —aún vaga— de la contraposición de intereses entre sectores rurales y urbanos; ésta, que a largo plazo sería decisiva, no podía ser sin embargo determinante en perspectiva corta. Más influyente era el cerrado conservadorismo de esos sectores terratenientes, vivamente alarmados ante cualquier transformación del equilibrio social, aunque no los afectase directamente. Pero el hecho decisivo fue que el gobierno militar no respetó por entero el predominio del sector terrateniente sobre la economía y la sociedad de la Argentina rural. El estatuto del peón no sólo obligó a casi duplicar los salarios de los peones rurales; introdujo —por lo menos en teoría— la influencia de la Secretaría de Trabajo y de la sindicalización (que en los hechos nunca iba a alcanzar vigor) en ese sector de trabajadores hasta entonces incluidos en un sistema de relaciones sociales extremadamente arcaico. El estatuto del peón desmentía sobre todo la orgullosa pretensión de nuestros terratenientes de ser dueños en su propia casa. La reforma de las normas sobre arrendamientos fue más allá, al afectar progresivamente sus intereses económicos, congelando el monto del canon pagado por la tierra, en una etapa de ininterrumpida inflación.

No más afortunado estuvo el gobierno militar con la vasta clase media. Por cierto sectores enteros de ella (sobre todo de la baja) fueron ganados por las muy concretas ventajas que el nuevo trato social también les ofrecía; sin embargo, aun para esos sectores, la adhesión al incipiente movimiento peronista no se daba sin desgarramientos y conflictos interiores, debidos en parte al tono extremadamente popular que el séquito peronista estaba ya mostrando, en parte a los elementos política e ideológicamente chocantes que el peronismo arrastraba consigo desde su origen a partir de un movimiento militar autoritario y filofascista. Si —como lo iban a revelar los resultados electorales— una parte importante de la clase media iba a dar su apoyo al peronismo, ese apoyo era menos militante que la oposición de una fracción más numerosa de ese sector social, y tampoco era casual que se expresara sobre todo en un voto cuyo carácter secreto estaba garantizado por la ley: si no había desde luego ningún riesgo en manifestar adhesión a un movimiento político surgido y crecido con apoyo del gobierno, para buena parte de la clase media argentina —aun la peronista— había en ello algo de vergonzoso, en cuanto implicaba la renuncia a una tradición constitucionalista con la que la mayor parte de esa clase media se sentía hondamente identificada, y —de manera aun más evidente— una suerte de traición frente al enemigo de clase, que (a medida que el peronismo, en su política y más aún en su propaganda, se hacía expresión en los sectores populares) tendía a buscarse en éstos más bien que en los altos. Pero esa resistencia de las clases medias a confluír en el movimiento peronista era todavía acentuada por la coyuntura misma en cuyo marco el peronismo estaba surgiendo dentro del sistema político argentino: la revolución de junio, cualquiera que fuese su desenlace, había comenzado por deshacer —sin reconstrucción posible— los mecanismos políticos que habían dado durante trece años la hegemonía a sectores conservadores minoritarios; la frase de Perón —destinada a ser infinitamente repetida por su aparato de propaganda— según la cual con la revolución la era del fraude había terminado era, más bien que una promesa, la comprobación de un hecho irreversible. Pero, estando así las cosas, nada era más conveniente —desde la perspectiva de las clases medias argentinas— que un congelamiento de las constelaciones políticas formadas en la etapa ya superada; en ella, en efecto, las oposiciones habían encontrado un terreno común en la aspiración al pleno régimen constitucional, o sea a la entrega de la conducción política a partidos de clase media.

Los hechos posteriores a junio de 1943 parecían abrir un camino para lograrlo: sin duda el régimen militar pensaba por el momento muy poco en restauraciones constitucionales, pero eso estaba lejos de ser una desventaja para sus adversarios, ya que la rápida evolución de la coyun-

tura internacional estaba haciendo cada vez más inactual el marco en que los coroneles argentinos habían buscado inscribir la construcción de un Estado autoritario, votado a la conquista de la hegemonía sudamericana. Cuanto más perseverara el gobierno militar en ese sueño ya anacrónico, peor preparado estaría para la hora inevitable de la normalización institucional, que podría así traducirse en el triunfo de los que durante más de diez años habían puesto sitio demasiado pacífico a la restaurada fortaleza conservadora. Aun la disolución de los partidos políticos parecía favorecer involuntariamente las posibilidades de esa clase media; en lugar de la máquina radical, que ponía a una clientela excesivamente plebeya al servicio de dirigentes a veces reclutados en los sectores más arcaicos de nuestras clases altas tradicionales, en lugar de ese partido de clase media con el cual nuestras clases medias nunca lograron identificarse plenamente, enfrentaban ahora al gobierno organizaciones que eran expresión más directa de ellas, desde los colegios profesionales nacionales y provinciales hasta asociaciones culturales y centros de comerciantes de pequeñas ciudades provincianas, cuyos conflictos con los prepotentes agentes locales del nuevo orden recibían una difusión periodística que solía incitarlos a actitudes cada vez más altivas. Sin duda, a medida que se perfilaba con mayor nitidez la política social del nuevo régimen, esa resistencia surgida en los sectores medios encontró reclutas cada vez más entusiastas en otros más altos: en 1944, en la hora en que el péndulo político se inclinaba más decididamente hacia la derecha, el celo de una policía lanzada a la caza de rojos llevó a la captura del doctor Antonio Santamarina, veterano dirigente conservador de la provincia de Buenos Aires, de pasado ortodoxamente oligárquico y fraudulento, que, encontrando en ello un recurso de buena guerra, buscaba hostigar al gobierno otorgando apoyo financiero y político a la propaganda del prohibido Partido Comunista. Esa actitud individual presagiaba otras colectivas: las organizaciones de hacendados y empresarios bien pronto iban a bajar, envueltas en su ambiguo prestigio que las hacía más temidas que respetadas, a la liza política, incorporándose a esa lucha por la plena democratización política que en el pasado las había dejado por lo menos indiferentes. Esos reclutas inesperados parecían animar más bien que inquietar a los que se consideraban seguros beneficiarios del proceso: la súbita conversión de los que habían proporcionado la base política y social para la restauración conservadora parecía revelar que también para ellos esa etapa estaba clausurada, y que se trataba ahora de adecuarse a la nueva coyuntura mundial reiniciando la experiencia democrática brutalmente interrumpida en 1930.

Con la victoria aparentemente al alcance de su mano, la oposición de clase media no podía ver sin cólera la mutación por la cual del austero

autoritarismo militar comenzaba a surgir un inesperado movimiento político, destinado a arrebatarle ese apoyo popular que había considerado hasta entonces totalmente seguro; la restauración del sufragio universal podía entonces no significar su propio ascenso a la hegemonía política. No es extraño que la intolerancia hacia el heredero político de la revolución de junio no haya disminuido con el abandono progresivo por parte de éste de las posiciones iniciales del movimiento; por lo contrario, cuanto menos ortodoxamente fascista se mostraba, más arreciaban las protestas contra su fascismo, que hacía impensable reconocerle un lugar legítimo en el marco de la futura restauración democrática.

Tal como los hechos iban a revelar bien pronto, las esperanzas que por un momento animaron a buena parte de nuestras clases medias eran demasiado exaltadas; su optimismo algo ciego nacía en parte del brusco cambio del panorama mundial; las derrotas alemanas, que por cierto no escasearon a partir de 1943, desmentían puntualmente las moralejas propuestas por los admiradores locales del nuevo orden a partir de sus anteriores triunfos; esa Argentina clericalfascista, carnavalesca y truculenta pesadilla de un momento, parecía desvanecerse espontáneamente, condenada, más que por los golpes de sus adversarios, por el dictamen de la historia universal. La convicción de representar la marcha misma del proceso histórico, que comenzó por dar algo de su imprudente arrogancia a los adversarios de la tradición liberal argentina, pasaba ahora a sus adictos; junto con ella iba la seguridad de que el destino nacional se estaba decidiendo a orillas del Volga. ¿Qué camino hallaría el frente victorioso en el conflicto mundial para dar su signo a la solución de la crisis política argentina? He aquí una pregunta nunca explícitamente planteada por quienes con tanta confianza se disponían, en 1944 y 1945, a guardar una estricta intransigencia frente al gobierno militar, a la espera de convertirse en los beneficiarios de su inevitable derrumbe. Esta implícita confianza venía en parte de que los nuevos dirigentes a los que la disolución de los partidos (unida a la extrema prudencia de algunos de los jefes de éstos) había dejado en primera fila no tenían experiencia política concreta; por lo contrario más de uno de los dirigentes tradicionales mantuvo desde muy pronto reservas sobre el desenlace del proceso, si no por otra cosa por lo que su experiencia le enseñaba sobre los instrumentos de triunfo con que puede contar en la Argentina cualquier gobierno, si está dispuesto a usarlos.

De este modo la búsqueda de apoyos en el cuerpo social llevaba a éxitos más amplios de lo esperado en un sector, y fracasaba sustancialmente en otros; la clase obrera, en la que se veía al comienzo un bloque cuya hostilidad era preciso vencer, incorporándolo a un alineamiento más

vasio, corría riesgo de transformarse en el único apoyo homogéneo para una solución política heredera de la revolución de junio. ¿No había en ello algo de alarmante para un cuerpo de oficiales cuyos sentimientos socialmente conservadores, aunque matizados por motivos antiimperialistas recogidos a veces de la propaganda fascista, no podían ser ignorados? ¿No lo había también para una Iglesia dispuesta a transformarse en columna del régimen, y que en el pasado no había visto sin recelo el surgimiento de tendencias socialcristianas, sin embargo moderadísimas, en su propio seno? ¿Cómo esa política social, que bien pronto fue olvidando las justificaciones que la presentaban como alternativa al aumento de la peligrosa discordia social, y se disponía por lo contrario a atizar esa discordia, políticamente rendidora, pudo contar con el apoyo de quienes se consideraban guardianes de un orden social definido con criterios extremadamente conservadores? Para entenderlo es preciso recordar dos órdenes de situaciones, el primero de alcance muy amplio, el segundo muy limitado.

Para nuestros fautores del orden, la victoria de las Naciones Unidas, de la que les resultaba cada vez más difícil dudar, significaba un alarmante aumento de poder de la Rusia comunista, y por lo tanto una actualización de esa amenaza bolchevique en cuya gravedad para la Argentina habían creído durante dos decenios con una fe que los hechos —o mejor, la ausencia de ellos— nunca lograron hacer vacilar. Para una Iglesia que había dedicado tenaces y recientes esfuerzos a combatir la acción protestante, la presencia de Gran Bretaña y sobre todo de Estados Unidos en el bando vencedor estaba lejos de ser vista como una garantía; para el cuerpo de oficiales, objeto predilecto de la propaganda alemana, el creciente filosovietismo que ahora exhibía la americana parecía confirmar las anticipaciones de aquélla sobre la alianza inevitable de las plutocracias y el comunismo, destinada a abrir paso al triunfo del segundo. Pese a que muy poco en su experiencia más inmediata parecía sugerirlo, para estos grupos la urgencia de oponer una alternativa al creciente prestigio del comunismo era cada vez mayor, y la gravedad de los tiempos impedía mantener ciertas delicadezas en la elección de los instrumentos políticos adecuados para ello: la más odiosa de las demagogias podía ser preferible a un sincero programa de subversión social.

Al lado de esta perspectiva abierta por el desenlace ya cercano del conflicto mundial, que —como se ve— no dejó de influir en sector alguno del espectro político y social argentino, había otras más limitadas pero acaso igualmente determinantes: esas fuerzas del orden se habían identificado demasiado con el experimento comenzado en junio de 1943

como para poder abandonarlo sin daño. La sobria elegancia con que sectores enteros de nuestra clase política conservadora, y más de una figura dirigente de nuestra economía, habían dejado atrás algunos lustreros de coqueteos con el fascismo para asumir el papel de severos fiscales de la democracia resultaba difícil de imitar bajo la mirada implacable de los no pocos adversarios ganados durante las gárrulas tentativas de construir una versión local del nuevo orden fascista a partir de 1943. A esa dificultad se agregaban otras igualmente comprensibles. Aun la Iglesia, tradicionalmente disciplinada bajo el gobierno de sus obispos, estaba ahora atravesada de disidencias, que iban a ser resueltas, junto con otras más clamorosas, por el curso general de la crisis política; del desenlace de ésta dependía que esos prelados que tan cerca se habían colocado del régimen militar, y habían obtenido de él ventajas profusamente agradecidas, fueran considerados eclesiásticos dominados por un legítimo celo pastoral o —tal como denunciaban cada vez más públicamente algunos de sus díscolos fieles— sacerdotes excesivamente mundanos, dispuestos a identificar a la Iglesia con causas temporales acaso aún más discutibles que las opuestas.

Para el cuerpo de oficiales —y sobre todo para sus figuras más influyentes— la perspectiva de un derrumbe del régimen militar se presentaba aún más alarmante. Depurado varias veces, y en dos oportunidades recientes en profundidad, cada una de esas operaciones (conducida con criterio abiertamente político) había dejado su tendal de víctimas; esos oficiales postergados en el ascenso o prematuramente retirados no esperaban sino un nuevo cambio de la coyuntura política para alcanzar una rehabilitación que cualquier gobierno surgido no como heredero sino como adversario del militar debía favorecer necesariamente. He aquí una de las razones más decisivas de la solidaridad del ejército con sus creaciones políticas (mantenida pese a las decepciones que éstas suelen proporcionarle), de su hostilidad a todas las restauraciones, de su tendencia —tan frecuente en las horas de crisis— a preferir la fuga hacia adelante. . . En este caso esa tendencia, basada en un sensato criterio de autoconservación, aseguraba un prejuicio favorable para cualquier solución política surgida como continuadora del régimen militar, y una extrema tolerancia para juzgar sus orientaciones concretas. En su condición de militar, el coronel Perón estaba en situación inmejorable para utilizar esta actitud; sus camaradas se resistían a ver en el brillante oficial en que tantos de ellos habían depositado toda su confianza a un peligroso adversario del orden social; acaso no equivocadamente, hasta sus más enconados adversarios se limitaban a reprocharle —aunque a menudo con extrema dureza— una cierta falta de escrúpulos en la elección de los medios adecuados para su encumbramiento, y una alar-

mante habilidad para transformar la empresa colectiva destinada a colocar al país durante una larga etapa bajo la tutela militar en una aventura política estrictamente individual.

El surgimiento del peronismo a partir del régimen de junio no se da súbitamente; a lo largo de 1944, mientras la Secretaría de Trabajo y Previsión ocupa todavía un lugar marginal en la atención colectiva, la mezcla de fascismo, autoritarismo militar y clericalismo seguía dando el tono general de la conducción política argentina. Pero el aislamiento diplomático y el derrumbe de los admirados modelos europeos invitaban a desconfiar del futuro reservado al milenio inaugurado el 4 de junio; ello hizo que —pese a una represión sin duda muy alejada de la usual en la Alemania nazi, con la que gustaban de compararla sus víctimas, pero más intensa que la que durante la restauración conservadora se había revelado suficiente para quebrar los ánimos levantiscos de todas las oposiciones— las expresiones de hostilidad al gobierno se hicieran cada vez más abiertas; en agosto la liberación de París fue motivo para una demostración particularmente impresionante, en que los manifestantes se contaron en la Capital por centenares de miles. La atonía política parecía tocar a su fin, las muchedumbres largamente ausentes (la última ocasión en que se las había visto en parecido número en las calles había sido brindada por la muerte de Yrigoyen, doce años antes) volvían a hacer sentir su peso en el desarrollo de la crisis. Desaparecería así uno de los aspectos del clima creado por la Restauración, y entre los formados en él no eran muchos los que parecían deplorarlo; la lucidez con que el nacionalista Marcelo Sánchez Sorondo iba a señalar, en el reemplazo de las ahora añoradas “discusiones en el Agora” por coléricos coros multitudinarios, gustosos sobre todo de aullar consignas, el signo de un cambio de los tiempos y también una suerte de marca en el muro, no fue por cierto demasiado compartida: la Argentina de la Restauración, desde el segundo plano en que las circunstancias la habían ubicado y que le resultaba particularmente cómodo, parecía tan confiada en el futuro como esa clase media que se había lanzado a una creciente militancia. Es ese un dato esencial para entender el complejo proceso que va a darse; a lo largo de todo él la oposición está firmemente segura de su popularidad, y el gobierno lo está cada vez menos de ella.

Al mismo tiempo, sus posibilidades se restringen progresivamente: debe ahora emprender en la humildad el camino que antes se había rehusado altivamente a seguir; le es urgente salir del aislamiento diplomático, incorporarse de cualquier manera a las victoriosas Naciones Unidas. Anticipándose en pocas semanas al derrumbe de Alemania, Argentina le declara la guerra; logra así abrirse camino hacia los futuros organismos

internacionales, al precio de avalar con su explícito apoyo el reordenamiento del sistema panamericano encarado por Estados Unidos como parte de su preparación para la posguerra; en lo interior la salida constitucional se hace cada vez más inevitable. Si la mayor parte de los coroneles encuentran a estas novedades escasamente gratas, y no encaran sin reticencias el indispensable cambio de rumbo, el coronel Perón se revela por lo contrario dispuesto a seguir participando con su anterior entusiasmo en un juego político hondamente transformado: a comienzos de 1945 apoya enérgicamente (y logra imponer a un gabinete poco decidido) la normalización de la vida universitaria, perturbada por la intervención; al mismo tiempo prodiga sus atenciones a los representantes de los partidos políticos antes vilipendiados, y declara —mostrando dotes proféticas no mejores que las de los demás actores en el proceso— que en la Argentina no hay lugar sino para conservadores y radicales; es ya notorio que busca negociar alternativa —y a ratos simultáneamente— con dirigentes de ambas colectividades políticas, y por un instante confía en que el sector intransigente del radicalismo (o por lo menos sus fracciones más importantes) se decidirá a brindarle abierto apoyo.



FIG. 7.7. 12 de octubre de 1945. Manifestantes frente al Círculo Militar (Archivo General de la Nación).

Pero ningún partido se decide a tomar ese camino; la herencia del poder militar que él le ofrece está demasiado cargada de elementos negativos; la transición hacia un régimen constitucional amenaza no ser fácil para quienes la recojan públicamente. Por otra parte esos partidos controlan muy mal a una parte (la más ruidosa) de sus simpatizantes y aún peor a esos sectores de la opinión pública cuya militancia, aunque genéricamente democrática, no se identifica con ninguna tradición partidaria. Ese público nuevo y exigente se prepara a juzgar con implacable dureza cualquier desfallecimiento de los dirigentes políticos en su oposición al régimen militar (de hecho les reprocha ya haberla mantenido demasiado tibia). Bien pronto la restauración de la autonomía universitaria ofrece un nuevo medio de expresión al movimiento que —imitando también en esto el modelo europeo— se llama a sí mismo la Resistencia; si en la Universidad de Buenos Aires una apresurada coalición en cuya organización interviene activamente el doctor José Arce (veterano dirigente conservador y caudillo universitario con cuyo consejo el gobierno ha contado para la normalización de la Universidad) logra evitar el triunfo de la candidatura de combate del doctor Bernardo Houssay, el más ilustre de los cesantes de octubre de 1943 (que por otra parte ya habían sido repuestos en sus cargos), el doctor Rivarola, al que esa coalición lleva al rectorado, debe sumarse a la corriente que domina en las universidades y les impone actitudes cada vez más militantes: con consejo interuniversitario, que reúne a todos los rectores y al presidente de la Federación Universitaria Argentina, organiza tareas de agitación y propaganda y solicita del gobierno militar que entregue el poder al presidente de la Corte Suprema de Justicia; la universidad de Buenos Aires, por su parte, impone un juramento de lealtad a la Constitución que no equivocadamente es interpretado como un compromiso de adhesión a la Resistencia; separa a algunos docentes que han prestado colaboración activa a la concluida intervención...

De una manera inesperada, la normalización de las relaciones exteriores ofrece también ella a la Resistencia un recluta de excepción: es el embajador de los Estados Unidos, Spruille Braden, quien expresa con rudo vigor su hostilidad al régimen militar, en el que —por medio de transparentes analogías históricas— denuncia una prolongación del fascismo europeo. El año 1945 avanza, y mientras la Resistencia se hace oír de modo cada vez más atronador, el gobierno parece no tener plan para enfrentarla; parece quedarle abierto tan sólo un breve calvario de crecientes humillaciones antes de la ruina final. Los partidos políticos —incluido el comunista, que se ha transformado, gracias a la solidaridad de la Resistencia, en interlocutor totalmente respetable de nuestros partidos tradicionales, entre los cuales su predilección se dirige de modo inequí-

voco al conservador— vuelven ahora a actuar libremente, pero el breve pasaje por la clandestinidad parece haber dado a esas colectividades políticas algo fatigadas una arrogancia del todo nueva. El gobierno sigue buscando romper el bloque hostil de los partidos; logra reclutar a un dirigente radical de segunda fila, y lo instala en el Ministerio del Interior, pero ese irrisorio éxito parece confirmar el fracaso sustancial de la tentativa. Sin duda no se ignora que, a niveles más modestos, ésta logra éxitos más considerables: una nueva camada de interventores en las provincias, menos interesada en difundir el mensaje del nuevo orden, busca contactos con figuras localmente influyentes de los partidos tradicionales; entre ellos el doctor Juan Atilio Bramuglia, un antiguo abogado de sindicatos, de extracción socialista, parece hacer obra particularmente eficaz en la provincia de Buenos Aires. Pero no sólo en ella mientras los más entre los dirigentes radicales, seguros del futuro político de su partido, se muestran poco receptivos, los conservadores, acostumbrados a los blandos encantos del favor oficial y temerosos de ver desaparecer, ante las nuevas alternativas que se avecinan, a sus propias clientelas políticas, se revelan más dispuestos a aproximarse al frente oficialista en gestación. En algunos distritos puede hablarse ya de un derrumbe casi total de la máquina conservadora, acelerado por el tono de áspera condena que la resistencia civil y el radicalismo mantienen con el partido que gobernó durante la Restauración. Los decididos esfuerzos de los comunistas para hacer aceptar a los partidos conservadores como interlocutores de pleno derecho en el frente opositor no lograron vencer esas resistencias obstinadas y por otra parte estos esfuerzos eran en sí mismos un signo de la vertiginosa decadencia a la que la pérdida del poder había lanzado al conservadorismo: en menos de dos años, si éste ha ganado el patrocinio del pequeño grupo político al que había arrojado en 1936 a la ilegalidad, no tiene ya el de los sólidos intereses que durante más de un decenio se han identificado con el orden conservador y se disponen ahora a unir su destino a movimientos políticos que parecen ofrecer, junto con garantías seguras de adhesión al orden social, ese arraigo en sólidas mayorías electorales que el conservadorismo había sido incapaz de ganar.

Con esos nuevos aliados, con la seguridad —razonable o no— de disponer como antes del apoyo de los sectores populares urbanos, a los que el estilo muy tradicional de captación de voluntades empleado por los agentes del gobierno en las provincias no podía alcanzar, la oposición podía ver sin excesiva alarma las tentativas de éstos, cuyo sentido resumió despectivamente un elocuente vocero radical, Ricardo Rojas, al sostener que el gobierno estaba buscando fundar un partido como se funda una agencia de colocaciones. . . En setiembre (luego de nuevas escara-



FIG. 7.8. 17 de octubre de 1945. Aspecto de la concentración popular (Archivo General de la Nación).

muzas en los días en que termina la guerra en Europa y Asia, en los que el gobierno de una Argentina nominalmente victoriosa juzga prudente prohibir toda muestra de público regocijo) la Resistencia hace desfilar sus pacíficos batallones; es la gigantesca Marcha de la Constitución y de la Libertad, en la que de nuevo centenares de miles de porteños se reúnen para afirmar su decisión de seguir luchando hasta la victoria total; en un intento vano pero significativo, el gobierno ha buscado frustrar la marcha patrocinando una huelga de transportes; los dirigentes opositores se sienten halagados de que pese a la huelga las muchedumbres no hayan estado ausentes en la jornada; no parece preocuparlos el hecho de que la huelga misma, cuyo sentido político era inocultable, haya contado con adhesiones tan vastas. A partir de ahora los hechos se precipitan: el embajador Braden se aleja del país que ha asistido a su insistente prédica democrática para proseguir su cruzada libertadora desde el exaltado cargo de secretario adjunto de Asuntos Latinoamericanos; el gobierno por su parte parece dispuesto finalmente a reaccionar ante la cada vez más fuerte presión opositora; vuelve el estado de sitio y las universidades son tomadas por la policía, que detiene a algunos miles de estudiantes encerrados en ellas.

Pero en esa hora crítica el apoyo militar se hace menos seguro; el patrocinio que Perón otorga a un candidato a la Dirección de Correos favorecido por el influjo de Eva Duarte, hace aun más irritante el papel de esta última, cuya presencia en los más altos sitios en solemnes actos oficiales, implacablemente subrayada por los grandes diarios, constituye otra muestra del largo camino recorrido desde la fecha tan cercana en que la revolución ofrecía a la mujer argentina la alternativa de la maternidad y el convento. Presa de súbita cólera moralizadora, un sector del cuerpo de oficiales logra imponer la renuncia de Perón; el general Avalos, jefe de la guarnición de Campo de Mayo, busca una salida política mediante la aproximación al sector intransigente del radicalismo, cuyo jefe, el doctor Amadeo Sabattini, mantiene su cauto silencio ante las discretas solicitudes militares. Pero Avalos no cuenta con plena libertad de movimientos; la Resistencia no está dispuesta a dejarse arrebatarse los frutos de lo que juzga su victoria por un grupo de políticos profesionales traídos del fondo de las provincias; los intereses económicos que están cada vez más sólidamente detrás de la Resistencia tampoco ven sin alarma la perspectiva de una alianza entre el sector que parece haber alcanzado el predominio dentro del ejército y la fracción que les es menos favorable dentro del radicalismo; ese sólido bloque de las clases media y alta (en que las tradiciones políticas de la primera y las directivas económicas de la segunda lograrían finalmente fundirse en ese movimiento conservador adecuado al clima político creado por el sufra-

gio universal, que había faltado hasta entonces en la Argentina) corría peligro de frustrarse en el instante mismo en que su victoria se sentía cercana. Y por otra parte los adictos a Perón —desde el presidente Farrell hasta muchos funcionarios ubicados en lugares decisivos— seguían gravitando en el gobierno: el 12 de octubre una reducida pero selecta concurrencia que solicitaba frente al Círculo Militar la entrega del gobierno a la Corte Suprema de Justicia fue baleada por la policía, que los oficiales hostiles a Perón no se habían cuidado de colocar bajo su control.

Lo limitado de su victoria llevó a los dirigentes del movimiento de resistencia a aceptar por lo menos tácitamente el mantenimiento de Farrell en la presidencia, con un gabinete nominalmente apolítico, y de hecho adicto a la anterior oposición, de cuya integración fue encargado el doctor Juan Alvarez, procurador general de la Nación. El doctor Alvarez encaró esa tarea con una inesperada flema, que mostraba hasta qué punto el admirable escrutador de nuestra pasada historia política ignoraba las exigencias de la acción política; mientras sus esfuerzos se orientaban a la lenta elaboración de un gabinete abrumadoramente conservador, la crisis proseguía subterráneamente. Perón había sido detenido en una isla del Delta, donde había sido sorprendido en compañía de “la mujer Duarte”, como la llamaban ahora los ensoberbecidos grandes diarios; de allí había sido llevado a la isla de Martín García, bajo la custodia de una marina sólidamente hostil; el mismo 12 de octubre en que la manifestación antiperonista dejaba sus víctimas frente al Círculo Militar, no faltaron patronos industriales, que —considerando clausurado el episodio peronista— declararon que no pagarían el salario de ese día feriado; estaban dispuestos a ignorar serenamente la existencia de la nueva legislación social... Cinco días después el vacío de poder era llenado nuevamente por Perón; volvía de su breve desgracia a causa de la gravitación de una fuerza nueva que había cambiado el equilibrio político y social argentino; sólo con su aparición venía a caducar el que se había manifestado en la larga *impasse* de la Restauración.

3. LA ARGENTINA PERONISTA

El 17 de octubre la Confederación General del Trabajo dispuso una huelga general, dificultosamente impuesta por el sector de dirigentes más adictos al secretario de Trabajo (los más abiertamente hostiles a éste habían ya retirado a sus sindicatos de la organización). Esa orden había sido anticipada en algunos puntos del país con movimientos locales en apoyo del prisionero de Martín García, particularmente eficaces en Tucumán. Ahora eran el cinturón industrial de Buenos Aires y el distrito de frigoríficos cercano a La Plata los protagonistas de la jornada: a lo largo del día una muchedumbre obrera comenzó a volcarse en los accesos meridionales de Buenos Aires, y avanzó pacíficamente hacia el centro de la ciudad, sin encontrar resistencia, ni de parte de la policía, que por lo contrario le brindó abierto apoyo, ni de los núcleos de resistentes, que permanecieron en total pasividad. Al mismo tiempo una gestión de oficiales adictos a Perón lograba obtener del presidente Farrell la orden de traslado del prisionero al Hospital Militar; luego de largas discusiones entre los jefes militares, el presidente fue autorizado a liberar a Perón y constituir un gabinete distinto del que finalmente había integrado el doctor Alvarez. La buena nueva fue comunicada a la multitud adicta desde los balcones de la Casa Rosada; los discursos de Farrell y Perón constituyeron la inauguración de la campaña electoral que iba a ser la última etapa de la revolución de junio.

Este desenlace desconcertó por muchas razones a la oposición. En primer término por la aparición en escena de un sector dispuesto a dar apoyo decidido a la tambaleante causa representada por el gobierno militar; en segundo lugar por la extracción de ese sector, reclutado en esas clases populares en las que la oposición había encontrado por más de diez años su más segura clientela política. Sin duda, antes que admitir que sus perspectivas, tan seguras en apariencia, habían quedado súbitamente comprometidas, la oposición se dedicó a negar toda importancia a lo ocurrido: para ello invocaba no sólo hechos ciertos pero menos decisivos de lo que gustaba de imaginar (como lo era el apoyo oficial que el movimiento del 17 había encontrado) sino también interpretaciones totalmente fantasiosas, como la propuesta por los partidos de vocación obrera que contaba en su seno, para los cuales se había asistido tan sólo a una tormenta sin futuro, debida a la agitación ciega y turbia del *Lumpenproletariat*. Por lo contrario, la jornada había contribuido a dividir al país político según líneas de clase, y por no advertir la intensidad del cambio y los riesgos que para ella implicaba la oposición iba a ahondarlo aun más con sus sucesivas actitudes.

Al mismo tiempo el retorno al clima electoral imponía al frente opositor una transformación para la cual no todos sus integrantes estaban pre-



FIG. 7.9. 17 de octubre de 1945. Concentración popular en Plaza de Mayo en adhesión al coronel Perón (Archivo General de la Nación).

parados: los partidos contaban ahora más que en la etapa dejada atrás, y a ello se sumaba la gravitación cada vez más abierta de los organismos representativos de intereses: la Unión Industrial, más aún que la Sociedad Rural, ocupaba la primera trinchera en la lucha por la democracia: este acceso al papel protagónico era a su modo un nuevo signo de que el conflicto político se estaba transformando en lucha social. El gobierno se encargó por su parte de facilitar la transición: a fines de año impuso fuertes aumentos salariales y el pago obligatorio del aguinaldo (mes adicional de sueldo), las organizaciones patronales respondieron con un unánime *lock-out* que fue considerado también un eficaz instrumento de propaganda opositora. Las oposiciones, en efecto (salvo en este punto el Partido Comunista) condenaban enérgicamente las generosidades oficiales con el sector asalariado, en las que denunciaban una segura causa de inflación; de este modo se precipitaban a ocupar el lugar en que sus adversarios esperaban verlas ubicadas.

A la vez el plazo electoral cercano (las elecciones debían efectuarse el 24 de febrero) obligaba a la oposición a decisiones rápidas y no siempre fáciles. En el radicalismo, núcleo necesario de cualquier frente opositor, seguía muy viva la tendencia adversa a toda política de coalición; el apoyo de los sectores alvearistas a la Unión Democrática no hacía sino agudizar la hostilidad a ella de sus adversarios internos. Los partidos menores ubicados a la izquierda del radicalismo (el socialista, el comunista, el demócrata progresista) estaban ganados de antemano a la política de coalición, pero su poderío electoral era limitado, y aportaban a cualquier frente opositor la hostilidad decidida de la jerarquía eclesiástica. El conservadurismo planteaba un problema delicado: dispuesto a integrarse en la unión opositora, controlaba mal a dirigentes locales que a menudo se aproximaban de modo abierto al oficialismo, y enfrentaba además la hostilidad implacable del radicalismo, que vetó su ingreso en la Unión Democrática. Esta, por otra parte, no se iba a concertar sino para la elección presidencial, y aun en ella al servicio de una fórmula exclusivamente radical (era ese el precio de la difícil aceptación del pacto interpartidario por el radicalismo). En las elecciones de legisladores y en las provinciales la propuesta comunista de formar listas únicas fue en casi todas partes rechazada por decisión del radicalismo, apoyada en este caso por el socialismo, seguro de su mayoría en la Capital y poco dispuesto a compartir los frutos de su hipotética victoria. Ante el fracaso de la táctica por él propuesta, el partido Comunista ganó por lo menos la adhesión del Demócrata Progresista para la presentación de listas "de Unidad y de la Resistencia" destinadas a aumentar sus adhesiones entre los adictos a esta última al identificarse ambiciosamente con ella, pero sin duda no a acrecentar la gravitación del frente opositor

en el conjunto del electorado: luego de la victoria aliada comenzaban a llegar, aunque lentamente, a la Argentina los ecos de la reorientación que comenzaba a darse entre los vencedores, y por otra parte las reticencias frente al comunismo habían estado aun antes de ello más difundidas de lo que el súbito entusiasmo surgido en 1944 y en 1945 de tantos inesperados rincones podía hacer suponer.

Bajo esos ambiguos auspicios la oposición se preparó para la jornada de la que se obstinaba en esperar una segura victoria. A fines de diciembre era proclamada por el radicalismo la fórmula Tamborini-Mosca; sus dos integrantes provenían de las filas alvearistas (ahora rebautizadas unionistas) y no gozaban de demasiada vasta popularidad. Ya para entonces otra coalición (formada por el Partido Laborista, que reunía al séquito sindical de Perón, la Unión Cívica Radical-Junta Renovadora, integrada por radicales disidentes, el Partido Patriótico, en que se refugiaron antiguos conservadores y nacionalistas, y aun otras agrupaciones menores) había proclamado la fórmula Perón-Quijano. La campaña podía ya comenzar, y prometía ser muy peculiar. Ambos candidatos recorrieron el país en ferrocarril; la mayor parte de la prensa presentaba el avance del Tren de la Democracia como un paseo triunfal, sólo interrumpido por los atentados en los que se invitaba a reconocer el despecho de un adversario seguro de su derrota; la marcha de la caravana oficialista era seguida por esa prensa con menos afecto, y aparecía puntuada de escándalos políticos, no siempre imaginarios o magnificados (la disciplina interna de la coalición peronista era escasa, y hubo casos —como el de San Juan— en que ésta se deshizo clamorosamente pese a los esfuerzos del candidato por componerla).

A lo largo de esa campaña la oposición tuvo tiempo de madurar una nueva imagen del bloque adversario, cuyo origen se encuentra en los acontecimientos de octubre. Si la candidatura de Perón seguía siendo juzgada tan imposible como antes, si su éxito seguía siendo por definición impensable, ello se vinculaba menos con las tendencias fascistas atribuidas al candidato que con su escandalosa ruptura con un estilo político —y no sólo político— en el cual habían coincidido en el pasado quienes se ubicaban ideológicamente en posiciones opuestas. Desde el 17 de octubre, Perón era el jefe de los “descamisados”, y esta designación no era tan sólo simbólica; muchos de sus adictos habían sido vistos en ese día por las calles privados de esa prenda, y aunque el jefe del movimiento se negó constantemente a las solicitaciones de la multitud adicta que lo invitaban a imitarla, se exhibía impudicamente sin saco. . . Estas chocantes innovaciones de estilo alcanzaron nivel más significativo en el matrimonio de Perón y Eva Duarte, quien —según muchos creían— ha-

bía tenido parte importante en la preparación de la jornada de octubre y parecía dispuesta a adoptar un desgarrado estilo de militancia antes que la decorosa reserva que la tradición argentina impone a las mujeres ubicadas en la situación en la que ahora venía a encontrarse.

De este modo la oposición adecuaba la perspectiva desde la cual contemplaba el conflicto político argentino al lugar que en él había terminado por ocupar como defensora del orden establecido y de las jerarquías tradicionales. Pero no sólo de ellas; sectores enteros de la oposición (y no sólo por cierto los más conservadores) no se resistían a exhibir como seguro anticipo de triunfo el espaldarazo que la potencia ahora indiscutiblemente hegemónica le había dado; el señor Braden, desde su nuevo cargo de secretario adjunto de Estado iba a prestar un nuevo y aun más catastrófico servicio a sus amigos argentinos haciendo publicar en vísperas electorales un memorándum destinado a la consulta de las demás naciones americanas, en que evocaba una vez más los pasados contactos de los círculos gobernantes argentinos con las potencias fascistas. El Libro Azul (tal como se denominó al singular documento) era incompleto en cuanto —según admitía con sobria franqueza— sólo incluía los nombres de los pecadores que aún no se habían enmendado de pasadas faltas (ha de suponerse que transfiriendo su lealtad política de modo más agradable a los compiladores del libro). Aun más grave era que tenía la clara finalidad de influir en la cercana jornada electoral, no tanto por los datos que aportaba cuanto por la declaración de hostilidad que implicaba para el candidato oficialista, presentado como antiguo agente del Eje con una violencia que parecía excluir cualquier posibilidad de futura reconciliación. Esa aventura política a la que se había lanzado el señor Braden, que no necesitaba para alcanzar éxito del apoyo de los sectores antiperonistas, contó sin embargo con él; demasiado tiempo alejada del poder, la oposición hallaba vigorizante el contacto, no sólo de las agrupaciones de intereses cuyo fervor democrático resultaba algo inesperado, sino también la de la que, a punto de desvanecerse la solidaridad antifascista, estaba llegando a ser lisa y llanamente la potencia hegemónica. Al hacerlo, no sólo venía a revelar hasta qué punto la crisis argentina había debilitado los sentimientos de solidaridad nacional, sino cómo ahora los papeles se habían trocado, y era el bloque opositor el que veía la situación desde la perspectiva de una guerra santa, mientras el heredero del movimiento de junio preparaba minuciosamente un enfrentamiento electoral.

Esas nuevas actitudes obviamente no favorecían las posibilidades que la oposición tenía de triunfar en él. De hecho aceptaban —así fuera implícitamente— como un hecho consumado la pérdida del séquito popu-

lar que durante más de un decenio había sido, pese a la tibieza de su ánimo militante, la principal base política de los partidos ahora opositores. Pero no por ello le proporcionaban nuevas adhesiones reclutadas entre los amigos del orden y enemigos de novedades, que forman en la Argentina un grupo considerable; más interesados en matices ideológicos y mejor dotados de memoria política que los sectores populares en proceso de absorción por el peronismo, muchos de esos amigos del orden no habrían de olvidar fácilmente la trayectoria anterior de la coalición opositora; no podían ignorar tampoco que en el frente peronista, si la fuerza electoral venía sobre todo de esas clases populares que siempre les habían inspirado viva desconfianza, seguía siendo determinante la gravitación de instituciones que, como el ejército y la Iglesia, parecían ofrecer garantía suficiente contra aventuras demasiado riesgosas. De este modo la reorientación conservadora de la Unión Democrática agravaba pero no siempre compensaba la pérdida de adhesiones populares que ya había venido sufriendo.

El 24 de febrero las elecciones dieron al frente peronista una victoria que el lento escrutinio tardó quince días en revelar completamente: de los 2.734.386 votos emitidos, la fórmula oficialista recibió 1.527.231 y



Fig. 7.10. Mitin de la Unión Democrática. 8 de diciembre de 1945 (Archivo General de la Nación).

la opositora 1.207.155. La Unión Democrática sólo obtuvo mayoría en cuatro provincias; tres de ellas (Corrientes, San Juan y San Luis) eran marginales y el voto conservador —volcado en esos distritos a la oposición— había contribuido allí más que el radical a asegurar la victoria; aun en Córdoba, donde la Unión Democrática venció por muy estrecho margen, el aporte conservador, aunque reducido, fue determinante. En la Capital y en las provincias mayores la derrota de los candidatos opositores se daba por márgenes considerables: así en la de Buenos Aires el radicalismo era vencido en la disputa por la gobernación por el Partido Laborista, que se presentaba separado de los demás grupos peronistas y cuyo caudal electoral superaba por otra parte el de todos los grupos opositores sumados; esa victoria laborista no era tan sólo la del denso voto obrero de los suburbios industriales de Buenos Aires, sino también la de macizos bloques electorales antes conservadores afincados en distritos rurales que encontraban menos inhóspito el laborismo que el radicalismo disidente. Sin embargo la amplitud de la penetración peronista en el campo no se debía tan sólo a su capacidad de heredar buena parte de la clientela del declinante conservadorismo: en los últimos meses de 1945, Perón había comenzado a proponer soluciones relativamente radicales para el sector agrario; una propaganda muy intensa, sin adelantar proyectos precisos de reformas, denunciaba el escándalo de la gran propiedad ausentista, el de la especulación en tierras, y declaraba que ellos sólo concluirían cuando la tierra dejara de ser un bien de renta para transformarse en bien de trabajo; esa fórmula permitía entrever reformas audaces, la más modesta de las cuales era la entrega en propiedad de las tierras por ellos trabajadas a los arrendatarios. No cabe duda de que por lo menos una parte de la adhesión que el peronismo encontró en las áreas agrícolas se debió a las esperanzas que vino a despertar y que le permitieron realizar avances importantes en algunas zonas como las cerealeras, en las cuales los partidos opositores —en especial el radical— conservaban sólido arraigo. Menos éxito obtuvo el peronismo en las áreas ganaderas; pero si en ellas el Estatuto del Peón no había cambiado decisivamente los datos básicos del equilibrio político, su reducida población limitaba las consecuencias de ese fracaso parcial.

En el Interior el peronismo alcanzaba sus mejores victorias en los oasis de agricultura moderna del norte; en las tierras menos tocadas por la modernización económica sus éxitos eran menos marcados y se detenían en los rincones más arcaicos. En estas regiones el nuevo movimiento estaba lejos de haber explotado todas sus posibilidades; aún no había tenido tiempo de erigir, frente a las máquinas de los partidos tradicionales, la que el dominio del Estado le permitiría establecer más adelante. Los avances que vendrían en esas áreas marginales y los más limitados que

alcanzaría en la ganadera del Litoral permitirían al peronismo conservar en el futuro suficientes apoyos rurales, pese a las decepciones que su política iba a aportar a sus adherentes en las tierras del cereal, donde la congelación de los arrendamientos no sería seguida de cambios más esenciales, mientras la política de precios iba a privar a los agricultores —propietarios y arrendatarios por igual— de la mayor parte de las ganancias de los años de posguerra, la sindicalización de los peones temporarios afectaría con mayor dureza a los menos prósperos entre los cultivadores. Tantos desengaños provocaron una desafección política que no alcanzó sin embargo consecuencias demasiado graves para el régimen: algunos departamentos rurales de Santa Fe tuvieron gobiernos locales opositores, pero en gran parte de ellos bastaban las sólidas mayorías peronistas de los centros urbanos secundarios para equilibrar las deserciones en el voto rural.

En las ciudades de la Argentina modernizada, y en particular en Buenos Aires, el voto se dividía ahora según estrictas líneas de clase; en la Capital el área ganada por la oposición cubría los barrios más prósperos y se internaba, siguiendo las grandes avenidas, en las barriadas populares, sin alcanzar a quebrar allí las sólidas mayorías peronistas, que se hacían abrumadoras en los suburbios industriales. De las elecciones surgía entonces el perfil de un nuevo movimiento político, obrero en las zonas más dinámicas de la Argentina urbana, identificado con los sectores asalariados en las tierras de ganadería litoral, genéricamente popular y apoyado en una red de clientelas que repetía en lo esencial la de partidos más tradicionales en el resto del país. Ese movimiento, heterogéneo como el país en el cual surgía, tenía un elemento esencial de cohesión en su vigoroso personalismo; había nacido como el séquito de un caudillo que, no sólo en las áreas tradicionales sino también en las más modernas, retomaba la función de mediador entre los sectores populares y el hosco y casi abstracto poder del Estado. Los dirigentes sindicales de tradición socialdemócrata o sindicalista, y los cazurros políticos provincianos llegados del radicalismo o el conservadorismo, que habían coincidido en creer que podrían participar de manera decisiva en la orientación del nuevo movimiento, descubrieron bien pronto que su capacidad de decisión autónoma era ilusoria, y ello no sólo porque el jefe supremo (que no tenía nada de ese candor rayano en la tontería que la mitología política argentina se obstina en atribuir al sector profesional que dio a la vida política a Mitre, Roca y Justo) estaba firmemente dispuesto a usar todo su poder —el que le daba el dominio del Estado, el que le venía de su arraigo en el ejército, el derivado de su alianza con la Iglesia— para mediatizar a sus seguidores y colaboradores inmediatos, sino también porque, desde el comienzo, la adhesión popular tendía a

orientarse directamente hacia quien era el líder por autonomasia del movimiento, y los que se habían integrado en él como jefes de clientelas políticas o sindicales podían ahora descubrir que habían perdido su dominio sobre ellas, y que su único futuro posible era el de funcionarios disciplinados de una máquina que aspiraba a englobar al Estado, al partido y a los sindicatos.

Ese personalismo apresuró la consolidación del movimiento, y a la vez frustró desde muy pronto los avances de su institucionalización. ¿Hasta qué punto era esto el resultado de una política deliberada? Sin duda las demasiado frecuentes invocaciones de Perón al impreciso futuro en que su presencia ya no sería necesaria eran de sinceridad poco creíble; sin duda iba a usar una vez y otra su ascendiente personal para eliminar, antes de que se hiciera peligroso, a cualquier posible rival. Pero, aun sin tomar en cuenta todo ello, el personalismo era una consecuencia casi inevitable del proceso del que surgió el movimiento peronista.

Ese personalismo permitía augurar un rápido retorno al estilo autoritario que el gobierno militar había abandonado a lo largo de 1945; el séquito popular que el triunfador del 24 de febrero había logrado reunir lo consideraba por otra parte un rasgo natural del nuevo orden político, y la insuficiente institucionalización, la fragilidad nunca superada del bloque político triunfante, requerían una dirección rígida para salvarlo de las acechanzas que desde él mismo y desde una oposición desconcertada, pero enconada por la derrota, se levantaban contra su hegemonía. Desde febrero de 1946 la marcha hacia la dictadura parecía inscrita en las cosas mismas y fue facilitada en cierta medida por la actitud de las oposiciones, para las cuales la victoria electoral no había otorgado legitimidad al gobierno de ella surgido. Luego del primer desconcierto —agravado por el entusiasmo con el cual, antes de conocer el resultado, los líderes de los partidos opositores se habían apresurado a proclamar la total corrección del proceso electoral— esas oposiciones parecían templarse para un período previsiblemente prolongado de semiostracismo político, y veían sin indulgencia las tentativas de establecer con el nuevo partido gobernante relaciones menos sistemáticamente hostiles; así la adopción por parte del Partido Comunista de una línea más flexible sirvió para que sus anteriores aliados se disociaran rápidamente de él (estimulados para ello por otra parte por la evolución política mundial).

La orientación autoritaria realizó progresos lentos pero constantes a lo largo de toda la etapa peronista. En 1947 la clausura de los semanarios políticos que habían tenido tan vasta resonancia dos años antes marcó la primera limitación importante de la libertad de prensa; en 1951, tras

incorporar a la línea oficialista a la mayor parte de los diarios del país, la expropiación de *La Prensa*, entregada a la gestión de la Confederación General del Trabajo, significó una advertencia precisa a los sobrevivientes; sólo *La Nación*, con la tirada estrictamente limitada por el racionamiento oficial del papel, mantuvo una actitud cautamente independiente. . . . A través de la prensa diaria, como de la radio (sometida a un régimen de permisos que facilitó su compra por figuras adictas al gobierno) se oía ahora la voz de la Secretaría de Prensa y Difusión, que no sólo fijaba la actitud que se debía asumir ante las grandes alternativas políticas, sino dosaba, en minuciosas instrucciones cotidianas, el grado de publicidad otorgado a cada una de las figuras del elenco gobernante (tras una tupida campaña de contumelias, los medios de difusión en manos del gobierno terminaron por cubrir a toda la oposición con un espeso manto de silencio). Esa propaganda lograba dar a la vida argentina el tono de unánime frenesí político característico de las modernas dictaduras que han hecho del manejo de la opinión pública uno de sus más cuidados *instrumenta regni*; ese tono era puntualmente desmentido en cada ocasión electoral, que revelaba la presencia de un irreductible núcleo opositor integrado por un tercio del electorado, al parecer insensible a los argumentos de una propaganda más abrumadora que sutil.

En todo caso la propaganda iba acompañada por un instrumento más tradicional y acaso más eficaz: el empleo masivo de la intimidación. El peronismo no tuvo que inventar el de las cárceles y torturas como arma política: lo encontró en el arsenal de recursos de uso relativamente frecuente desde 1930: su empleo más asiduo fue facilitado sin embargo por el reemplazo del estado de sitio (que tenía el inconveniente de haber dado lugar a una compleja elaboración jurisprudencial, que limitaba considerablemente el margen de arbitrio dejado al Poder Ejecutivo) por la novedosa figura jurídica que era el estado de guerra interno, instaurado en 1951. Tampoco fue creador exclusivo de la intimidación económica; aquí volvió más bien a usos que la preocupación por la defensa del derecho de propiedad, dominante en la Argentina a partir de 1853, había atenuado pero no hecho desaparecer del todo, y para los cuales la intervención creciente del Estado en la regulación de la economía ofrecía posibilidades nuevas que el régimen peronista no iba a desdeñar. Ese uso cada vez más amplio de la intimidación requería una magistratura adicta: en 1949 cuatro de los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia eran sometidos a juicio político y destituidos; después de ello y de una depuración menos radical del resto del Poder Judicial el gobierno pudo contar con la docilidad de sobrevivientes y reemplazantes, salvo inesperadas excepciones que eran corregidas de inmediato con nuevas destituciones.

El mismo estilo autoritario se impuso aun más decididamente en el manejo interno del frente oficialista. Perón comenzó aquí por aplicar con extremo virtuosismo la táctica que consistía en dejar aflorar las tensiones internas en el algo improvisado movimiento hasta que, amenazada la cohesión de éste, podía asumir el papel de árbitro universalmente solicitado. Bien pronto, sin embargo, todo virtuosismo se hizo innecesario, porque su predominio ya no era discutido ni amenazado y sólo le quedaba ejercitarlo a su guisa. Tanto en el sector político como en el sindical lo usaría para promover dirigentes incapaces de constituir en ningún momento una amenaza para su propio predominio; esa meta orientó los esfuerzos por transformar la coalición triunfante en un partido unificado: en mayo de 1946 se creaba el Partido Unico de la Revolución Nacional, en el cual los adherentes surgidos de los partidos tradicionales se encontraban sobrerrepresentados. Esto motivó resistencias entre algunos de los sindicalistas nucleados en el Partido Laborista, en particular en el señor Cipriano Reyes, dirigente de los obreros de frigorífico que —desde el 17 de octubre— se consideraba líder de sectores aun más amplios de la clase obrera. La resistencia de Reyes y de otros



FIG. 7.11. Gira de Eva Perón por Santa Fe (Archivo General de la Nación).

dirigentes laboristas contribuyó tanto como la general indisciplina de las filas peronistas a restar eficacia a la nueva organización política, que a comienzos de 1949 dejaba el paso a un nuevo partido oficialista, que tomó el nombre de Peronista, destinado a persuadir a los que se obstinaban en dudar de que el apartamiento de él implicaba una ruptura con el propio presidente. Desde entonces la disciplina del oficialismo, organizado de modo abiertamente autoritario (según los estatutos del nuevo partido correspondía al general Perón designar sus autoridades supremas), sólo conoció quiebras episódicas. El mismo proceso iba a darse en la Confederación General del Trabajo; en enero de 1947 era aceptada la renuncia del secretario general, Luis Gay, veterano dirigente telefónico, sospechoso de mantener veleidades de autonomía frente a la autoridad presidencial. Fue reemplazado por un ex comunista, Aurelio Hernández, considerado más dócil, que sin embargo no iba a permanecer un año en su puesto: fue reemplazado a su vez por José Espejo, cuyo limitado prestigio y modesta trayectoria en el movimiento sindical constituían garantías aun más sólidas de disciplina.

Ese aparato político y sindical centralizado requería una continua vigilancia; en esta compleja tarea —que hubiera exigido una atención incompatible con la que por otra parte imponía el gobierno del país— Perón contó con el auxilio valiosísimo de su esposa: desde su oficina de la Secretaría de Trabajo y Previsión, María Eva Duarte de Perón (nombre que se asignó luego de su casamiento, cuando aún se hallaba insegura sobre su papel futuro, y que luego abrevió en el más contundente de Eva Perón) estaba escasamente limitada en su libertad de iniciativa por la presencia de un ministro, elegido también él por su opaca personalidad. Pero bien pronto la actualización de la lista de réprobos y elegidos dentro del movimiento político y sindical, tarea a la que se consagró con fervor, fue la más liviana de las que quedaron a cargo de Eva Perón; las jornadas de octubre no habían agotado la posibilidad de introducir elementos nuevos en el equilibrio político argentino; Eva Perón iba a ocuparse de incorporar más sólidamente a él los sectores marginales de población, a ese subproletariado urbano, a esas clases populares de las provincias más tradicionales para las cuales el nuevo derecho laboral y el nuevo poder de los sindicatos significaban muy poco. La Obra Social por ella organizada a través de la Fundación que llevaba su nombre, no sólo llegó muy eficazmente a ese quinto estado al cual los avances del cuarto no habían tocado; sus servicios fueron finalmente utilizados por grupos cada vez más amplios de población, y contribuyeron a quitar aspectos importantes de la función asistencial de manos de las organizaciones privadas de inspiración piadosa y composición aristocrática que en el pasado habían recibido del Estado atribuciones y fondos para

ejercitarla. En la Fundación iban a coexistir, de manera característica en la Argentina peronista, una arbitrariedad de sabor arcaico, que dejaba caer las gracias desde lo alto a una multitud edificada y agradecida, y tendencias a la modernización que el debilitamiento de la hegemonía de una clase alta muy tradicionalista en su modo de encarar sus relaciones con el resto del cuerpo social hacía posibles: junto con mucha obra inútil y mucho derroche suntuoso, que llevó a la Fundación a parecer en algún momento el instrumento de una forma colectiva y algo delirante de consumo conspicuo, a esa vasta obra social se deben algunos hospitales de organización inesperadamente eficiente, y las primeras tentativas de introducir entre los problemas dignos de atención pública el de la difícil adaptación de los migrantes internos al nuevo contorno urbano. Arcaísmo y modernidad eran puestos —y muy abiertamente— al servicio de una finalidad política; la Fundación era el lazo de unión entre el gobierno y esos sectores genéricamente populares que el peronismo llamó los humildes. No sólo el encuadramiento de los humildes, también el de las mujeres figuró entre las tareas políticas asumidas por Eva Perón. Tras dirigir una campaña en favor de la concesión del voto femenino, que de modo nada sorprendente fue otorgado muy rápidamente por el parlamento, se consagró a organizar la sección femenina del partido oficial



FIG. 7.12. Ceremonia de imposición de la Gran Cruz de Isabel la Católica a Eva Perón por el generalísimo Franco, Madrid, junio de 1947 (Archivo General de la Nación).

(que terminaría por ser una de las tres ramas de él, junto con la masculina y la Confederación General del Trabajo).

El peronismo seguía así aplicando la táctica de evocar nuevas fuerzas sociales para equilibrar las viejas; cuanto menos espontánea era esa entrada de nuevos grupos en la vida política, mayor docilidad mostraban éstos hacia quienes les habían asegurado su lugar en ella. De este modo la ampliación constante de la movilización política inaugurada en octubre, lejos de aumentar las potencialidades revolucionarias del movimiento peronista, las hizo menos significativas: el partido de sindicatos, que por un momento pareció constituir el núcleo del peronismo, era diluido en un más vasto movimiento en el que el peso de las clientelas populares más superficialmente modernizadas era numéricamente determinante, y en el que a la vez —gracias a la centralización de la ayuda social en un organismo formalmente separado de la estructura partidaria— el peligro de disgregación en beneficio de figuras de prestigio sólo local era resueltamente esquivado.

El equilibrio así alcanzado dentro del movimiento peronista aseguraría a su conductor una considerable libertad de acción, limitada sobre todo por la necesidad de no volver bruscamente sobre la redistribución de ingresos que había sido el aspecto políticamente decisivo de su acción económica. Esa libertad era pagada sin embargo al precio de una constante ambigüedad en cuanto al sentido mismo de su acción, y de las transformaciones que ésta promovía en el marco político-social en el que había surgido.

Esa ambigüedad iba a ser reprochada —con diferencias sólo de tono— por todos los sectores vinculados con tradiciones ideológicas de izquierda, aun por los que se mostraron más dispuestos en su momento a prestar apoyo a la experiencia peronista. ¿El reproche es justo? Notemos en primer lugar que el peronismo no pudo traicionar un programa revolucionario que nunca fue el suyo; el papel de alternativa sustancialmente conservadora a una hipotética revolución social no surge tan sólo de un análisis de su trayectoria realizado con escaso afecto por adversarios o demasiado exigentes aliados, es el que el propio peronismo, por boca de su jefe, reivindicó orgullosamente para sí. Pero el problema puede todavía plantearse en otro plano, en el que el examen puede llevar a algo más interesante que a un inventario de dudosas culpas y traiciones. Cualquiera que fuese su orientación, cualquiera que fuese el sentido de su acción política, las adhesiones y las oposiciones que había encontrado en su camino hacían del peronismo el movimiento político más cercano a las bases populares, en las áreas modernizadas tanto como en las tradi-

cionales del país; sólo el yrigoyenismo de la última etapa, el de 1928, había ocupado un lugar comparable en el marco de la sociedad argentina. Y esas bases mismas, ¿podían verse indefinidamente satisfechas con una acción que limitaba con cuidado la amplitud de la renovación promovida en su beneficio?

El inventario de culpas deja así paso a un conjunto de hipótesis sobre la índole del peronismo y sus apoyos. Para muchos de sus críticos, las bases populares del movimiento se hubieran sentido mejor expresadas por una línea política más decididamente innovadora, y las preferencias del jefe supremo por los métodos autoritarios no sólo nacían de peculiaridades de temperamento y formación, sino del deseo de controlar mejor esa peligrosa fuente de energías revolucionarias formada por sus propios adictos. Sin embargo, esta hipótesis encuentra muy escasa confirmación en los hechos. La progresiva afirmación de la autoridad de Perón sobre su movimiento, si encontró sin duda resistencias, no las halló en portavoces de ninguna corriente más radical que la suya propia. Por cierto el giro autoritario privó al peronismo de la posibilidad de cualquier evolución espontánea, pero cada vez que esa espontaneidad hallaba, a pesar de todo, manera de expresarse, se traducía en una tendencia a la disgregación más bien que a la radicalización del movimiento. Esto explica en parte que el autoritarismo de la conducción política haya podido contar siempre, contra las ocasionales rebeliones de dirigentes menores, con el apoyo de la base, que no se sentía identificada con las aventuras estrictamente personales que esos episodios de rebeldía significaban.

Cuando el peronismo se presenta como un movimiento popular arduamente hostil a los sectores altos y a la vez esencialmente respetuoso de un orden que asegura a esos sectores altos el lugar que han alcanzado, está dando entonces expresión fiel a las tendencias que animan a los grupos populares que le brindan su apoyo político. Esos grupos siguen siendo decisivos para asegurar las sucesivas victorias electorales del movimiento, pero, aunque se las otorgan cada vez más categóricas, no serían suficientes para garantizar la estabilidad política del régimen. Junto con los obreros, el ejército y la Iglesia son sus apoyos indispensables, tal como lo admite Perón en los meses finales de 1945, y el ejército y la Iglesia plantean problemas y exigen la adopción de tácticas diferentes que los sectores populares.

Con la Iglesia el peronismo iba a mantener relaciones agrisúaves. Sin duda, cumpliendo promesas electorales, hizo ley el decreto que había introducido la enseñanza religiosa en las escuelas, y cuidó de mantener el signo católico a la obra de asistencia social cada vez más centralizada

en manos de la esposa del presidente, y a cambio de todo ello siguió recibiendo muestras suficientemente claras de benevolencia por parte de la mayoría de nuestros preladados. Pero al mismo tiempo la reforma profunda del sistema asistencial, que si le conservaba su sello católico le agregaba uno político mucho más vigoroso, y la politización que estaba imponiéndose con igual vigor a la enseñanza debían crear tensiones nuevas. Por otra parte la Iglesia no hallaba fácil la opción entre sus tradicionales apoyos en las clases altas y sus nuevos aliados; encontraba a la vez penoso e imprudente dar a su aprobación del nuevo orden político la expresión algo atronadora que éste parecía exigir de sus adictos; no se resignaba en suma a pasar de aliada a sometida. Los límites del apoyo eclesiástico pudo advertirlos Eva Perón durante su viaje europeo de 1947: la recepción que halló en el Vaticano fue más cortés que cordial, y el Papa se abstuvo de otorgarle las distinciones que acaso había esperado recibir... Desde entonces el régimen y la Iglesia comenzaron a tomar distancia; en 1951 los confesicnarios (a los que se suponía que el voto femenino había hecho más influyentes) se abstuvieron de orientar a perplejos penitentes hacia las listas electorales oficialistas, pero ello no impidió una victoria peronista aun más amplia que en el pasado. Aunque los enfriamientos y los acercamientos se sucedieron, los primeros se vieron limitados en sus consecuencias por el hecho de que el pero-



Fig. 7.13. Eva Perón dirigiéndose a una audiencia privada del Papa Pío XII. Junio de 1947 (Archivo General de la Nación).

nismo había debido reclutar su burocracia y su magistratura allí donde encontraba ánimos dispuestos a servirlo, y en ninguna parte los halló más serviciales, en los primeros años de su gestión, que en los círculos católico-conservadores (o aun católico-fascistas) a los que la nueva coyuntura mundial había dejado sin soluciones políticas a las cuales otorgar su lealtad. De este modo aun en las etapas en que la cúspide del sistema mostraba abierta frialdad a la Iglesia esta actitud hallaba difícil alcanzar los niveles más modestos desde los cuales podía llevar a consecuencias concretas; la alianza de 1944-46 dejaba entonces paso en los hechos a una separación de esferas de acción acaso conveniente para ambas partes.

Diferente era la situación en el ejército, cuyos humores no podían ser ignorados y que, tras haber hecho posible el surgimiento del peronismo, había mostrado frente a él sentimientos mezclados. Una prudente atención al equilibrio interno en el cuerpo de oficiales, que aseguraba la primacía a ciertas *cliques* (consolidadas a veces por alianzas familiares) demasiado identificadas con el régimen para que pudiera partir de ellas iniciativa alguna contra él, la distribución de beneficios económicos que —sin alcanzar los niveles de ciertas dictaduras militares latinoamericanas— mejoraron considerablemente la situación de los oficiales como grupo profesional, y el uso de incentivos del mismo orden para aguzar el celo de los más adictos fueron los medios favoritos de control del ejército. Al mismo tiempo, la necesidad de conservar el apoyo militar fijaba ciertos límites a la libertad de movimientos del jefe del peronismo. Este —siguiendo aquí una vieja tradición argentina— quiso definir su vínculo con el ejército no sobre una base personal o política, sino institucional: las fuerzas armadas, al apoyarlo, no hacían sino cumplir su deber frente al titular de la autoridad legítima, pero ello obligaba a éste a mantener un mínimo de respeto formal al aparato institucional heredado. No era esto todo, sin embargo: aun controladas y divididas, las fuerzas armadas eran capaces de ejercer en ciertas situaciones—límite un poder de veto imposible de ignorar. El ejemplo más significativo de ello se alcanzó cuando un movimiento basado en los sindicatos favoreció en 1951 la presentación de la señora Perón como candidata a la vicepresidencia de la República. Sin duda los oficiales que osaron dar expresión al descontento militar ante la iniciativa formaban ya en las filas de los desafectos, y el que se hizo eco de él ante el gobierno nacional —el general Lonardi— vio por ello interrumpida su carrera con un pase a retiro; aun así la señora Perón juzgó prudente renunciar a sus ambiciones ante el hecho evidente de que el cuerpo de oficiales las hallaba totalmente intolerables.

El ejército era entonces a la vez un apoyo y un freno; si su segunda función era menos advertida que la primera esto se debía a que Perón —fuese prudencia, fuese coincidencia esencial con la orientación de la institución en que se había formado— eludió casi siempre explorar los límites que el apoyo de ella fijaba a su libertad de decisiones.

Esa libertad era con todo muy amplia en el plano estrictamente político; apenas si trabó la marcha hacia un creciente autoritarismo, al que sólo obligaba a mantener una vestimenta constitucional por otra parte no muy convincente. La Constitución misma fue reformada en 1949; se introdujeron en el texto de 1853 agregados vinculados con el derecho social y del trabajo, un decálogo de la ancianidad debido a la señora Eva Perón, un artículo imitado del modelo mexicano que nacionalizaba el subsuelo, y otro inspirado en estímulos más inmediatos que autorizaba la reelección presidencial, y que —según terminó por admitir un incauto convencional peronista— estaba sobre todo destinado a hacer posible la de Perón. Concluida la tarea de la Constituyente, comenzó la de convencer al presidente de que en efecto presentara nuevamente su candidatura; a través



FIG. 7.14. Perón, 17 de octubre de 1949 (Archivo General de la Nación).

de la multitudinaria campaña pudo medirse el avance ya realizado hacia el encuadramiento oficial de la opinión pública en la Argentina peronista. La victoria electoral de Perón (acompañada de nuevo por Quijano, luego de que la fórmula Perón-Perón sucumbió al veto militar) hizo desaparecer las últimas ilusiones en cuanto a la posibilidad de utilizar la vía electoral para vencer al peronismo: una mayoría sin precedentes se había reunido para apoyar una candidatura que marcaba una ruptura abierta con la tradición constitucional, y ello ocurría cuando ya la prosperidad en cuya cima el peronismo había bogado tan airoosamente entre 1945 y 1949 se transformaba en cosa del pasado. Pero la oposición, aunque minoritaria, era también ella irreductible, y demasiado numerosa y segura de su lugar en el cuerpo social argentino para aceptar una indefinida permanencia en las tinieblas exteriores. Ya antes de las elecciones de noviembre de 1951, en setiembre de ese año, la revolución encabezada por el general Menéndez, que sin embargo pudo ser reprimida rápidamente, señaló el fin de la etapa de seguro control del ejército por parte del sector oficialista: en 1952 —pese a la severidad de las sanciones impuestas a los complicados el año anterior— fue descubierto otro movimiento militar, y desde entonces las actividades conspirativas ya no cesaron aunque su eficacia parecía por el momento problemática, y el presidente se sentía lo bastante seguro de su poder como para hacer a los a menudo proyectos conspiradores militares víctimas frecuentes de su ironía algo gruesa, este hecho era sólo uno entre los que marcaban el comienzo de una etapa nueva en el equilibrio de fuerzas que había dado la primacía política a Perón.

Sin duda, entre esta etapa y la que quedaba atrás, la continuidad se daba en muchos aspectos, en particular en la tendencia hacia un autoritarismo creciente: la construcción de un aparato político que al alcanzar su madurez hubiera debido repetir con notable fidelidad las grandes líneas de los totalitarismos europeos siguió adelante. El sistema de enseñanza, que había sido depurado de elementos desafectos —de modo particularmente espectacular en la Universidad, varias veces intervenida y privada progresivamente de su autonomía por dos reformas sucesivas de la ley que la gobernaba— fue puesto al servicio del régimen; la figura marcial del general Perón y la figura angélica de su esposa —esta última a menudo envuelta en nubes delicadamente rosadas— comenzaron a decorar los libros de lectura para las escuelas primarias. . . Sólo muy tardíamente comenzó el régimen a interesarse en el encuadramiento de las distintas categorías profesionales en organizaciones de signo oficial; aun en cuanto a la clase obrera, aunque vigiló celosamente la efectividad de los descuentos de salarios con fines sindicales, no utilizó a fondo las posibilidades que el monopolio sindical de hecho abría para eliminar a los

desafectos de la fuerza de trabajo; frente a las profesiones liberales sólo hacia 1953 intentó oponer a los colegios profesionales opositores una organización adicta —la Confederación General de Profesionales— que ejerció sólo limitada presión para ganar adherentes en esas categorías donde los adversarios eran abrumadoramente predominantes.

Del mismo modo las organizaciones empresarias fueron objeto de un lento asedio. La Unión Industrial cayó víctima de la acción oficial; la Sociedad Rural, por lo contrario, logró ser respetada, gracias en parte a la adopción de una actitud cada vez más circunspecta, que paulatina-



FIG. 7.15. Perón hablando ante concentración popular, 1950 (Archivo General de la Nación).

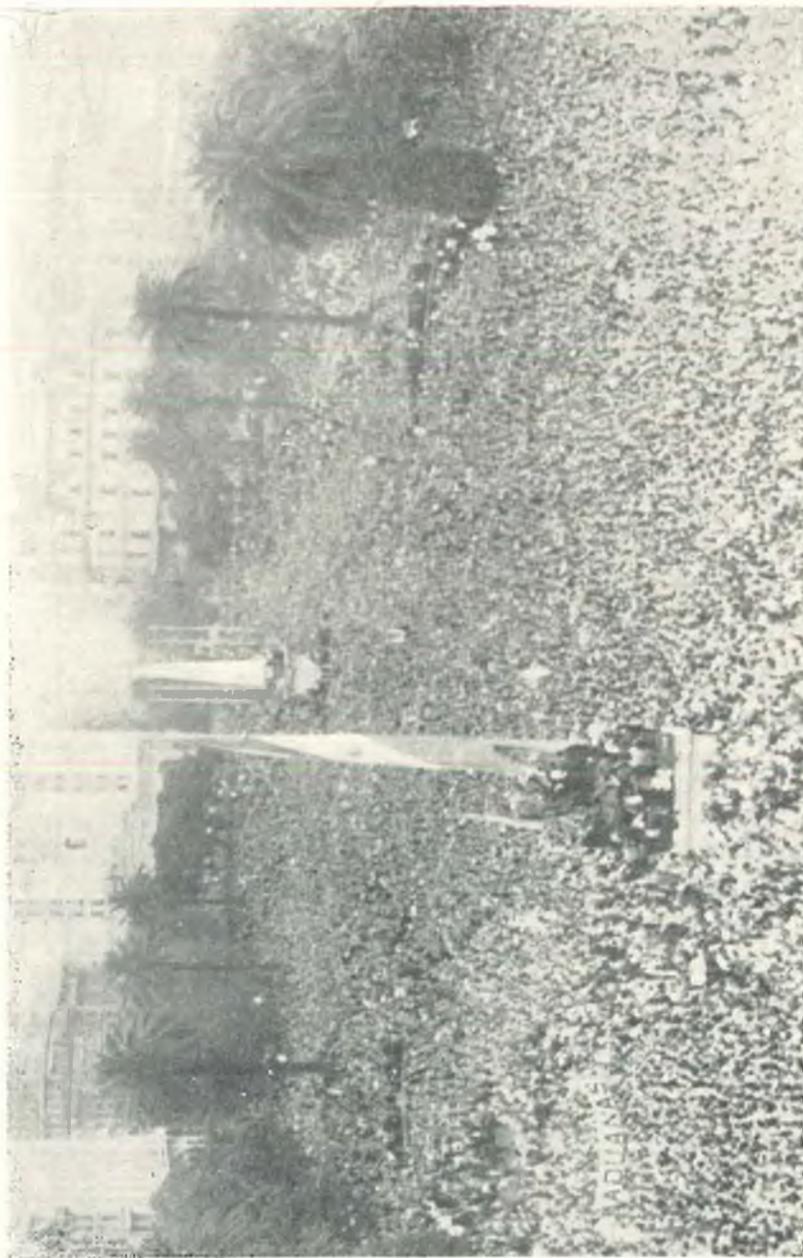


Fig. 7.16. Público reunido en Plaza de Mayo. Fiesta del Trabajo, 1º de mayo de 1950
(Archivo General de la Nación).

mente la llevó a participar —aunque siempre con mesura— en los coros de alabanzas que acompañaban ahora a las más nimias decisiones del gobierno. Menos fácil resultó al régimen crear organizaciones empresarias más sinceramente amistosas: finalmente, tras algunos intentos fallidos, la Confederación General Económica logró reunir adhesiones en ciertos sectores industriales y comerciales, sobre todo del Interior; menos enjundia alcanzó su rama agropecuaria, que nunca pudo ser rival seria de la Sociedad Rural.

Ese interés tardío por encuadrar en el frente oficialista a sectores sociales reacios a incorporarse a él, si podía no ser siempre cómodo para los que comenzaban a ser objeto de las atenciones del régimen, era también en cierto modo un signo de las transformaciones del peronismo. En 1950-51 la necesidad de ellas se hacía evidente: las nuevas tendencias en la relación entre los precios internacionales, agravadas por el peso de adversidades climáticas, agotaron las posibilidades de una política económica cuyo instrumento esencial era la transferencia de recursos del sector rural exportador a la economía industrial y urbana, y que dentro de esta última no podía —por razones de prudencia política— volver sobre los avances que bajo su égida había conocido el ingreso de los asalariados. La oposición veía ahora confirmada su fe en esa crisis económica en la que había creído contra toda apariencia durante los años de prosperidad; la búsqueda de culpas comenzó de inmediato: Perón habría sacrificado en exceso el interés rural, eliminando todo estímulo para un aumento de producción, mientras el aumento del consumo interno disminuía aun más los saldos exportables; habría carecido de una deliberada política de inversiones, capaz de dotar al país, durante la breve prosperidad, de la infraestructura y de las industrias básicas cuya ausencia seguía haciendo extremadamente vulnerable su economía. A esas críticas se contraponían (o aun se agregaban) las que reprochaban al régimen una excesiva timidez en el campo de la reforma social: había dejado intacta la base economicosocial de la Argentina rural, contentándose con privarla de los lucros de una serie de años excepcionales, y pasados éstos se veía forzado, o a una radicalización ahora más difícil (ya que coincidía con una disminución del bienestar aun para los sectores populares) o a la búsqueda de un acuerdo con esos sectores dominantes que habría ignorado pero no debilitado, en momentos en que ellos estaban en mejores condiciones para mantener sus exigencias, no sólo porque una Argentina de economía ahora más compleja seguía sin embargo dependiendo de sus saldos exportables tan estrictamente como la tradicional, sino también porque la política oficial de precios había provocado una solidaridad nueva en los sectores rurales. Si en la década del 30 la Argentina rural se había expresado por medio de muchas voces discordan-

tes, ahora los grandes terratenientes de la Sociedad Rural Argentina, los ganaderos medianos de las confederaciones de sociedades rurales, los arrendatarios de la Federación Agraria Argentina parecían opinar todos lo mismo; los avances del consumo interno frente a la exportación y la disminución del poderío de los frigoríficos en cuanto a la ganadería, la congelación de los arrendamientos y el rápido olvido de los planes de reforma agraria en las tierras del cereal habían atenuado las tensiones internas, y la hostilidad (cautamente expresada, pero muy decidida) se dirigía contra el gobierno que había sacrificado el campo a la ciudad y subsidiariamente contra el sector asalariado, identificado con la política oficial y numéricamente minoritario en la Argentina rural... Por otra parte el gobierno peronista, obligado a aumentar el precio interno de las exportaciones, no estaba en condiciones de hacer mucho más que eso en obsequio de los descontentos productores rurales: una muy anunciada —pero modesta— reorientación del crédito bancario hacia el sector agropecuario no implicó por cierto un decisivo cambio de rumbo. No fue este el único aspecto en el cual las dificultades crecientes incitaron al gobierno, antes que a adoptar una política económica de signo distinto pero de ímpetu comparable con la seguida en su primera etapa, a mostrar una cautela creciente frente a las opciones que enfrentaba con urgencia cada vez mayor.

Cesada la etapa de abundancia, el gobierno podía advertir ahora que su libertad de movimientos era limitada: sus críticos de izquierda y de derecha tenían ambos razón; al favorecer la aparición de un bloque rural



FIG. 7.17. El general Perón y su plana mayor durante la concentración del 1º de mayo de 1950 (Archivo General de la Nación).

mejor consolidado que nunca en el pasado en torno de las clases terratenientes, al favorecer también la de un bloque urbano formado por asalariados y una parte de la clase media dependiente, más interesado en mantener sus acrecidos niveles de consumo que en contribuir con su sacrificio a cambios más profundos de la estructura económica, el peronismo había construido el laberinto del que ya no podría salir sin imponer un nuevo cambio aun más profundo en el equilibrio político del país. La segunda etapa peronista iba entonces a ser de perpleja y desazonada experimentación política; puesto que la coyuntura impone un nuevo equilibrio entre las bases urbanas del peronismo y las demasiado sólidas bases rurales de la economía exportadora, para el régimen se trata de hallar la fórmula que le permita sobrevivir tomando en cuenta esa circunstancia nueva. Las posibilidades políticas son dos: o una liberalización que permita a las fuerzas conservadoras aproximarse sin escándalo o un creciente autoritarismo que le permita emanciparse de su demasiado estricta dependencia de los sectores populares urbanos; ambas serán recorridas reiteradamente, y en desordenada sucesión, en esta última etapa de gobierno peronista.

Si hay muchas razones para entender el paso a esa etapa final, hay un hecho que no se vincula con ellas, pero parece marcar el momento de la



FIG. 7.18. Esperando turno para entrar al velatorio de Eva Perón, julio de 1952 (Archivo General de la Nación),

transición: la muerte de Eva Perón, el 26 de julio de 1952. De nuevo una muchedumbre, ahora silenciosamente paciente, invade el centro de Buenos Aires; espera a lo largo de horas el breve momento en que podrá contemplar, bajo cristal y envuelta en los reflejos violáceos de una sabia iluminación, a la que fue a la vez la Dama de la Esperanza y la Abanderada de los Trabajadores, personificación del nuevo Estado por primera vez benévolo a las capas populares, pero a la vez de esas capas mismas, del rencor acumulado en su largo silencio por un pueblo acaso demasiado manso.

Así desaparecía la figura que mejor había encarnado lo que el movimiento peronista significaba para la mayoría de sus seguidores, y también de sus adversarios. Sin duda Eva Perón había expresado la ambigüedad profunda de ese movimiento, y ello no sólo a través de sus personales actitudes, de su apasionada rebeldía contra las pautas heredadas que escondía mal una implícita aceptación de esas pautas mismas, sino también y sobre todo de la función de intercesora que se había asignado en el orden peronista, que hubiese sido totalmente innecesaria si en efecto las masas movilizadas bajo ese signo político hubiesen sido tan hondamente transformadas en el proceso como gustaba de suponerse. Ello no impedía que Eva Perón, con su oratoria deliberadamente brutal (que le había ganado, junto con muy vasta popularidad, odios muy hondos y tenaces) personificara mejor que nadie lo que en el peronismo había de literalmente intolerable aun para algunos de los apoyos del régimen. Su desaparición parecía remover un obstáculo a la distensión política, y abrir para el movimiento peronista un horizonte sin duda más incierto, pero también —acaso— nuevas posibilidades de inserción en el marco político-social argentino.

Sin duda, esa reorientación había comenzado ya antes de la muerte de Eva Perón: en enero de 1951 el gobierno había debido enfrentar la primera gran huelga realizada ignorando sus exhortaciones; sólo la movilización militar puso entonces fin a la paralización del sistema ferroviario nacional. La aparición de ese hecho nuevo no significaba necesariamente que sectores significativos de la clase obrera abandonaran su adhesión política al gobierno peronista; aun así era evidente que la nueva orientación económica de éste, menos sistemáticamente amistosa para el sector asalariado, lo estaba empujando a modificar, así fuera gradualmente, su fisonomía política. En una primera etapa son sobre todo los avances en sentido autoritario los que se hacen sentir; en 1951 una reforma de la ley electoral asegura al peronismo más sólidas mayorías parlamentarias, y los signos externos del mismo proceso se acentúan en 1952, con la elevación legal de Perón a la dignidad de Libertador de la República,

y la de su esposa a la de Jefa Espiritual de la Nación; en ese mismo año de 1952, el segundo plan quinquenal, menos ambicioso que el primero en sus objetivos económicos, se ocupa en cambio de dar fuerza de ley a una determinada periodización de la historia argentina y consagrar al justicialismo (nombre dado al conjunto de principios doctrinarios del movimiento peronista) como Doctrina Nacional.

Al no cesar la resistencia —que por lo contrario, con el deterioro creciente del clima económico parece encontrar eco más amplio— la represión se hace más violenta. A comienzos de 1953 comienzan a escasear artículos esenciales; el 9 de abril aparece muerto Juan Duarte, hasta días antes secretario privado del presidente y considerado uno de los responsables de la especulación que la escasez estaba provocando (se lo acusaba de modo cada vez más general de haber organizado una red de mataderos clandestinos, proveedores del mercado negro de la carne). Perón lanza una violenta campaña de moralización de la administración pública y de las prácticas comerciales, apoyada en abundantes prisiones de tenderos y en un nutrido plan de actos públicos. En



Fig. 7.19. Sepelio de Eva Perón, 10 de agosto de 1952. La cureña en momentos en que inicia la marcha desde el Congreso (Archivo General de la Nación).

uno de ellos el discurso del presidente es interrumpido por el estallido de varias bombas; la respuesta inmediata es el incendio oficioso de las sedes de los partidos opositores y la del Jockey Club; a él siguen detenciones masivas de opositores, seleccionados de modo algo errático: la señora Victoria Ocampo, una parte de un equipo campeón deportivo, el decano de los filósofos argentinos, el más ilustre sobreviviente de la generación poética del Centenario, comparten la hospitalidad de la cárcel con políticos proyectos pero también con personas hasta entonces desconocidas, que ignoran qué ha podido llamar sobre ellas la atención del gobierno. El terrorismo cesa al ser descubierto el reducido grupo que se había lanzado a la acción directa, y que sufre trato atroz en las prisiones del régimen. Este, tras haber recorrido hasta extremos nuevos el camino de la represión, decidió tomar el de la apertura a nuevos contactos políticos: encontró para ello un primer interlocutor en el doctor Federico Pinedo, que en la cárcel había descubierto las ventajas de un estilo más apacible de lucha política, y en un mensaje que el ministro del Interior hizo público invitaba tanto al gobierno como a la oposición a adecuarse a él. Los grupos conservadores, luego de declaraciones en que el presidente de la República manifestaba coincidir en el deseo de paz y convivencia con los partidos opositores, se allanaron a visitar la Casa Rosada: tras recibir la visita de “esos caballeros que me han

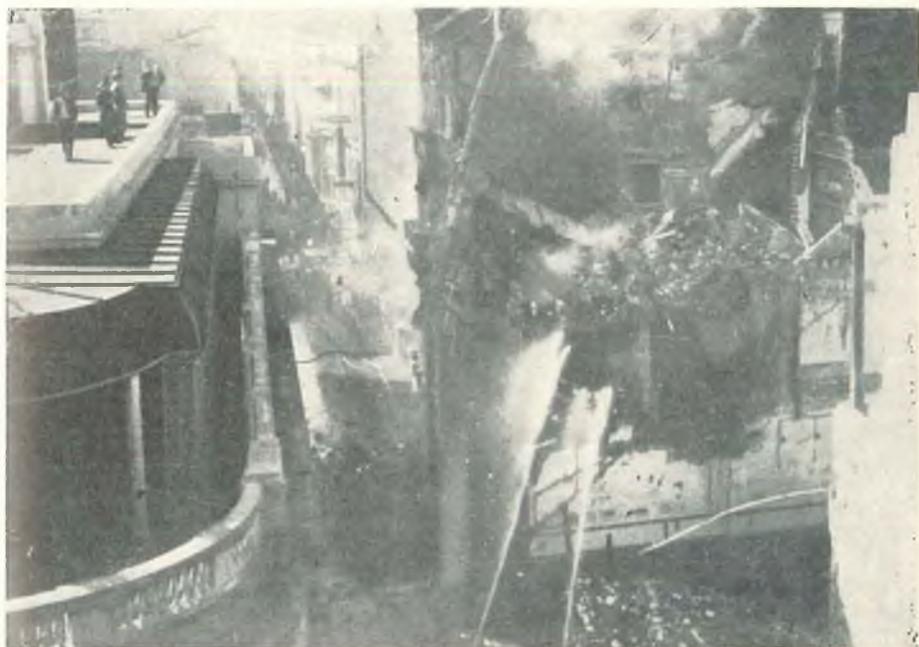


FIG. 7.20. Incendio del Jockey Club, abril de 1953.

dicho palabras muy agradables”, Perón no se manifestó mejor dispuesto a levantar el estado de guerra interno, tal como le habían sugerido sus visitantes. Es que la iniciativa presidencial no encontraba eco igualmente grato en todos los sectores de la oposición. El socialismo tenía que enfrentar la acción de un sector divisionista muy cercano al Ministerio del Interior, y ello no aumentaba su receptividad a las sugerencias presidenciales; el radicalismo, por su parte —pese a su casi permanente crisis, que apenas necesitaba de estímulos externos— constituía el único grupo que había conquistado nuevas adhesiones agitando la bandera opositora: diez años después de la revolución de junio las clientelas electorales conservadoras y socialistas habían desaparecido, mientras la radical reunía nuevos apoyos en torno de la que había terminado por ser la única alternativa viable al peronismo; muy razonablemente la dirección radical no estaba dispuesta a arriesgar su ascendiente sobre esa masa de reclutas recientes mostrando ningún desfallecimiento en su celo opositor. A través de la disciplina opositora del radicalismo y el socialismo, era el aborrecimiento con que sus bases electorales enfrentaban al peronismo el que se hacía evidente; ese aborrecimiento era la manifestación temprana de un fenómeno que bien pronto iba a repetirse a escala latinoamericana: la reorientación conservadora de buena parte de las clases medias. Esa reorientación, herencia en la Argentina de la peculiarísima lucha política que se había planteado a lo largo de 1944 y 1945, conservó en los años siguientes su plena vigencia. Por cierto no había en el moderado programa de reforma social llevado adelante por el peronismo nada que afectara decisivamente la posición de las clases medias (salvo acaso de las rurales) pero faltó, por lo menos en los años de prosperidad en que el predominio político del peronismo llegó a parecer inmovible, todo intento serio de éste para adaptar su estilo político a preferencias que —razonables o no— eran de indudable arraigo en ellas. Ahora, en medio de un deterioro inocultable de la situación económica, no es sorprendente que las clases medias en su conjunto se mostrasen escasamente receptivas al intento oficial de encontrar un lenguaje común con ellas.

A fines de 1953 era ya evidente que la conciliación había fracasado; en abril de 1954 una elección general (para designar vicepresidente en reemplazo del fallecido doctor Quijano) mostró que la relación de fuerzas electorales permanecía estable: uno de cada tres electores era opositor, y en la Capital las distancias se acortaban. Sin duda, el peronismo no tenía mucho que temer por sus fortunas electorales futuras; sin duda también sus mayorías eran comparables con las más abrumadoras conocidas en el pasado; aun así el tipo de organización política a la que el régimen se aproximaba cada vez más sólo se justificaba en términos de unanimidad y no de consenso mayoritario: el problema planteado

por la supervivencia de una oposición numéricamente importante seguía en pie, y con esa pesada hipoteca el régimen debía encarar un cambio de rumbo que, a medida que iba siendo postergado, debía hacerse más radical.

Luego de una estabilización económica emprendida en 1953, al año siguiente las causas de desequilibrio —que no habían sido eliminadas— volvieron a hacerse sentir en todas sus dimensiones. Ante esa situación el gobierno trató primero de aumentar el ritmo productivo de la economía imponiendo un esfuerzo adicional a la fuerza de trabajo. En el Congreso de la Productividad, convocado a comienzos de 1955 con el masivo acompañamiento de propaganda que ya se había hecho habitual para todas las iniciativas del régimen, las dos entidades organizadoras —la CGT y la CGE— alcanzaron un fácil acuerdo, pero sobre términos algo inesperados: la razón de la baja productividad —dictaminó el Congreso— se encontraba en el equipamiento arcaico e insuficiente de la industria, que sólo podría ser corregido mediante nuevas inversiones masivas de capital y adquisiciones igualmente masivas de equipos que era preciso pagar en divisas. Pero la Argentina de 1955 no podía ya encarar esas tareas nuevas sin contar con apoyos financieros externos; los días de la independencia económica (solemnemente proclamada en 1947 como uno de los aspectos esenciales de la revolución peronista) estaban contados. Sin duda ya se habían introducido algunas derogaciones a esa altiva política: cinco años después de la repatriación de la deuda externa, la Argentina había comenzado nuevamente a recibir crédito extranjero; en 1953 una ley de radicación de capitales aseguraba a los futuros inversores extranjeros la posibilidad de efectuar remesas de sus ganancias (éstas había sido las primeras víctimas del racionamiento de divisas, consecuencia de las dificultades crecientes en la balanza de pagos). Pero estos tímidos avances eran insuficientes para corregir el desequilibrio creciente de la economía argentina; éste debía llevar o a una etapa de creciente deterioro del nivel de vida —políticamente riesgosa— o a dosis más crecidas de la misma medicina que con mano vacilante el régimen peronista estaba suministrando ya al país. Por ese segundo camino se decidió finalmente Perón, lo que provocó creciente desazón entre sus adversarios. Entre ellos eran muy pocos los que, con la lucidez de un Federico Pinedo, veían en la política económica la razón última de su disidencia con el régimen, y estaban dispuestos a atenuarla apenas éste mostrara claros propósitos de enmienda; acaso no eran muchos más los que sinceramente se constituían en vestales de la sagrada llama del nacionalismo económico (aunque éste empezó a encontrar cada vez más intransigentes partidarios en las filas opositoras desde que el gobierno pareció dispuesto a borrarlo discretamente de sus banderas).

Más bien era el temor de que el camino que el régimen se aprestaba a tomar le diese no sólo la tranquilidad económica que necesitaba, sino también la respetabilidad internacional que nunca había alcanzado del todo —y que desde 1953 parecía buscar a través de un acercamiento a los Estados Unidos— el que explicaba la decisión creciente con que los grupos opositores enfrentaron la emergencia, resueltos a utilizarla para un enfrentamiento definitivo con el peronismo gobernante.

Este parecía ahora menos deseoso de eludir el conflicto. A lo largo de 1954 y 1955 fue solemnemente anunciada la adopción de una nueva política petrolera; por medio de la concesión de áreas de explotación a empresas norteamericanas el gobierno esperaba atenuar el desequilibrio en la balanza comercial —en el que las importaciones de combustibles habían llegado a tener una función negativa importante— y despertar una actitud más benévola en los centros financieros mundiales, capaz de traducirse en una más amplia corriente de inversiones. Esa nueva política, sin embargo, implicaba una revisión muy importante de principios que el séquito peronista consideraba básicos, y el gobierno quería medir, antes de implantarla, las reacciones que ella encontraba entre sus propios adictos. Al mismo tiempo pareció buscar un nuevo elemento de cohesión política en la lucha contra la Iglesia y su influjo en la vida nacional, que iba a llenar con su ruido y su furia la última etapa peronista.

¿A qué se debía esa súbita explosión de ira anticlerical? Como ya se ha visto, las relaciones entre gobierno e Iglesia hacía tiempo que eran menos íntimas de lo que las experiencias de 1944-46 hubieran permitido augurar, pero aun así no había en esa ambigua relación nada que permitiese anticipar la posibilidad de un choque violento. Por otra parte Perón nunca explicó claramente las causas del conflicto, ni podría haberlo hecho pues prefería negar la existencia del conflicto mismo, que en su versión se reducía a la legítima reacción de los sindicatos ante la acción individual de algunos eclesiásticos excesivamente amigos de la política. Si era posible adivinar tras esa explicación el temor a una intervención masiva de la Iglesia en el mundo del trabajo, es en cambio difícil encontrar elementos objetivos que justifiquen este temor mismo (aunque se estaban dando episodios de rivalidad entre sindicatos católicos y otros de obediencia peronista fuera de la Argentina, en particular en la Colombia de Rojas Pinilla). En todo caso, del conflicto con algunos eclesiásticos se pasó insensiblemente al institucional; la mal adormecida vena anticlerical de una opinión pública que no se había caracterizado en el pasado por su espíritu constantemente devoto comenzó a ser evocada a través de la prensa oficialista, y no faltó algún proceso escandaloso que, tocando muy de cerca a un alto prelado, pareció servir de punto de



Villa miseria.

partida para una campaña moralizadora de la vida eclesiástica modelada sobre la que en Alemania había tenido a su servicio la elocuencia del doctor Goebbels. A esta campaña de agitación (que hizo que muchos eclesiásticos hallaran más prudente no usar ropas talares fuera de las ceremonias de culto) siguió el lanzamiento de un conjunto heterogéneo de reformas que tenían en común el oponerse a las orientaciones o los intereses de la Iglesia. El divorcio absoluto, la equiparación de hijos legítimos y extramatrimoniales, la legalización de los prostíbulos, la supresión radical de la enseñanza religiosa en el sistema de educación pública, la eliminación de las subvenciones a la enseñanza confesional figuraron entre ellos; debía coronarlos una nueva reforma constitucional, que introduciría la separación entre la Iglesia y el Estado.

La reacción de la jerarquía eclesiástica fue de una moderación extrema, y consternante para muchos de sus fieles, que vieron en ella el reflejo de la personalidad algo fatigada del cardenal primado (otros prelados, que hasta meses antes se habían caracterizado por la intensidad de su celo peronista, se manifestaban en cambio mejor dispuestos a una lucha abierta contra el régimen). Pero esa moderación —que llegó hasta autorizar a los fieles, en previsión de las presiones a que serían sometidos, a suscribir (con las adecuadas reservas mentales) los petitorios en favor de la proyectada reforma constitucional— era incapaz de gobernar la actitud de los sectores militantemente católicos de la opinión pública, cada vez más alarmados por una política anticlerical que amenazaba convertirse en antirreligiosa. Los que se tenían a sí mismos por representantes políticos del catolicismo, desde los antifascistas y antiperonistas que veían en el nuevo giro de la política oficial la confirmación de sus proféticas denuncias sobre el carácter anticristiano del régimen, hasta los de extracción nacionalista que habían dado por terminada su etapa de aproximación con él y estaban buscando un modo de conservar su ascendiente en la Argentina posperonista, rivalizaban en la agitación para mantener despierta esa protesta.

Sin duda, entre los que no habían esperado el conflicto con la Iglesia para situarse en la oposición la avalancha de conversos de la undécima hora despertaba sentimientos mezclados; aun así, reservándose la posibilidad de clarificar en el futuro lo que había de equívoco en la solidaridad de una oposición singularmente transformada por los últimos desarrollos, no renunciaban a utilizar las posibilidades que éstos parecían brindarles: en junio de 1955 la procesión de Corpus Christi ofreció a la oposición —y no sólo a la católica— la posibilidad de contarse y expresarse, y el resultado fue en verdad impresionante... Es que la ruptura con la Iglesia no sólo daba nuevos reclutas a la oposición (su

aporte en este aspecto fue limitado, y acaso Perón no se equivocaba cuando subrayaba que su nueva política, si alejaba a hombres que le habían dado útil colaboración técnica y administrativa, no le restaba adhesiones electorales dignas de consideración), aumentaba además el clima de urgencia y de choque inminente en que vivía el país desde que el peronismo había comenzado a buscar un nuevo rumbo. Convencida de que la que se le abría era acaso la última oportunidad de librar abierta batalla contra el régimen, la oposición encontraba ahora en el alejamiento creciente entre el peronismo y la opinión católica un motivo para afrontar con mayor decisión la cercana prueba.

El 16 de junio —cinco días después de la desafiante procesión de Corpus— estallaba un alzamiento apoyado sobre todo por la marina de guerra. Luego de horas de combate en torno del edificio del Ministerio de Marina y de un bombardeo y ametrallamiento aéreo del centro de la capital por los revolucionarios, el gobierno pudo sofocar el reducido



FIG. 7.21. Convento e iglesia de San Francisco después del incendio y saqueo, 16 de junio de 1955 (Archivo General de la Nación).

núcleo insurgente; esa noche, tras una concentración convocada por la Confederación General del Trabajo cuando aún duraban las acciones aéreas, las iglesias del centro de Buenos Aires fueron incendiadas; no resulta difícil comprender que, luego de ver caer a su lado a las víctimas del fuego rebelde, algunos de los manifestantes hayan visto en esos incendios una justa venganza; aun así, la espontánea cólera de una muchedumbre por otra parte raleada por la prudencia no basta para explicar la uniforme eficacia que la operación mostró en todas partes: al día siguiente otras muchedumbres comenzaban a recorrer, heridas en sus sentimientos piadosos (a veces algo improvisados), los templos cuyos muros calcinados dejaban ver —eliminados por el fuego los agregados de épocas más recientes y prósperas— los ladrillos pacientemente amontonados por los albañiles del setecientos. Si la situación hubiera dejado lugar, como en épocas menos tensas, a los observadores distantes, éstos hubiesen podido repetir, como sesenta y cinco años antes, que el régimen no habría de sobrevivir a su victoria sobre la rebelión: en todo caso la quema de las iglesias, ese acto de puro delirio, amedrentó sobre todo al gobierno que (en la hipótesis más caritativa) no había hecho nada por evitarlo. Otros aspectos de la jornada despertaban también alarma entre algunos sostenes ahora indispensables del régimen: la Confederación General del Trabajo había tomado intervención directa en el conflicto, y aunque ésta no había sido ni con mucho decisiva, significaba una novedad que no podía dejar de alarmar al ejército, que hasta entonces había logrado reservarse el monopolio de la fuerza: el 16 de junio pudo verse cómo eran distribuidas armas en número considerable a los manifestantes obreros, y las sugerencias sobre la conveniencia de formar milicias sindicales que desde hacía un tiempo no escaseaban en la prensa oficialista, adquirirían con ello un sentido más preciso y amenazante.

Pero los incendios de esa noche marcaron el punto extremo en la singular radicalización ideológica que el peronismo había iniciado en el momento mismo en que se aprestaba a hacer suya una línea economicosocial decididamente conservadora; al día siguiente de ese hecho enorme el gobierno comenzó a mostrar una moderación nueva, y tan extrema que se acercaba por momentos a la atonía. Para muchos la explicación de ese súbito cambio era que Perón había sido mediatizado por los dirigentes militares que el 16 lo habían salvado del derrumbe, y que —según se suponía— le habían impuesto una estricta tutela. Ahora el presidente prometió poner a cargo del Estado la restauración de las recientes ruinas y dejó en manos del electorado, cuya convocatoria era por otra parte postergada, resolver sobre el lugar de la Iglesia católica en el aparato institucional argentino. No fueron esos los únicos signos de una actitud nueva: el ministro del Interior y el de Educación (estrechamente iden-

tificados con la línea de lucha contra la Iglesia) debieron abandonar rápidamente el cargo y el país; el señor Apold dejó la Secretaría de Prensa, en la que fue reemplazado por un veterano periodista que se manifestó dispuesto a hacer menos rígido el control de los medios de difusión. La política de la mano tendida se ampliaba para incluir en ella a la vieja junto con la nueva oposición: el 5 de julio Perón declaraba rehusarse a ver enemigos en los que ahora llamaba “grandes partidos populares”, a los que invitaba a una reconciliación en la que por primera vez —aunque sin ofrecer precisiones— prometía que el oficialismo haría también su parte: como prueba de la sinceridad de ese propósito los jefes de la oposición fueron autorizados para responder por radio a la propuesta presidencial. Lo hicieron de manera característica: el doctor Solano Lima, representante del conservadorismo, formuló un llamamiento abierto a todas las fuerzas opositoras, instándolas a derrocar al gobierno; si no invocaba explícitamente una revolución militar, era muy sugestiva la apelación al ejército, al que Perón había sólo recientemente achacado sus pasados servicios a la oligarquía, y al que el orador conservador invitaba a buscar sus aliados políticos entre los que en el pasado lo habían tratado con más constante cortesía. . . . Hubiera sido inútil buscar cualquier incitación subversiva en el texto leído con voz algo sepulcral por el doctor Arturo Frondizi, recientemente ungido jefe del radicalismo. Tras asumir el compromiso de realizar en un marco de libertad la revolución económica y social a la que el peronismo estaba renunciando, y de prometer en nombre de su futuro gobierno un generoso perdón para los colaboradores del régimen, el doctor Frondizi fijaba a éste condiciones extremadamente severas, a cambio de las cuales ofrecía tan sólo adoptar una línea de oposición constitucional. El respeto escrupuloso del marco de legalidad del que no quería salir no hacía menos grave el pronunciamiento del jefe radical, que reflejaba la fría decisión de no brindar cuartel al adversario en la hora de su crisis decisiva.

Ante esa helada recepción de sus proyectos pacificadores, Perón —que acababa de renunciar solemnemente a su condición de hombre de partido, cuya incompatibilidad con la de jefe de la nación acababa súbitamente de descubrir— volvió a actitudes en él más habituales. La pacificación dejaba saldo negativo para el régimen en lucha por la supervivencia; el frente opositor ampliado por la política anticlerical no había podido ser desarmado ni dividido por los tenaces esfuerzos oficiales. De ello se tuvo un nuevo signo cuando el exceso de celo de la policía política cobró una nueva víctima en el doctor Juan Ingalinella, dirigente comunista rosarino. Fue un diario vinculado con la curia rosarina el que comenzó una tenaz campaña para esclarecer la misteriosa desaparición

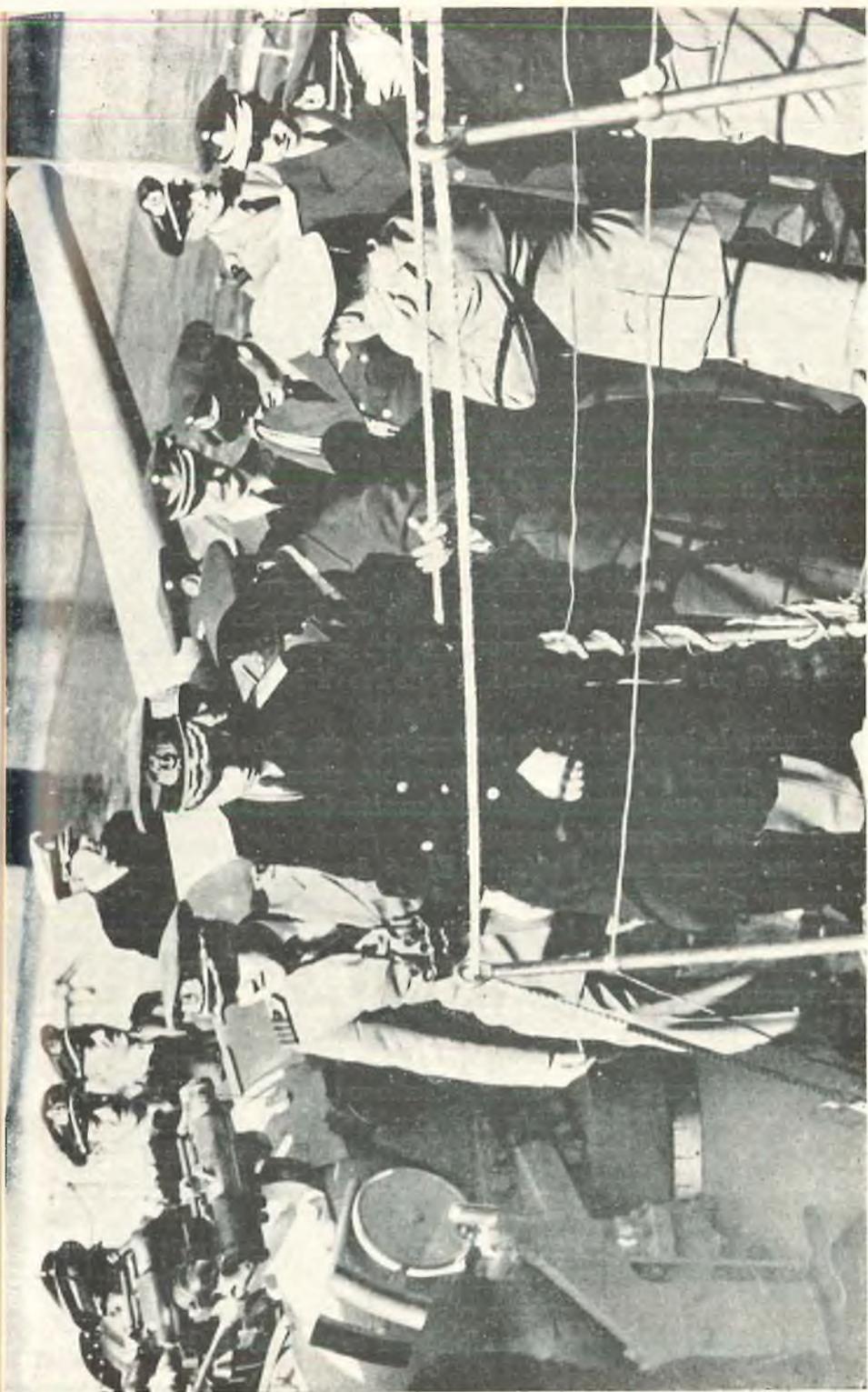


FIG. 7.22. El almirante Isaac Rojas desembarcando en el puerto de Buenos Aires.

de Ingalinella, fue el propio obispo de Rosario quien, en una muy publicitada visita a la casa del médico desaparecido, quiso participar a su esposa la inquietud de la Iglesia ante el episodio y la esperanza de verlo pronto aclarado... En esas condiciones la vuelta del peronismo a la lucha sin cuartel contra la oposición estaba lejos de significar la aparición de un vigoroso espíritu de ofensiva; era más bien el retorno a tácticas rutinarias y algo fatigadas ante el fracaso de las más nuevas que la situación misma había impuesto.

El 19 de agosto el Partido Peronista daba por terminada la tregua política; doce días después una confusa carta de Perón, en que anunciaba su decisión de retirarse del gobierno para eliminar un obstáculo a la pacificación, servía de prólogo a una nueva concentración popular ante la cual el presidente se apresuraba a retractarse y con contradicción sólo aparente llamaba a sus adictos a responder a la violencia (que se había traducido en nuevas explosiones de terrorismo) con la violencia; acuñando un nuevo *slogan* (que en el futuro, a diferencia de lo que ocurrió con los surgidos en etapas más felices, iba a ser recordado sobre todo por sus enemigos) invitó a matar cinco de éstos por cada peronista que cayera en las luchas que se avecinaban. A ese llamado a la lucha sin cuartel no siguió nada más importante que una reiteración muy frecuente de él por boca del presidente y de los dirigentes de su partido.

En setiembre la inquietud militar se acentuó, con altos oficiales prófugos, a los que el gobierno era incapaz de capturar; aun en esa hora grave la oferta que formuló la Confederación General del Trabajo de apoyar la acción represiva con milicias obreras fue rechazada en términos apenas corteses por el ejército. El 16 de setiembre comenzaba el movimiento militar que pondría fin al régimen peronista. En Córdoba el general Lonardi dirigía las operaciones; las tropas adictas al gobierno no lograron eliminar el núcleo revolucionario y debieron aliviar su presión cuando las guarniciones cuyanas se unieron al alzamiento. Mientras otros conatos militares no lograban afirmar nuevos focos de rebeldía en el Interior, la marina de guerra íntegra se unió al movimiento; si debía abandonar su base de Río Santiago, conservaba Puerto Belgrano y lanzaba a la flota hacia el norte; el 19 de setiembre Mar del Plata era sometida a bombardeo naval y Buenos Aires amenazada del mismo trato si las fuerzas gubernativas no se rendían sin condiciones; el general Lucero anunciaba en nombre de éstas que cesaban la resistencia, y leía un documento en que el presidente, manifestándose dispuesto a afrontar el necesario renunciamiento personal, se abstenía sin embargo de toda dimisión expresa a su cargo. La situación quedó mejor aclarada al día siguiente cuando Perón se refugió en la embajada

del Paraguay, de la que pasó a una cañonera de ese país anclada para reparaciones en el puerto de Buenos Aires. En ese inseguro refugio se hallaba el 23 de setiembre, cuando de nuevo una multitud se reunió en la Plaza de Mayo, ahora para escuchar al general Eduardo Lonardi, presidente provisional de la República Argentina.



Fig. 7.23. Aspecto de la Plaza de Mayo en la asunción del mando por el General Lonardi, 23 de setiembre de 1955 (Archivo General de la Nación).

4. DESPUES DEL PERONISMO

El frente opositor ampliado había vencido finalmente; su último y más vigoroso intento había encontrado resistencias inesperadamente reducidas; la lluvia que desde el 19 al 21 de setiembre arreció sobre Buenos Aires iba a ser retrospectivamente invocada como una de las causas de la pasividad revelada por las bases populares del peronismo. Otra muy evidente nace del hecho de que, para su clientela popular, éste era, más que un partido, el Estado mismo, dotado por el jefe del movimiento de una nueva orientación social; pese a las advertencias de las que el propio Perón no había sido avaro, ese séquito popular hallaba difícil creer en la posibilidad de la derrota de ese Estado, que contaba con tantas ventajas sobre sus adversarios; por otra parte aun los llamamientos del líder a una mayor vigilancia política no solicitaban una acción espontánea de las masas, sino la adhesión más plena de éstas a la acción estatal. Aun si los desconcertantes desarrollos políticos de la última etapa no hubieran mellado la combatividad de las bases peronistas, ésta se habría manifestado quizá demasiado tarde (tal como lo hizo en los escasos episodios de resistencia que efectivamente se dieron; por ejemplo en Rosario, donde sólo después de que las radios oficiales admitieron el éxito de la revolución, las bases peronistas, allí muy numerosas, advirtieron que en efecto la situación era grave, y se lanzaron a acciones sangrientamente reprimidas). Pero esa tardanza en percibir los alcances de

La amenaza enfrentada se debe en parte a que el agonizante régimen dedicó sus últimos esfuerzos a presentar una imagen deliberadamente deformada de la situación, que mantuvo, a la vez que en el optimismo, en la pasividad a sus adictos. ¿Por qué lo hizo? De nuevo aquí no faltan los críticos que deploran la ausencia de una tentativa de movilización popular *in-extremis*, que hubiera podido acaso salvar a la revolución peronista transformándola en revolución social. Pero, dejando de lado el hecho de que esta última seguía despertando el sincero horror de los dirigentes y de buena parte de los adictos al peronismo, éste encontraba en ese momento igualmente importante no enajenarse del todo el cada vez menos seguro apoyo que seguía brindándole la mayor parte del cuerpo de oficiales; durante diez años había hecho del ejército el único respaldo de su poder ante cualquier amenaza violenta, también durante diez años se había presentado a sus adictos investido de todo el poder del Estado, y porque contaba con él les había podido dar protección y muy precisas ventajas; erguirse contra la institución a la que había reservado el monopolio de la fuerza solicitando para ello el auxilio de aquellos cuya adhesión se había ganado en el papel del que no necesita auxilios (y por lo contrario los distribuye desde lo alto) era sin duda una aventura desesperada. Para evitar su poco airosa caída de 1955, el peronismo hubiera acaso debido cambiar no en 1955 sino en 1945. ¿Pero hubiera podido hacerlo? Una corriente innovadora a la vez socialmente más radical y menos constantemente sensible a las exigencias inmediatas de bienestar de los sectores medios y populares, capaz por lo tanto de encarar transformaciones más hondas de las que efectivamente promovió el peronismo, ¿hubiese podido triunfar en la Argentina de 1945? No parece probable: la presión de los adversarios habría obligado entonces al gobierno militar a organizar rápidamente una elección general con votos honradamente contados, y no es este el camino más adecuado para imponer salidas cuyos beneficios no son inmediatamente perceptibles; por otra parte el mismo resultado electoral de 1946 muestra que sólo manteniendo un curso más ambiguo el peronismo pudo alcanzar la relativamente estrecha victoria que entonces conquistó: en ella el peso del voto católico y el de considerables sectores conservadores resultó decisivo...

En todo caso, si al definirse el peronismo en el plano social como un movimiento partidario de un programa moderado de redistribución del ingreso entre los distintos sectores, se había creado dificultades que se hicieron evidentes apenas la coyuntura económica se tornó menos favorable a esa política, también había preparado con ello dificultades no menos graves para sus adversarios y herederos. El gobierno provisional enfrentaba la necesidad de difíciles definiciones en muy variados

planos, pero sin duda la más grave y cargada de consecuencias se le imponía en el económico. Que un cambio de rumbo era indispensable no era en rigor un descubrimiento de las nuevas autoridades; Perón lo había advertido también, y había tratado de introducirlo con pulso inseguro. Por cierto en algunos aspectos las cosas se presentaban más fáciles para sus enemigos y herederos: durante un largo tiempo podrían achacar las dificultades viejas y nuevas a la herencia del régimen al que había derribado; más importante aún era que contaba con un prejuicio favorable de parte de los sectores que habían mantenido oposición abierta o por lo menos fuertes reservas frente al peronismo, y que eran los destinados a beneficiarse con la modificación de la política económica. Tal como lo había señalado uno de sus más brillantes catecúmenos de la undécima hora, el doctor Mario Amadeo, la revolución había sido la victoria de una clase sobre otra; si se decidía a serlo plenamente podría utilizar al máximo las ventajas políticas que el cambio de rumbo económico podía ofrecerle; aun si no aceptaba ser una segunda restauración neoconservadora, era de temer que la fuerza misma de las cosas la empujara a desempeñar ese papel, y en ese caso tendría que absorber todos los daños políticos que de ello derivaban, sin beneficiarse plenamente de las correlativas ventajas.

Esa dimensión política de las decisiones económicas no fue advertida por todos los integrantes de la coalición revolucionaria; sólo el sector mayoritario dentro del radicalismo pareció descubrirla, pero su defensa de una política económica de orientación popular fue recibida con frialdad por sus ocasionales aliados, aun por los que comenzaban ya a buscar un entendimiento con el aparato sindical peronista. Por otra parte las decisiones económicas mismas estaban lejos de ser consideradas primordialmente en su relación con el equilibrio entre sectores sociales, y —por lo menos en la mente de su principal inspirador— no implicaban una opción global en favor de la Argentina rural y exportadora, contra la industria y los consumidores urbanos.

En efecto, Raúl Prebisch, llamado por el gobierno del general Lonardi a prestar asesoramiento como funcionario de las Naciones Unidas, dejaba resueltamente de lado el contexto político de las modificaciones por él propuestas en la política económica, y si su diagnóstico de la situación argentina buscaba en la reorientación demasiado drástica de los ingresos hacia los sectores asalariados urbanos una de las causas más importantes del creciente desequilibrio, estaba lejos de proponer, aun como solución a corto plazo, el retorno a la distribución de ingresos vigente antes de la revolución peronista; la modificación por ésta realizada era juzgada a la vez prematura y sustancialmente irreversible. Por otra parte

la perspectiva a largo plazo que los consejos de Prebisch proponían no era la de un retorno a la Argentina preindustrial; era por lo contrario la de una Argentina dotada de una estructura industrial más completa y viable que la dejada en herencia por el peronismo.

Esa orientación dada a sus consejos probaba hasta qué punto el que había tenido parte tan considerable en la fijación de la política económica argentina durante la restauración conservadora se había transformado ya en el vocero capaz de traducir en el pulido lenguaje de los simposios internacionales las impaciencias del Tercer Mundo, de esa periferia cada vez más relegada por las transformaciones de la economía mundial; no era sino una prueba del provincialismo que diez años de aislamiento habían introducido en la cultura política argentina que Prebisch, su diagnóstico y su plan fueran considerados por sus adversarios como expresiones de la misma tendencia que se traducía en los nostálgicos editoriales de nuestros grandes diarios, que utilizaban la recuperada libertad para evocar la pasada prosperidad argentina, sólo interrumpida por culpa de gobiernos entregados (por su inocencia o su intrínseca perversidad) a las engañosas seducciones del dirigismo.

Aun siendo esto cierto, también lo es que el contexto político no por ignorado era menos decisivo; no porque el plan Prebisch prefiriera dejar de lado las consecuencias más permanentes que podía tener una política destinada en lo inmediato a aumentar las exportaciones elevando los ingresos del sector rural (al que la experiencia peronista había brindado una cohesión nueva) esas consecuencias dejarían de darse.

A ello se agregaba el problema adicional creado por los ingresos de los sectores asalariados; aunque los consejos de Prebisch no incluían su disminución drástica era al mismo tiempo evidente que ellos daban prioridad no sólo al aumento de ingresos del sector rural sino también a la modernización de la infraestructura (muy abandonada durante la etapa peronista), a la expansión de la explotación de combustibles (de la cual Prebisch excluía todo aporte de capitales extranjeros), y a la integración de la estructura industrial (tres metas que requerían fuerte inversión de capitales, que sólo para la primera y la última, y aun en ellas parcialmente, debía venir del extranjero). Aquí era el segundo bloque consolidado por el peronismo, el de los asalariados obreros y la baja clase media dependiente, el que iba a defender su parte en la distribución del ingreso frustrando las expectativas del plan: como Perón, que había tenido en él su principal apoyo, la revolución, que encontraba en él un adversario al que prefería no enconar, no podría ignorar las presiones de ese bloque; si con ello hacía menos radical la reorientación inme-

diata hacia el sector rural, hacía también remota la posibilidad de una corrección de los desajustes estructurales de la economía.

Así limitada la libertad de movimientos de los gobiernos herederos, bien pronto habrían de lamentar haber centrado en el terreno económico sus críticas a la etapa pasada; durante mucho tiempo no tendrían demasiado que oponer a las realizaciones económicas, sin embargo tan discutibles, del peronismo. Siete años ricos en alternativas dramáticas serían necesarios para que, cuando ya desesperaba de ello, la Argentina hallase aliviado su problema de balanza comercial, aun después de ello la inflación (el combate contra la cual figuró entre los objetivos principales de los gobiernos herederos y que sin embargo luego de 1955 realizó avances cuyo ritmo avasallador no se había conocido en el pasado) seguía siendo un problema no resuelto.

¿Ese curso vacilante era necesario? ¿Tenían razón los críticos que otra vez acusaban alternativa o simultáneamente a los sucesivos gobiernos de seguir políticas antipopulares y de entregarse por cobardía o por secreta vocación a una casi clandestina demagogia? En todo caso, resulta difícil descubrir de qué modo, en el frágil equilibrio político que iba a ser el de la Argentina posperonista, cualesquiera de los gobiernos que sucesivamente enfrentaron problemas sustancialmente incambiados, hubieran podido adoptar soluciones económicas que —cualquiera que fuesen sus otros méritos— debían despertar la oposición simultánea de todos los sectores sociales políticamente poderosos.

De este modo, en una suerte de desesperante juego de espejos, los problemas económicos envían a los políticos, que a su vez tienen su raíz, por lo menos en parte, en aquéllos. Pero no sólo en aquéllos: tercera de las revoluciones militares argentinas, hecha contra el heredero de la segunda y con el apoyo del partido que había sido víctima de la primera, la de 1955 debía, por todo ello y también por la particular coyuntura de la que había surgido, orientarse hacia una estrategia política distinta de las que habían fructificado en 1932 y 1946. Vencedora de un gobierno cuyas tendencias dictatoriales eran menos imaginarias que las del doctor Yrigoyen, respaldada a la vez por quienes habían mantenido durante un cuarto de siglo de adversidad fe inquebrantable en la democracia constitucional y por los inquietos ideólogos de la derecha católica que —luego de una larga excursión a través de muy variadas experiencias políticas autoritarias— hacían el papel de hijos pródigos de la tradición constitucional, la revolución de 1955 no vacilaba en definirse libertadora y en proclamar su identificación total con la exigencia democrática; al mismo tiempo debía enfrentar a un movimiento que, aunque identificado con un

estilo político cada vez más autoritario, gozaba de un arraigo popular difícil de ignorar. Deshacer el aparato totalitario no era, estando así las cosas, una consigna tan sencilla como podía parecerlo a primera vista; llevada adelante con lógica, significaría, por ejemplo, deshacer a un movimiento obrero cuyo carácter no representativo faltaba aún demostrar.

El general Lonardi pareció adivinar si no la índole, sí por lo menos la gravedad del problema planteado a la revolución; siguiendo el ejemplo de Urquiza, proclamó que ella no dejaba ni vencedores ni vencidos, y —consecuente con estas palabras— buscó poner dique a la oleada que, luego de su victoria, partía ofensivamente de la demasiado tiempo aplastada oposición. Pero esa consigna vieja de cien años era también menos precisa de lo que parecía; entendida en sentido restringido prometía a los adictos al orden caído que no sufrirían por haberlo sido bajo el nuevo; interpretada en toda su posible amplitud suponía que la revolución se proponía definir nuevas reglas para el juego político, más apegadas que las anteriores al modelo liberal-constitucional, pero no cerrar al movimiento peronista el acceso a la reabierta lucha entre los partidos. Si el presidente provisional no vio con claridad la alternativa fue porque compartía la noción —entonces muy difundida— de que el peronismo no podría sobrevivir a su pérdida del poder. Pero ello mismo daba a la actitud presidencial un sentido ambiguo: su generosidad podía interpretarse como inspirada por el deseo de recoger lo mejor de la vasta herencia de adhesiones populares dejada por el supuestamente moribundo peronismo. Este deseo hubiera causado menos controversias si la revolución en cuyo nombre el presidente gobernaba hubiese poseído una más auténtica coherencia; luego de la victoria los que habían luchado en nombre de la tradición liberal y los que habían visto en la revolución una victoria de Cristo, los que añoraban la Argentina de antes de 1930, embellecida ahora por el recuerdo hasta hacerla irreconocible, y los que habían renunciado mal a identificarse con etapas aun más remotas del pasado nacional, comenzaban a transformarse de aliados en adversarios; desde muy pronto pareció evidente que el sector católico-nacionalista, que se creía mejor aceptado por la opinión peronista, pensaba hacer de la adhesión de ésta su arma de triunfo.

Pero no por ello se proponía más que sus rivales admitir como un interlocutor válido al partido caído, al que también él parecía considerar un cadáver político: el sucesor dado por la revolución al señor Apold era un nacionalista al que enemigos de memoria tenaz reprochaban sus visitas a Berlín durante la Segunda Guerra Mundial; fue él quien organizó una quizá demasiado estentórea campaña de desprestigio dirigida no sólo contra el presidente caído sino también contra la memoria de su

esposa, que despertó el bien comprensible encono de los que aun le guardaban devoción; al parecer también el doctor Goyeneche creía que una semana de setiembre había bastado para que no hubiera ya peronistas. . . Bien pronto fueron los más viejos adversarios del peronismo los que se mostraron más dispuestos a creer en la permanente vitalidad de ese movimiento, aunque usaban esa creencia sobre todo como argumento polémico contra sus aliados y rivales, cuya política de relativa tolerancia podía ser presentada como un intento ciego o deliberado de devolver al poder al enemigo abatido en setiembre.

Defendiendo la política más intransigentemente antiperonista, la antigua oposición que se autodefinía democrática podía ampliar con rapidez sus contactos con el ejército, donde la oficialidad antiperonista, de vuelta de persecuciones o por lo menos (en los casos menos desfavorables) de largos años de postergaciones, estaba rápidamente tomando el control. Pero su actitud no era totalmente oportunista; al revés de lo que ocurría con la derecha católica y nacionalista —conjunto de reducidos grupos de *élite* siempre en busca de un movimiento de base amplia al cual orientar (o, como preferían decir sus enemigos, en el cual instalarse parasitariamente)—, la antigua oposición antiperonista había contado, en un pasado ya remoto, con sus propias bases populares, de las que había sido total o parcialmente despojada por el peronismo; ahora contaba con recuperarlas por la razón o por la fuerza. Esta ambición era particularmente viva entre aquellos dirigentes de los partidos opositores que habían derivado más directamente su fuerza del ascendiente ganado sobre los sectores sociales que luego habían de apoyar al peronismo: es comprensible que los sindicalistas de obediencia opositora, que gustaban imaginar que sólo la violencia policial había impedido a sus bases conservarles abierta lealtad durante el decenio que quedaba atrás, vieran con impaciencia las tentativas de entendimiento entre el gobierno revolucionario y la antigua tercera rama del partido peronista, que —devuelta por las circunstancias a su vocación estrictamente sindical— parecía dispuesta a comenzar una nueva etapa bajo una dirección sustancialmente incambiada, ahora bajo el signo de la Revolución Liberadora.

Aun antes de que esas tensiones desembocaran en un abierto conflicto entre sectores revolucionarios, la acción de los sindicalistas antiperonistas, apoyados en la fuerza que les brindaban sus antiguos camaradas de conspiración devueltos al escalafón militar, enfrentó abiertamente la política sindical del gobierno Lonardi, que había instalado en el Ministerio de Trabajo al doctor Cerruti Costa, un abogado de sindicatos cuyo reciente pasado peronista parecía ser el más evidente de sus méritos.

Pese a esos obstáculos, la cautela de la política sindical permitió soslayar conflictos cuya peligrosidad parece retrospectivamente evidente: la eliminación formal de los signos de adhesión obrera al régimen caído se dio rápida y silenciosamente; menos de un mes después de la victoria revolucionaria, los señores Framini y Natalini, dirigentes peronistas a cuyo cargo había quedado el gobierno de la CCT, celebraban el décimo aniversario del 17 de octubre exhortando a la clase obrera a eludir una ocasión de conflicto acudiendo masivamente al trabajo y absteniéndose de toda celebración. Pero el precio de esa transición pacífica era la incorporación en el nuevo aparato de gobierno de sectores importantes del antiguo, mientras una atronadora propaganda, en que los nacionalistas no eran menos ruidosos que sus aliados y rivales, identificaba a éste con todos los crímenes públicos y delitos privados imaginables.

Era una política indefendible, y que en efecto se defendía cada vez peor contra las impaciencias de quienes querían que la revolución siguiera plenamente su curso; sus argumentos eran más morales que políticos, y —puesto que la imagen que sus defensores aceptaban del pasado peronista hacía dudosamente moral cualquier compromiso con sus antiguos sostenes— más sentimentales que morales; estando así las cosas, no tiene nada de extraño que muchos hayan encontrado poco convincente el espectáculo de tantos inveterados cultores de la violencia redentora



Fig. 7.24. El General Lonardi y Busso. Juramento de la Suprema Corte (Archivo General de la Nación).

convertidos a la ética cristiana que ordena devolver bien por mal y ofrecer la otra mejilla al ofensor. Y en efecto, en la derecha católica la búsqueda de contactos con sectores antes peronistas, que consideraban políticamente disponibles, iba unida a la tendencia cada vez más manifiesta de marginar a la antigua oposición liberal. ¿Hasta qué punto esta doble toma de posición política reflejaba la opinión del presidente? Sin duda el general Lonardi era partidario decidido de una línea conciliadora; es menos evidente que participara de las prevenciones de los católico-nacionalistas contra los partidos tradicionales; en el círculo muy reducido de asesores que gozaban de la confianza presidencial el doctor Villada Achával, cuñado del propio presidente, representaba a los sectores de derecha, pero el doctor Busso, exitoso jurisconsulto al que la revolución había hecho ministro del Interior, se identificaba con no menos firmeza con la posición opuesta.

En todo caso el conflicto comenzó a darse de modo cada vez más abierto; la creación de una Junta Consultiva, integrada por representantes de los partidos antes opositores, fue morosamente tramitada; el doctor Villada Achával hubiera preferido formarla con figuras de menos precisa representatividad política. Debió inclinarse sin embargo ante el arbitraje del presidente; el doctor Busso hacía así figura de vencedor y el contraalmirante Rojas, vicepresidente de la República y presidente del nuevo cuerpo, ponía todo el peso de la marina de guerra en apoyo del rumbo que a través de la creación de la Junta parecía tomar la revolución, definido por el doble recuerdo de Mayo y de Caseros; a través de él era la continuidad con la experiencia liberal-constitucional argentina la que era subrayada por Rojas. Pocos días después, la renuncia del general Bengoa, ministro de Guerra que había apoyado la apertura hacia el aparato sindical peronista, parecía otorgar una nueva victoria a la tendencia que ya había comenzado a afirmarse; sin embargo no dejaba de ser significativo que, al aceptar la renuncia de Bengoa, el general Lonardi se solidarizara por entero con su posición. Esa solidaridad tuvo manifestación más precisa en una proclama dada a conocer a horas intempestivamente tempranas del 12 de noviembre: en ella el general Lonardi tomaba distancia ante la ola depuradora que avanzaba sobre el país en nombre de la revolución, a la vez que anunciaba una ampliación de la Junta Consultiva para incluir en ella figuras de gravitación no exclusivamente política. Aun más clara en sus consecuencias era la división del Ministerio de Interior y Justicia; la nueva cartera de Justicia era confiada al doctor Busso —que la rechazó de inmediato—, mientras el ministerio político por excelencia recibía por titular al doctor de Pablo Pardo, cuyo pasado nacionalista y properonista le había impedido hasta entonces ocupar en el gobierno cargo alguno.

La fracción revolucionaria desautorizada por ese súbito cambio de rumbo mostró una inesperada capacidad de reacción: cuando el doctor Busso renunció a su cargo, sus adictos no abandonaron la sede ministerial, y los miembros de la Junta Consultiva (excepto dos representantes de la recién creada Unión Federal Demócrata Cristiana, rival nacionalista del Partido Demócrata Cristiano) renunciaron también.

El ministro y los representantes de los partidos tradicionales iban a ser plenamente reivindicados al día siguiente; a la oposición de la marina se sumó la de la mayor parte del ejército, y ante ella debió inclinarse el presidente Lonardi: el 13 le era aceptada una renuncia verbal cuya existencia misma fue desde ese momento muy discutida. Lo reemplazaba el general Aramburu, al que seguían acompañando en el gobierno el doctor Busso y los representantes de los partidos; los voceros del ala católico-nacionalista (entre ellos el doctor Goyeneche y el canciller, doctor Amadeo) eran en cambio eliminados del gobierno. La revolución reiteraba su vocación democrática y su signo antiperonista, a la vez que prometía atenuar las consecuencias negativas que para los sectores populares tenía la nueva política económica... La ola depuradora avanzaba ahora impetuosamente; las comisiones investigadoras —creadas durante la etapa anterior— se multiplicaban; el Partido Peronista era formalmente disuelto, y luego de una tentativa de huelga general fue enviada la intervención a la Confederación General del Trabajo. No habría lugar legal en la Argentina para quienes se ubicaban fuera de la línea revolucionaria, y aun dentro de ella una de las corrientes enfrentadas había



Fig. 7.25. Reunión de la Junta Consultiva Nacional presidida por el contraalmirante Isaac Rojas (Archivo General de la Nación).

obtenido una decisiva victoria. Todo esto parecía facilitar la adopción de un rumbo político preciso; ahora se advertía, sin embargo, que ella seguía siendo problemática.

Lo era porque la Argentina misma, muda durante diez años salvo para expresar su adhesión al orden de cosas vigente en fórmulas demasiado estereotipadas para que fuera fácil asignarles un significado preciso, transformada durante esos mismos diez años en una medida que era también difícil establecer, era para sus nuevos gobernantes una cantidad desconocida. El peronismo no había sido tan sólo un movimiento o un régimen político; bajo su signo el equilibrio social había cambiado, y aun en el plano de las ideologías políticas, si sus aportes originales habían sido modestísimos, había ofrecido un admirable instrumento de difusión a puntos de vista que en la década del treinta habían sido sostenidos tan sólo por alarmadas minorías y que en 1955 parecían haber arraigado firmemente en la conciencia colectiva.

De este modo el antiperonismo político, por decidido que fuese, no significaba una toma de posición obligada frente a todo lo que diez años de transformación con signo peronista habían traído consigo. Aquí el gobierno revolucionario debía mostrarse reacio a seguir las huellas del



FIG. 7.26. El General Lonardi con Palacios, Ghioldi, Zavala Ortiz y Perette (Archivo General de la Nación).

de 1930; faltaba ahora la segura convicción de que los daños de la etapa pasada podrían corregirse eliminando de la vida política a las nuevas capas sociales que durante esa etapa se habían incorporado a ella. Más aún: para importantes sectores pro-revolucionarios aun ciertos motivos ideológicos que el peronismo había popularizado merecían ser plenamente mantenidos y aun acentuados. Así ocurría en el radicalismo, ahora dominado por los sectores intransigentes, que durante toda la etapa peronista habían librado una dura y exitosa lucha interna; para ellos la culpa del peronismo había residido en su escasa lealtad a sus propias banderas: la soberanía política, la libertad económica y la justicia social no habían sido, a los ojos de los radicales intransigentes, las auténticas metas de la política del régimen. De esa convicción había nacido una táctica nueva, que si logró éxitos muy limitados en sus tentativas de transformar la resistencia obrera a la orientación económica de la segunda etapa peronista en el punto de partida de una ruptura política entre la clase obrera y el peronismo, lo tuvo mayor al convocar a sectores sociales más amplios a la lucha contra la política petrolera adoptada por Perón en 1954, en la que denunciaba una traición contra la independencia económica del país. Esa actitud intransigente se continuaba por otra parte con la adoptada en los problemas de política exterior; la seguida por Perón, que —de manera muy tradicional en la Argentina— había buscado detener la consolidación del sistema panamericano que ahora Estados Unidos quería transformar en arma para la guerra fría, era recusada por sus críticos intransigentes por un doble motivo: la encontraban insuficientemente decidida y además la juzgaban vinculada con el mantenimiento de la peculiar relación argentino-británica, que el peronismo, pese a nacionalizaciones y repatriación de deuda, conservó como aspecto esencial de su política, y que los radicales denunciaban como otro modo de servidumbre al imperialismo.

Sin duda, no faltaban razones a los radicales para denunciar las inconsecuencias de una política externa rica en zigzagueos. Aun así, era el nacionalismo de diez años de propaganda peronista el que había preparado el camino para un nuevo estilo de oposición que censuraba, más bien que los objetivos declarados de la política peronista, la escasa sinceridad con que eran sostenidos.

¿Significaba esto que, luego de diez años de peronismo, todo el país se identificaba con la imagen que —al margen de su concreto estilo político— el peronismo había adoptado de la realidad nacional? Se ha visto ya que no: la oposición al peronismo no era tan sólo (acaso no era primordialmente) resistencia a su orientación autoritaria; era recusación global de las modificaciones más generales que habían acompañado a su

aparición en la escena argentina. Es cierto que el voto opositor no había dejado de acompañar a los candidatos radicales cuando éstos comenzaron a presentarse ante él en nombre de un programa de reformas económico-sociales más audaces que las que el peronismo había osado planear; ese apoyo masivo no implicaba ninguna honda transformación ideológica de la sólida clase media opositora; nacía más bien de una disciplina electoral mantenida en odio al peronismo y todo cuanto él significaba, y suponía a lo sumo una aceptación resignada y sólo provisional de la noción de que ciertos cambios sociales eran de todos modos irreversibles.

Sin duda, en una democracia moderna no es siempre necesario el apoyo del electorado para imponer ciertas políticas; basta a menudo con su resignación, y si en efecto las transformaciones aportadas por el peronismo hubiesen estado tan sólidamente arraigadas como el régimen y la oposición habían terminado por creer, su revisión no se hubiera ni siquiera planteado. Pero si la revolución había triunfado, si ya antes de ella una prolongada desorientación había debilitado al peronismo, ello se debía precisamente a que la reforma a la vez política y social emprendida bajo su signo había dejado de ser viable; en palabras pobres, la Argentina ya no era capaz de costearla, y la alternativa se daba entre la adopción de innovaciones más radicales que las introducidas durante el decenio peronista o una erosión más o menos rápida de éstas, con restauración por lo menos parcial del equilibrio anterior a 1945. El triunfo de la revolución de setiembre colocaba ya al país en el segundo rumbo, y ello totalmente al margen de las precisas intenciones de quienes en su nombre lo gobernaban.

Porque ese rumbo no había sido tomado de modo deliberado, la opción aparecía aun abierta: si la izquierda más tradicional parecía cada vez menos interesada en cambios revolucionarios (el socialismo mostraba sobre todo una impaciente ansiedad por los despojos sindicales del régimen caído, sobre los cuales se habían lanzado los dirigentes deseosos de cobrar el premio de diez años de lealtad a las viejas banderas, pero también de castigar la apostasía de las bases antes adictas; el comunismo buscaba aprovechar el hecho de que, luego de más de un cambio de rumbo, en el momento de caer el peronismo se encontraba en cautelosa oposición a él para ensayar una vez más el acceso a la plena respetabilidad política; uno y otro, entonces, se fijaban objetivos estrictamente político-partidarios dejando de lado cualquier tentativa de promover transformaciones más amplias) por su parte la dirección intransigente que había conquistado el aparato radical mostraba una adhesión cada vez más firme a una imagen de la realidad argentina que debía desembocar necesariamente en la postulación de transformaciones mucho más generales

y profundas que las vividas bajo signo peronista. De 1954 era *Petróleo y política*, del nuevo jefe del partido, Arturo Frondizi; esa "contribución al estudio de la historia económica argentina y de las relaciones entre el imperialismo y la vida política nacional" incluía una introducción cuyo título mismo ("La lucha antiimperialista como etapa fundamental del proceso democrático de América latina") no dejó de despertar preveniciones dentro y fuera del radicalismo, agravadas cuando algunos disertos contrincantes del doctor Frondizi comenzaron a sugerir que las ideas allí expuestas no eran un descubrimiento original del jefe radical, y muchas de ellas podían encontrarse en los escritos de Lenin sobre el tema. De este modo el más importante partido antiperonista parecía dispuesto a no detenerse ante ninguna audacia programática, y también a dar a su recién descubierta vocación revolucionaria contenido concreto por medio de su acción política. Pero aun a los ojos de los que así renovaban al radicalismo, lo más urgente era no enajenarse la buena voluntad de un gobierno militar en cuyas manos estaba despojar a los líderes intransigentes del control del partido, que habían ganado a través de un esfuerzo tenaz, pero que no había renovado en cuanto a las tácticas empleadas el arsenal de recursos no siempre edificantes que enriquece la tradición partidaria. Así limitada, la vocación revolucionaria del radicalismo se traducía en una ambigüedad empeñosamente cultivada; bajo la dirección intransigente, el radicalismo aspiraba a ser a la vez el heredero legal de la revolución antiperonista y la única alternativa legalmente abierta frente al cerrado antiperonismo ahora triunfante. Esto colocaba a la dirección radical en situación intermedia entre la posición de los otros partidos tradicionales y la de los nacionalistas, y ello ya se puso de manifiesto en el escaso entusiasmo que puso en su apoyo a la eliminación de Lonardi.

La actitud radical anticipaba que la revolución de 1955, como sus predecesoras, iba a enfrentar un difícil problema de sucesión, que se haría más urgente con el transcurso del tiempo. A la espera de esa suprema prueba, hallaba dificultades más inmediatas; la primera de ellas era la de afirmarse en un país en que el régimen caído tenía tan imponente masa de adictos. Luego de noviembre, éstos habían sido empujados al margen de la legalidad; si las medidas tomadas contra dirigentes políticos y sindicalistas parecían suficientes para eliminarlos como amenaza inmediata al nuevo orden de cosas, el ejército representaba una incógnita; pese a todas las depuraciones, que avanzaban un poco a ciegas, no era fácil medir la intensidad de su apoyo a un régimen que descansaba sobre todo en él. En junio de 1956 una tentativa de alzamiento militar peronista, largamente preparada, reveló que los temores de algunos revolucionarios eran infundados: el movimiento fue fácilmente doblegado.

Fue también sangrientamente reprimido: los pelotones de fusilamiento no sólo buscaron sus víctimas en algunos civiles de problemática intervención en el episodio, sino también en un general y algunos altos oficiales; después de casi un siglo la amable tradición que había eliminado ese riesgo para varias generaciones de conspiradores militares era violentamente quebrada. El terrible episodio puso fin a las tentativas serias de acción peronista en el ejército; si Perón no se iba a resignar fácilmente a admitir que la institución que en el pasado lo había tomado por vocero ya no quería saber más de él, e iba a buscar constantemente nuevos contactos con hipotéticos núcleos de militares adictos, los dirigentes locales comprendieron bien pronto la imprudencia de cualquier tentativa de quebrar el nuevo equilibrio creado por la revolución de 1955 dentro del ejército.

Ese equilibrio seguía sin embargo amenazado por las tensiones internas a la oficialidad revolucionaria: el desenlace de noviembre no había sido unánimemente aplaudido en ella, y sólo luego de superar numerosos conatos de volver sobre él la autoridad del gobierno de Aramburu concluyó por ser sólidamente apoyada por esa arma. Aun así, el primer año y medio de su gestión estuvo marcado por ese trasfondo de inquietud que aun en los momentos más serenos limitaba la libertad de decisión del presidente.

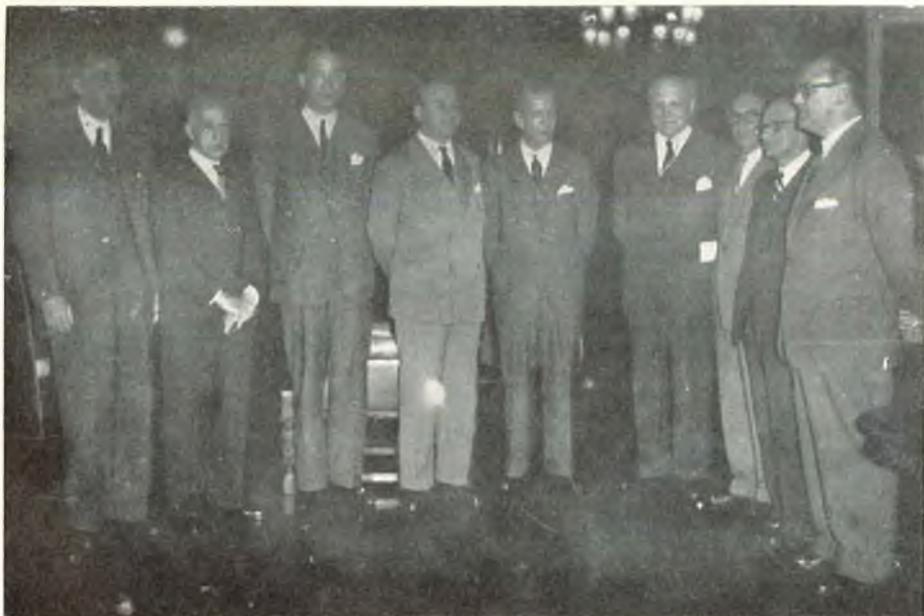


FIG. 7.27. Lonardi con los interventores de las universidades nacionales (Archivo General de la Nación).

Ese factor contribuyó a acentuar la nota de provisionalidad que desde el comienzo tuvo la política de Aramburu, y que éste tuvo el mérito de transformar de necesidad impuesta por las circunstancias en decisión deliberada del gobernante: el régimen militar, destinado a administrar al país hasta que éste pudiera darse un gobierno libremente elegido, no debía tomar decisiones que limitaran la libertad de acción de ese futuro gobierno más representativo; mientras la nación no decidiera si quería una economía dirigida o liberal, un sector nacionalizado más amplio o por lo contrario más reducido, un sistema educacional basado en la escuela oficial y laica o en una delegación de funciones y fondos públicos en favor de instituciones privadas y frecuentemente confesionales, no correspondía al gobierno militar tomar en su nombre esas decisiones. ¿Pero cómo encarar los problemas que de todos modos la realidad de cada día seguía planteando sin optar de alguna manera frente a esas alternativas? Puesto que la abstención no siempre era posible, el gobierno militar la reemplazaba con un eclecticismo sistemático; el elemento de ambigüedad que se escondía mal bajo las apodícticas formulaciones del peronismo o de la oposición radical era orgullosamente exhibido por el gobierno provisional como el principio orientador de su política. Aun así, ésta debía introducir modificaciones que —contempladas en conjunto— revelan una tendencia relativamente uniforme. En lo económico, si el temor a incidir de manera demasiado abrupta en el nivel de salarios llevó a preferir la aceleración de la inflación y sobre todo la postergación de cualquier programa ambicioso de inversiones, de todos modos fue atenuada la incidencia del sistema de control oficial del comercio externo y el país se vio incorporado a un conjunto de organismos internacionales cuyo influjo serviría en el futuro para acentuar el nuevo rumbo. Aun allí donde el gobierno finalmente no innovaba (como en la política petrolera o ante el problema de las universidades privadas, autorizadas por una iniciativa del ministro Dell'Oro Maini, que provocó intensa reacción en las universidades nacionales —gobernadas por interventores designados previas consultas con los dirigentes estudiantiles y consagrados a una vasta depuración del cuerpo docente heredado del régimen peronista— y llevó finalmente a la renuncia del ministro y la decisión oficial de mantener en suspenso la vigencia de la discutida norma) la sola apertura de un debate en el cual el gobierno proclamaba su neutralidad entre la política anteriormente vigente y la opuesta significaba un debilitamiento de la primera.

Suspendida la consideración de todos los demás problemas, el de la sucesión se agigantaba a los ojos del gobierno y del país, y era cada vez más evidente que su solución dependía del desenlace de la crisis interna del radicalismo; era evidente también que los adversarios internos del doc-

tor Frondizi no podrían liberarse por sí solos de su pesada tutela. La tentación de intervenir en la vida de los partidos era muy fuerte en el gobierno; a lo largo de 1956 el debate larvado o abierto en torno de este punto fue el aspecto más vivo de una actividad política que aun encontraba difícil hallar canales precisos para desenvolverse. A mediados de ese año el general Aramburu anunció que sería convocada una Asamblea Constituyente; a fines de él reveló que sus miembros serían elegidos según un sistema de representación proporcional; con ello el gobierno venía a renunciar implícitamente al proyecto de intervenir en la vida interna del radicalismo, puesto que adoptaba la solución alternativa de asegurar representación más amplia a los partidos menores para equilibrar con ellos el influjo del sector que dominaba al radical.

Esta solución no podía satisfacer a la dirección intransigente del radicalismo, que comprendía demasiado bien el carácter precario de su propia hegemonía en el partido, y deseaba transformarla lo más rápidamente posible en dominio sobre el país; cualquier prolongación de la etapa revolucionaria era vista por ella con extrema suspicacia. Ignorando la convocatoria de la constituyente, esa dirección abrió el proceso por el cual el radicalismo elegiría su fórmula presidencial, y a lo largo de éste pudo advertir aún mejor que su predominio dentro del partido era problemático. Sin duda el viejo alvearismo, aún llamado unionismo en recuerdo de su pasada adhesión a la Unión Democrática, era en casi todas partes minoritario, pero la mutación que haría de la intransigencia yrigoyenista un movimiento de segura inspiración ideológica y precisas aspiraciones programáticas estaba lejos de haber madurado del todo. El doctor Sabattini, patriarca de la intransigencia, permanecía con sus fieles en un movimiento —el de Intransigencia Nacional— separado del de Intransigencia y Renovación que capitaneaba el doctor Frondizi; más alarmante era que aun dentro de éste se diseñaran graves fracturas internas; la figura del doctor Balbín, que sólo había sido eclipsada en el marco del movimiento por la del doctor Frondizi durante la última etapa peronista, podía servir para nuclear a cuantos dentro de la misma Intransigencia renovadora veían con alarma la transformación que ella estaba sufriendo bajo la enérgica dirección de este último. Primero vacilante, el doctor Balbín parece haberse decidido a dar una cabeza a esa disidencia potencial sólo cuando la dirección del movimiento de Intransigencia y Renovación lanzó la precandidatura del doctor Frondizi, ignorando del todo sus propias y no ilegítimas aspiraciones. Pese a la deserción de los unionistas y de los intransigentes adictos a Sabattini y Balbín, hubo aun en la convención radical una mayoría para asegurar el quórum y proclamar la fórmula Frondizi-Gómez. A ello siguió en enero de 1957 la división del radicalismo; todos los disidentes se unie-

ron en la Unión Cívica Radical del Pueblo, mientras el sector inesperadamente mayoritario del partido tomaba el nombre de Unión Cívica Radical Intransigente. El episodio tenía inmediata repercusión en el gobierno; luego de una oportuna crisis de gabinete, los Ministerios del Interior, de Educación y de Comunicaciones eran entregados a militantes de la intransigencia balbinista; el radicalismo del pueblo se transformaba así en el heredero político que hasta ese momento la revolución había rehusado darse.

No era ésa sin duda la solución más satisfactoria que el movimiento revolucionario podía haber imaginado; entre la actitud política de los militares revolucionarios y la tradición yrigoyenista de la que el doctor Balbín había recogido los aspectos más exteriores y retóricos para exagerarlos casi hasta la caricatura había por cierto muy poco en común. Pero luego de más de un año de gobierno el general Aramburu parecía haber descubierto ya qué difícil era —según la fórmula del general Mitre— hacer una Argentina diferente de la que habían hecho ya Dios y los argentinos; en el neoyrigoyenismo de Balbín descubría, a pesar de sus rasgos repulsivos —o acaso por ellos mismos— el vigor de un movimiento sólidamente enraizado en la realidad nacional y capaz por lo tanto de luchar con perspectivas de éxito contra la empresa política capitaneada por el doctor Frondizi, en la que veía ya el peligro más grave para el futuro.

En efecto, una atmósfera de creciente recelo y desconfianza rodeaba a la Intransigencia y su jefe. ¿A qué se debía ella? A la falta de escrúpulos en la elección de medios que el doctor Frondizi había mostrado en su fulminante campaña por el control de su partido; así decían los marginados por esa victoria, sin tomar acaso en cuenta que lo que diferenciaba al doctor Frondizi de sus rivales no eran los medios que empleaba, sino la destreza con que sabía utilizarlos. A la audacia de sus postulaciones ideológicas y programáticas, según sostenían críticos que no se encontraban solamente en el radicalismo; éstas sin embargo eran mucho menos impresionantes de lo que esos críticos afectaban creer, y sobre todo se equilibraban con otras que, en boca del doctor Balbín o sus adictos, no parecían alarmar a nadie. Por detrás de estas alegaciones dudosamente fundadas había por lo menos dos razones para este generalizado recelo. Una era la fatiga ante el cambio, la nostalgia de un pasado que el recuerdo había embellecido hasta hacerlo irreconocible (ya se los ubicara en los dorados años veinte añorados por las clases altas y medias o en los prósperos años cuarenta que formaban el mito rival, cada vez más vivo en la conciencia de los sectores populares); aun muchos de los que no hubieran querido pasar por hostiles a audacias ideológicas no se

sentían entonces sinceramente entusiasmados por la perspectiva de un futuro rico en transformaciones profundas. La otra era estrictamente personal: entre las muchas virtudes políticas del doctor Frondizi no figura la de lograr una fácil comunicación con el público al cual se dirige; la fría pasión con que enfrentaba opciones que no a todos parecían igualmente dramáticas tenía para muchos algo de incomprensible; en términos más generales, mientras de casi todos los políticos argentinos cada uno creía saber muy bien qué podía esperar, no era esa la impresión que despertaba el doctor Frondizi; su llamado a la audacia se identificaba así con la invitación a saltar a lo desconocido.

En esas condiciones la empresa política de la Intransigencia radical tenía de antemano algo de desesperado; pero una vez lanzado a ella, el movimiento no podía ya detenerse. La hostilidad al gobierno provisional, a la “constituyente-trampa”, que la Intransigencia se comprometía a destruir desde dentro, eran ahora cada vez más abiertas. Frente a un gobierno y unos partidos tradicionales, acusados de estar al servicio del imperialismo y la oligarquía, el radicalismo intransigente se proclamaba único defensor de los intereses nacionales y populares. ¿Tenía alguna posibilidad de reunir el imponente apoyo electoral capaz de equilibrar la hostilidad implacable de esos enemigos cuyo inmenso poder no se cansaba de evocar, y que se había jurado erradicar del país? Sobriamente examinada, la situación no prometía ninguna victoria abrumadora para la Intransigencia; era dudoso que le asegurara aun un triunfo moderado. Para un electorado que se suponía hostil a los voceros del pasado una propaganda insistente exhibía en el doctor Frondizi a la única alternativa abierta frente a ellos, y mostraba en la victoria intransigente en las elecciones a la Asamblea el medio para asegurar el triunfo de ese candidato presidencial con el que por hipótesis proclamaba identificadas a vastas mayorías populares. Pero ese electorado, cuyo mal humor ante el resurgimiento de la Argentina preperonista era evidente, ¿estaba efectivamente identificado con la causa que el doctor Frondizi defendía? ¿Hasta qué punto la alternativa obvia a ese demasiado vigoroso retorno al pasado que había sido el peronismo estaba efectivamente olvidada? A medida que se acercaba el momento en que el electorado debía hablar, la seguridad de que en efecto lo estaba comenzó a desvanecerse. Cada vez más, la propaganda intransigente buscaba retomar el tono y los motivos de la peronista; por su parte el gobierno mostró inesperada tolerancia ante la resurrecta voz del partido caído, que convocaba a sus fieles a expresar su repudio a la constituyente y a ese mismo gobierno a través del voto en blanco. Había ya, en efecto, signos sobrados de que el peronismo seguía siendo una fuerza política perfectamente viva y presente; uno aún más impresionante lo iba a proporcionar en agosto y setiembre

de 1957 la Confederación General del Trabajo, donde las elecciones convocadas y controladas por interventores militares asesorados por sindicalistas hostiles al peronismo no lograron dar al congreso que debía normalizar la vida de la central obrera la segura mayoría adicta que el gobierno esperaba; el congreso concluyó así en un gigantesco escándalo (desencadenado por los peronistas, que resultarían luego igualmente incapaces de asegurar para sí el quórum de la asamblea) pero el episodio tuvo consecuencias permanentes: la prueba que había proporcionado de la vitalidad del movimiento derrocado dos años antes no iba a ser ya ignorada por ninguno de los sectores actuantes en la política argentina.

Las elecciones de constituyentes habían proporcionado ya otra igualmente clara: el voto en blanco, expresión del sector del electorado que permanecía irreductiblemente peronista, alcanzaba un número de sufragios mayor que el de cualquiera de las agrupaciones políticas que se disputaban la victoria (aunque sin duda sus algo más de dos millones cien mil votos eran menos de la mitad de los que el Partido Peronista había logrado reunir desde el poder tres años antes, y sólo superaban por pocas decenas de miles los que ahora se habían volcado tras el radicalismo popular). El veredicto era igualmente claro en cuanto a la Intransigencia; sin duda había conquistado un apoyo electoral considerable (un millón ochocientos mil votos) que, gracias a los azares de la representación proporcional, hacía del bloque intransigente el más numeroso de la asamblea. Pero ello era así porque la fuerza de esa fracción radical se encontraba sobre todo en las provincias menos pobladas, sobrerrepresentadas en la convención; en esas áreas marginales la prédica renovadora del doctor Frondizi no había podido ser el elemento determinante del éxito alcanzado; lo era más bien la sólida estructura partidaria, mantenida en la lealtad al jefe nacional por la decisión de un conjunto de caudillos de prestigio sólo local. En el Litoral, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, la Intransigencia afrontaba en cambio un grave revés electoral (sólo atenuado aquí también en algunos rincones arcaicos donde el prestigio de un jefe que le había permanecido fiel había frenado las deserciones en favor de la otra fracción radical). El equilibrio partidario argentino era mucho más rígido de lo que había parecido en setiembre de 1955; ni aun el derrumbe del régimen peronista había bastado para transformarlo profundamente, y en él no había lugar para ese movimiento político íntimamente renovado que se había propuesto llevar al triunfo el doctor Frondizi.

Pese a su relativo fracaso, la Intransigencia radical seguía siendo un obstáculo para cualquier salida a la medida de los deseos del gobierno

militar. Cumpliendo con el compromiso públicamente asumido, los convencionales intransigentes se retiraron de la Asamblea de Santa Fe, para ser seguidos en esa actitud por los poco numerosos representantes de la Unión Federal (la antes llamada Unión Federal Demócrata Cristiana, que agrupaba a sectores católico-nacionalistas), por los escasos neoperonistas presentados y elegidos ignorando la consigna del voto en blanco, y finalmente por el sector del radicalismo del pueblo orientado por el doctor Sabattini. Cada una de esas deserciones estrechaba más peligrosamente la distancia entre el número de convencionales presentes y el quórum necesario para que la asamblea sesionase. Por otra parte el interés que sus deliberaciones despertaban era limitado; el cuerpo comenzó por examinar larga y apasionadamente las imputaciones retrospectivas que se lanzaban conservadores y radicales del pueblo, mientras la bancada socialista (representante de medio millón de votantes, una masa comparable con la que apoyaba al conservadorismo) y la comunista no ahorran a los empedernidos disputadores sus elocuentes llamados a la compostura parlamentaria.

Finalmente, tras aprobar un artículo que actualizaba la lista de derechos individuales garantizados por la constitución de 1853, cuando debía considerar las reformas al texto de ésta preparadas por el bloque Radical del Pueblo (entre ellas las que transformaban en norma constitucional ciertos principios propios del nacionalismo económico y la que reservaba la enseñanza superior a las universidades nacionales) el cuerpo se vio imposibilitado de seguir sesionando por el retiro de la representación conservadora, que lo privó definitivamente del quórum necesario. Esa actitud fue interpretada no sólo como la tentativa de obstaculizar reformas juzgadas demasiado audaces; para algunos escondía mal el propósito de poner fin prematuro a un proceso de normalización política que sólo dejaba como alternativa viable al triunfo intransigente la victoria del radicalismo del Pueblo, cada vez más dispuesto a disputar a la fracción rival las banderas nacionales y populares que ésta había esgrimido con tanta energía; había aun quienes sostenían que, al actuar como había actuado, el bloque conservador había contado con asesoramientos y promesas de muy altas figuras del gobierno, que comenzaban a alarmarse ante la impasibilidad con que el presidente Aramburu proseguía aplicando un plan político en cuyo cumplimiento había sin duda comprometido su honor, pero que parecía destinado a concluir en catástrofe.

Y había todavía otro motivo para el desapego conservador ante la Asamblea Constituyente: la victoria de los radicalismos, partidos que contando

con el apoyo permanente de sectores minoritarios del electorado habían sabido engrosarlos con la adhesión circunstancial de votantes que habían visto en ellos la alternativa menos ingrata en opciones políticas demasiado graves para no buscar sobre todo la eficacia dando su apoyo a una masa de votantes ya considerable, y dejando así de lado los matices de su personal opinión quizá mejor representados por los partidos minoritarios. El radicalismo del Pueblo defendía a la vez sus intereses y los de su rival ausente al bloquear las tentativas, surgidas de los partidos menores, de reformar el texto constitucional que hacía dudosamente aceptable la implantación de la representación proporcional en reemplazo del sistema que la aseguraba a la mayoría y la primera minoría (en el que —sin duda equivocadamente— tanto los partidos minoritarios como los radicalismos veían la fuente última de la polarización cada vez más manifiesta del electorado argentino); esa actitud radical hacía que no sólo el bloque conservador, sino también los demás minoritarios sintieran creciente desapego por la constituyente, y —en términos más generales— por el plan político, destinado a arrojarlos a una permanente marginalidad.

El desenlace del proceso revolucionario estaba entonces en manos de las fracciones rivales del radicalismo. El sector más cercano al gobierno de Aramburu buscaba introducir sólo un mínimo de elementos nuevos en el cuadro político existente: una reiteración de los resultados electorales de mediados de 1957 hubiera sido suficiente para darle la presidencia y —gracias al diferente sistema electoral— una sólida mayoría en la Cámara de Diputados, aunque no en el Senado. El temor de los sectores conservadores de la opinión hacia la incógnita que representaba la Intransigencia permitía al radicalismo del Pueblo conservar el apoyo de éstos y a la vez disputar, desde la situación privilegiada que le conferían sus contactos con el poder, el título de partido de renovación política y social que la Intransigencia se había asignado. Una prueba de ello se tuvo cuando, en vísperas de la elección presidencial, el gobierno de Aramburu anuló las concesiones eléctricas de 1936, cuya escandalosa memoria —muy presente en todos los críticos póstumos que desde distintas perspectivas se encarnizaban con la etapa de restauración conservadora— estaba particularmente viva en la Intransigencia radical (el alvearismo figuraba en efecto, como sus enemigos íntimos no se cansaban de recordar, entre los grupos políticos más afectados por la corrupción que el episodio había puesto de manifiesto).

Pero esas medidas audaces del radicalismo popular (firmemente en manos de su sector intransigente, que impuso ambos términos de la fórmula

presidencial Balbín-del Castillo) no eran la única preparación del gobierno y el que había venido a ser su partido para la decisiva jornada electoral. El peronismo había revelado ser una fuerza considerable ¿y no era posible usarla para evitar el triunfo del que había venido a ser principal adversario? Un levantamiento parcial de la proscripción del partido antes oficialista, o una abstención de éste, en aparente oposición y en real alianza con el gobierno, podrían ser el comienzo de lentos avances hacia la plena igualdad política, en una táctica parecida a la que a partir de 1930 logró alejar al radicalismo de la senda revolucionaria.

Para el doctor Frondizi la situación se presentaba a la vez menos fácil y más prometedora. La elección de constituyentes había revelado que no era el heredero del peronismo; aun podía sin embargo ser su aliado. En lugar del nuevo nucleamiento que reuniría en un espíritu de acrecida militancia a todos los adversarios del imperialismo y la oligarquía, quedaba abierto el camino para una aproximación ocasional en la que el beneficiario inmediato debería pagar un elevado precio por los servicios recibidos. Era una base demasiado endeble para cualquier acción política en exceso audaz; el doctor Frondizi no parece haberlo lamentado demasiado largamente, y en los meses anteriores a su elección comenzó una evolución cuidadosamente ritmada hacia posiciones más moderadas. Firme creyente en la íntima vinculación entre los alineamientos políticos y los sociales, tras descubrir que no era —como había creído y esperado— el portavoz de una coalición de sectores populares cuyo centro de gravedad se hallaría en el proletariado industrial, el doctor Frondizi se asignó un nuevo papel como vocero político de la burguesía nacional. En su nombre el señor Frigerio comenzó a través de la revista *Qué* una campaña de adoctrinamiento de este sector, de existencia sólo hipotética, al que se trataba de hacer la clase-guía en la futura revolución pacífica destinada a cambiar el rostro mismo de la Argentina. Pero el cambio de guía implicaba también un cambio de revolución: la lucha contra el imperialismo y la oligarquía era interpretada ahora como un combate más circunscrito contra los sectores nacionales y extranjeros que habían prosperado en la etapa argentina clausurada en 1930, y buscaban reabrirla. Los adversarios eran en lo interior la clase terrateniente (que sólo años después un oportuno cambio en la doctrina incorporaría a la burguesía nacional), y en lo exterior la Gran Bretaña; los empresarios industriales no tenían ahora la situación ambigua que el peronismo les había asignado; eran por lo contrario los jefes naturales de la nueva alianza de clases; y si los Estados Unidos, si no eran aún exhibidos como el país pionero y guía de esa cada vez más

curiosa empresa revolucionaria, se veían por lo menos libres de los ataques que la Intransigencia les había prodigado en el pasado.

Esa búsqueda de nuevos apoyos se dio aun más claramente en cuanto a la política interna. La conveniencia de contar con sostenedores en la derecha fue descubierta bien pronto por la Intransigencia, que buscó y obtuvo contactos con los sectores nacionalistas desplazados en noviembre de 1955, esperando por medio de ellos ganar algún influjo en el cuerpo de oficiales; del mismo modo la benevolencia eclesiástica fue abiertamente solicitada por el doctor Frondizi al responder positivamente a casi todas las exigencias planteadas públicamente por el episcopado en vísperas electorales (de modo muy característico, tras pronunciarse por la llamada libertad de enseñanza y contra el divorcio absoluto, sólo se resistía a seguir a los obispos en el problema de la pluralidad sindical frente al cual éstos asumían posiciones contrarias a las del peronismo). Esos apoyos políticos eran sobre todo útiles para hacer menos inaceptable al ejército un veredicto electoral favorable al candidato intransigente; el del peronismo era todavía indispensable para obtener esa victoria que se trataba de hacer respetar, y ese apoyo sólo era asequible a través del que, desde sus distintos lugares de destierro, seguía siendo el jefe universalmente obedecido del movimiento. Las negociaciones se imponían y si éstas podían permanecer secretas, su resultado —la exhortación de Perón a sus adictos en favor del voto por los candidatos intransigentes— debía necesariamente hacerse público, con las esperables reacciones de los oficiales revolucionarios y de la opinión antiperonista ante el descubrimiento de que, luego de dos años y medio de su caída, Perón era el árbitro del equilibrio político argentino: en efecto, sólo un alud de discos y fotocopias de una orden manuscrita terminó por convencer aun a los más desconfiados de que el deseo de Perón era que sus adictos votaran las listas de la intransigencia radical.

De este modo, el 23 de febrero de 1958, el espectro del alud popular de doce años antes pareció volver a avanzar por todo el país. Pero si las cifras eran más abrumadoras que en 1946, su significado era menos claro: el hecho mismo de que allí donde el resultado fue recibido con entusiasmo y no con consternación, el nombre aclamado era el del ex presidente artífice de la victoria electoral, y no el del futuro presidente beneficiario de ella, era bastante indicativo de que la mayoría conquistada con tanto trabajo por el sabio arte combinatorio del doctor Frondizi no lo aseguraba contra las acechanzas de los numerosos adversarios que en su fulgurante carrera había acumulado. Confiando en su innegable destreza política, en la justeza de la renovada imagen de la

realidad nacional en la que su acción había de insertarse (en la que parecía creer con fe tan sólida como la que había depositado en la abandonada unos meses antes) el nuevo presidente se preparaba para una navegación necesariamente tormentosa; junto con su suerte la que estaba en juego era la de la nueva experiencia constitucional que la Argentina comenzaba, marcada desde el comienzo por ambiguos auspicios. En setiembre de 1955 el retorno a una práctica más ortodoxamente fiel a los cánones del constitucionalismo liberal había parecido (aun a los críticos más tenaces que esta solución había encontrado desde la derecha) la solución obvia. En febrero de 1958 esa solución había ya sido descartada; la vitalidad del peronismo —signo de la actualidad permanente de las opciones que la nación había enfrentado bajo su égida— había obligado a inaugurar un nuevo intento de cuasi-democracia. Pero, con dos experiencias ya concluidas en fracaso (la de la restauración conservadora, que sencillamente había falsificado los resultados electorales, la del peronismo, que había fabricado una clientela electoral a la medida de los deseos del gobierno, pero a un costo demasiado elevado para que la Argentina pudiera afrontarlo de modo permanente sin emprender esas transformaciones sociales básicas que ni el peronismo ni sus más decisivos apoyos deseaban) la única que quedaba abierta era la muy precaria que buscaba orientar los resultados electorales sin producir hechos capaces de reorientar masivamente la opinión del electorado y sin ignorar en forma abierta su veredicto, mediante la fijación de las reglas del juego electoral de modo tal que las alternativas propuestas al cuerpo de votantes forzaran de alguna manera la canalización de sus sufragios. Era



FIG. 7.28. Aramburu, Rojas y Frondizi, mensaje postelectoral del 23 de febrero de 1958 (Archivo General de la Nación).

un procedimiento engoroso y muy poco decoroso, que obligaba a esconder tras un velo demasiado transparente de argumentos de principio los motivos de pura oportunidad que llevaban a planear constantemente nuevas reformas del sistema electoral y del régimen legal de los partidos. Lo que era más grave: era un procedimiento esencialmente aleatorio, sobre todo cuando enfrentaba una masa de maniobra tan vasta y disciplinada como la que Perón podía lanzar sin cesar contra las frágiles vallas erigidas por la astucia de los gobiernos sucesores. Y lo que era aun más grave, infinitamente más grave, esas proezas de un discutible virtuosismo político eran contempladas por un público impaciente y dispuesto a mantener severas exigencias a la vez éticas y tácticas: el cuerpo de oficiales revolucionarios, que si se disponía a entregar, tras no escasas vacilaciones, la presidencia (sería excesivo decir el poder) al candidato triunfante, no interpretaba ese gesto que hallaba magnánimo como un compromiso permanente con la extraña legalidad que la gestión del gobierno militar había creado.

5. LAS EXPERIENCIAS CONSTITUCIONALES

¿Sólo una lucha cotidiana por la supervivencia quedaba abierta al vencedor del 23 de febrero? Había sin duda una alternativa: la consolidación permanente del “frente nacional y popular” victorioso en febrero en un movimiento unificado, en el cual —según las interpretaciones sociales, tan libremente imaginativas, que el señor Frigerio seguía prodigando— la clase obrera (políticamente representada por el peronismo) aceptara la tutela de la burguesía nacional (o sea de la Intransigencia). En términos menos fantasiosos, un movimiento en que el peronismo, ya persuadido de que un abierto retorno al poder le estaba vedado, aceptara ser representado por un equipo de políticos profesionales de reducida clientela propia, capaces de garantizarle el seguro dominio de las estructuras sindicales en que estaba descubriendo su más sólida fortaleza, y a la vez de ofrecer a muchos de sus hombres la posibilidad de un discreto y paulatino retorno a la escena política en las filas del partido unificado. Esta solución, que no ofrecía sino ventajas a la Intransigencia, que aun ofrecía algunas al peronismo, no ofrecía en cambio sino motivos de alarma para los jefes militares. Sin duda la fragilidad del orden constitucional restaurado podía también alarmarlos; pero esa fragilidad misma dejaba abierto el camino para corregir las desviaciones del poder civil mediante nuevas intervenciones militares. Del talento del doctor Frondizi podía temerse que hiciera del partido

unificado un sólido instrumento de poder, colocado firmemente en sus manos; así consolidado el sistema político, la tutela militar se atenuaría hasta desaparecer. Esto era particularmente grave porque el doctor Frondizi no contaba con la confianza de la mayoría del cuerpo de oficiales, y el hecho de que hubiera ganado la presidencia contra las módicas astucias que esa desconfianza militar había inspirado lo hacía aparecer aun más peligroso. La alianza íntima con el peronismo no era tampoco un elemento tranquilizador (aunque ya algunos jefes militares, persuadidos de que el peronismo no desaparecería muy pronto del espectro político argentino, preferían insistir —más bien que en la intrínseca perversidad del aliado buscado por Frondizi— en la inmoralidad política que implicaba hacer pacto con un antiguo y mortal adversario). Era entonces comprensible que el cuerpo de oficiales no estuviera dispuesto a amenguar un celo antiperonista que comenzaba ya a tener por inactual, en beneficio de los planes políticos del que era —para algunos entre los más influyentes jefes militares— el más peligroso adversario de la hora. Y con ello venía a hacerse más difícil al presidente de la República ofrecer a sus potenciales aliados, si no las concesiones que cualquier arreglo implicaba, una garantía suficiente de que se hallaba en condiciones de mantenerlas contra una prolongada presión militar.

Por añadidura la perspectiva de una consolidación del bloque triunfante resultaba igualmente alarmante para el desterrado ex presidente, sin cuya personal decisión ese triunfo no habría podido darse; de nuevo muy comprensiblemente, Perón no estaba dispuesto a facilitar el proceso que al dar un heredero al peronismo lo relegaría al pasado; de modo aún más sistemático que sus rivales militares, iba a enfrentar con los vastos medios de que disponía las tentativas de institucionalización de la coalición vencedora.

Eran demasiados adversarios para un proyecto que no pasó de ser una veleidad de algunos dirigentes del nuevo gobierno, y que aun dentro del partido oficial encontró la resistencia difusa de muchos dirigentes menores, cuyo antiperonismo sólo había sufrido atenuaciones tácticas. Excluida esa solución, al gobierno de Frondizi sólo le quedaba la muy problemática de abrir al peronismo el camino de la legalidad, y presidir la reorganización de una CGT a la que la ley sindical patrocinada por la Intransigencia conservaría el monopolio de la representación del movimiento obrero y en la cual el clima político dominante aseguraría —según se esperaba— una sólida mayoría peronista. El nuevo presidente cumplió puntualmente estos compromisos preelectorales, y no fue sin duda responsabilidad del gobierno que sectores enteros del aparato

sindical (entre ellos el ferroviario) resistieran por el momento con éxito y con suficiente apoyo de las bases, que en el plano político habían demostrado su lealtad al peronismo, al retorno ofensivo de los dirigentes de esa orientación, dando así al sindicalismo emergente tras la etapa represiva una fisonomía menos definida de lo que hubiera sido esperable, e imponiendo el de transacciones como único método posible para alcanzar —y ello sólo luego de cuatro años— la unidad sindical, una aspiración a la que ninguna de las corrientes del movimiento obrero osaba mostrarse indiferente.

En todo caso el gobierno no había de lamentar la fragmentación de un movimiento sindical en el que no podía contar con apoyos seguros. El presidente necesitaba la benevolencia del peronismo, así fuese por breves meses, para introducir con menores riesgos la atrevida reorientación que ahora juzgaba ineludible; ella imponía además una también breve etapa de relativa concordia social, que el doctor Frondizi no vaciló en comprar a un precio económicamente muy alto, al conceder poco después de asumir la presidencia un aumento general de salarios del 60 por ciento.

Esa reorientación, llevada adelante por el doctor Frondizi con su habitual ritmo fulminante, era en suma la renetición de la que el peronismo había vacilado en realizar a fondo inmediatamente antes de su caída: la apertura del país al avance que se esperaba arrollador de las inversiones extranjeras. El sector escogido por el presidente para comenzar la transformación de su política económica fue el petrolero, por el que había ya mostrado antigua predilección: tomando personalmente a su cargo la dirección del organismo petrolero estatal, el doctor Frondizi promovió la concertación de contratos de explotación con empresas primero norteamericanas y luego también británicas, que no sólo debían reducir las importaciones de combustibles, sino también crear un clima adecuado para que inversionistas de otros sectores imitaran a los petroleros. La radicación de nuevas industrias fue promovida también de modo sistemático pero con resultados no fáciles de medir con precisión; al mismo tiempo el gobierno buscó acudir al crédito externo y alentó a empresarios privados a imitarlo; de este modo la Argentina llegó a acumular en breve tiempo una imponente deuda a corto plazo, que —en ausencia de una conjunción casi milagrosa de circunstancias favorables— debía tener consecuencias muy duras en un futuro no remoto.

Esa nueva política económica no pudo introducirse sin escándalo, pero el que ella provocó no fue el único que jalonó el primer año del gobierno

de Frondizi. En setiembre éste cumplía sus promesas a los obispos, y —venciendo vastas y clamorosas oposiciones dentro y fuera del partido oficial— concedía autorización para que las universidades privadas otorgaran títulos académicos. Ya para entonces la benevolencia de los sectores populares y la relativa cordialidad del peronismo eran cosas del pasado, y la agitación estudiantil (que llegó a erigir barricadas en algunas calles de la Capital) fue un bienvenido pretexto para reimplantar el estado de sitio. La austeridad económica impuesta en noviembre no sólo era una necesidad impostergable ante las consecuencias de la alegre política financiera de los primeros meses de administración frondizista: era la política adecuada para un partido que, separado de sus apoyos originarios, debía buscar otros nuevos en grupos más conservadores.

Pero esa rectificación de la línea económica no produjo realineamientos tan amplios e inmediatos como sin duda el presidente había esperado; por una parte los sectores conservadores, si estaban dispuestos a utilizar plenamente las oportunidades que la nueva política económica les ofrecía, lo estaban mucho menos a agradecer su implantación al partido en el gobierno; sabían demasiado bien que era una iniciativa de espontaneidad más que dudosa; no sabían mejor que el resto del país cuál era el propósito último del aplomado político que había abandonado de un día para otro las ideas, los giros de lenguaje y hasta la vestimenta de nuestra izquierda más radical por las ideas, los giros y —sí, también la vestimenta— habituales en nuestros dirigentes conservadores esclarecidos; es muy comprensible que no se hayan decidido a unir su destino al de quien acababa de mostrarse tan capaz de separarlo de las causas con las que había aparecido más hondamente identificado.

El mismo recelo ante la personalidad proteica del presidente se acentuaba en el cuerpo de oficiales. ¿Cómo creer que un político tan dueño de sus recursos habría de admitir como definitivo un equilibrio que daba el control de las fuerzas armadas a oficiales que le eran hostiles? Sólo una constante vigilancia podría salvar a éstos de las esperables maniobras presidenciales. Las consecuencias de ese sentimiento pudieron medirse ya en 1958, cuando una rebelión pacífica pero decidida de la Aeronáutica obligó a alejarse al secretario de esa arma, demasiado devoto al doctor Frondizi. A partir de entonces el presidente pasó a ser, a la vez que la personificación de la legalidad republicana que las fuerzas armadas se proponían aún sostener, un elemento extraño y perturbador del orden militar; la marginación deliberada del Jefe Supremo que la constitución daba a las fuerzas armadas terminó por afectar gravemente la misma estructura jerárquica de éstas; la modalidad deliberante, que

era consecuencia de la revolución de 1955 y de los continuos reajustes por ella introducidos en el cuerpo de oficiales, pero que el gobierno militar había sabido limitar, se imponía ahora plenamente, y a partir de esas primeras escaramuzas se llegaría paulatinamente a la situación en que ya no se hallaba sorprendente que un general de la nación proclamara que las opiniones que exponía no le eran personales: eran las de la guarnición que comandaba, y al defenderlas actuaba ligado por un mandato de sus nominalmente subordinados...

Sin duda el gobierno de Frondizi advirtió bien pronto los peligros que derivaban de esa actitud militar, y para hacer menos fácil la tarea de quienes quisieran derribarlo buscó bloquear cualquier salida constitucional: a fines de 1958 una denuncia del ministro del Interior, que lo acusaba de estar comprometido en una conspiración, obligaba a renunciar al vicepresidente Gómez, que ya no sería reemplazado; según la interpretación más aceptada de la letra constitucional, la falta simultánea de presidente y vicepresidente obligaría a celebrar elecciones en plazo perentorio (una solución que, como todos saben, no está en la Argentina libre de riesgos). Esas precauciones no fueron sin embargo suficientes: en julio la publicación por Perón del supuesto texto del pacto concertado entre él mismo y Frondizi gracias a los buenos oficios del señor Frigerio provocó una alarmante tormenta militar; a ella sólo sobreviviría el presidente alejando solemnemente de su lado a su supuesto agente (al que la oposición había asignado ya el papel de consejero diabólico y corruptor sistemático de la moral política y administrativa) y admitiendo para dirigir su política económica y financiera al señor Alsogaray.

El nuevo zar de las finanzas contaba con la confianza de las fuerzas armadas, de cuyas filas había salido, pero no era esa la única razón de su encumbramiento: luego de una breve gestión ministerial durante la etapa revolucionaria, había fundado un partido pequeño, pero rico en recursos económicos, cuyo influjo llegaba más lejos de lo que su exiguo caudal de votantes hubiera permitido suponer. El Partido Cívico Independiente no se cansaba de evocar, en una colorida propaganda cuyo éxito mostraba que no sólo las clases populares son sensibles a la demagogia, ese "gran cambio" (consistente en la eliminación súbita de todos los controles estatales sobre la economía nacional) que devolvería una eterna prosperidad al país. Ahora Alsogaray estaba en condiciones de aplicar su sencilla panacea; afortunadamente contaba en la empresa con el asesoramiento de figuras ya probadas en la década del 30; debido a ello su acción económica perdió sin duda en novedad, pero acaso haya ganado en otros aspectos.

Esta solución no parecía despertar el entusiasmo del presidente de la República, y es muy comprensible que así fuera: si debía seguir afrontando el costo político de la nueva política económica (en la penuria provocada por las medidas antiinflacionarias, el peronismo, ahora lanzado a una campaña terrorista muy activa, encontraba un clima particularmente favorable) no podía aspirar a utilizar en provecho de su propia empresa las adhesiones que la nueva línea económica despertaba entre los que se habían beneficiado o esperaban beneficiarse con ella; el señor Alsogaray era maestro en ocupar el primer plano cuando se trataba de exponer a ese escogido público la línea oficial, y aunque así no fuese tenía sobre el presidente la ventaja de que la política que practicaba no estaba demasiado alejada de la que siempre había proclamado buena.

Lo que era más grave para el presidente Frondizi: la colocación de su gestión económica bajo la tutela de Alsogaray no era tampoco suficiente para ahorrarle nuevas inquietudes militares; en setiembre de 1959 una disputa por el cargo de Comandante en Jefe del Ejército estuvo a punto de concluir en reglada batalla de tanques en el centro de Buenos Aires. Si el choque pudo ser evitado (sacrificando el presidente al candidato que, por ser abiertamente partidario del mantenimiento del orden constitucional, despertaba fuertes reservas entre sus camaradas) el episodio



FIG. 7.29. Tanque del Regimiento 8 de Tanques Cazadores, 20 de setiembre de 1962 (Archivo General de la Nación).

servió para hacer más estricta la tutela de los alarmados jefes militares sobre el gobierno civil. En esa difícil coyuntura, por lo menos el gobierno pudo salvar con relativa fortuna el escollo electoral de marzo de 1960. En los comicios de renovación parcial de la cámara de Diputados un peronismo vuelto al voto en blanco reencontraba su caudal de la elección de constituyentes (con defecciones en las zonas rurales y marginales compensadas con votaciones aun más masivas en las áreas populares urbanas, debidas en parte al apoyo del comunismo y otros movimientos de izquierda expulsados de la legalidad por el gobierno de Frondizi), el radicalismo del Pueblo sufría reveses muy limitados, pero los partidos menores, desde los conservadores hasta los socialistas (que se habían dividido en una rama socialdemócrata y ortodoxamente antiperonista y una que se quería revolucionaria y comenzaba a aproximarse, no sin timidez, al peronismo) eran los principales derrotados; el partido de gobierno, por su parte, si no podía exhibir un claro aval del electorado en favor de su nueva línea política, se mostraba en proceso de sustituir a la otra fracción radical como primera agrupación no-peronista del país.

Ese resultado, relativamente satisfactorio para el gobierno, sólo por breve plazo influyó para consolidarlo. A partir de 1960 la tensión política volvería a agudizarse en la Argentina; si es innegable que la responsabilidad corresponde en parte al gobierno de Frondizi, es evidente también que —al margen de la gestión de éste— sobran factores internos y exteriores que empujaban a una polarización creciente. El gobierno, en efecto, había descubierto para su capacidad de sobrevivir electoralmente a dos años de gestión en extremo impopular (coronados en el largo invierno de austeridad económica con que se había inaugurado la gestión de Alsogaray) una razón al parecer valedera: era, por primera vez en la Argentina moderna, el gobierno de un partido sustancialmente conservador, pero no reclutado en esas clases altas tradicionales cuya pretensión de monopolizar el poder es recusada aun por los sectores políticamente más moderados del resto de la sociedad argentina. En esta coyuntura, era comprensible la tentación de utilizar al máximo las posibilidades apenas descubiertas para ampliar aun más sus bases electorales: si lograba el apoyo masivo del electorado no-peronista, el partido del gobierno estaría en condiciones de vencer a un peronismo devuelto a la legalidad; la reconstrucción constitucional comenzada en 1958 superaría así la prueba decisiva . . . Pero esa línea política, que confiscaba el sentimiento antiperonista en beneficio de un partido que no lo había mostrado muy consecuente, provocaba la enemiga implacable del personal dirigente de todos los otros movimientos políticos no peronistas actuantes en el país, condenados por ella a la extinción. La implacable unanimidad con que

un elenco político teóricamente adherido al respeto de las formas constitucionales empujó en 1962 a su quiebra —en la que veía sobre todo el medio de librarse del rival que había amenazado barrerlo del horizonte— se debe acaso, más bien que a los devaneos filoperonistas de Frondizi, a su tentativa posterior de utilizar en su provecho la reacción frente a la perspectiva de un retorno triunfal del peronismo por vía electoral.

Pero no era ésa la única imagen apocalíptica que comenzaba a proyectarse en el horizonte nacional. En 1959 la prensa antiperonista celebraba



FIG. 7.30. Policía custodiando la entrada de la Casa de Gobierno. Crisis militar del 30 de marzo de 1962 (Archivo General de la Nación).

el triunfo de la revolución cubana, con la que creía tener tanto en común; sólo paulatinamente la existencia de un nuevo modelo de revolución latinoamericana comenzó a ser advertida desde la Argentina. Para el gobierno la crisis cubana —y luego el cambio en la dirección política de Estados Unidos— abría la posibilidad de una reinterpretación menos ortodoxamente conservadora de la política internacional argentina, para la cual creía encontrar un modelo válido en las mesuradas audacias de la diplomacia brasileña. Esa reorientación suponía sin embargo una relativa estabilidad del equilibrio político y social interno, que lo hiciese insensible al estímulo para nuevos cambios que la revolución cubana implicaba. Pero suponer que así estaban las cosas implicaba una grave exageración: a comienzos de 1961 la revolución que estaba llevando a la gran Antilla a la integración en el bloque socialista era el modelo político en cuyo nombre un veterano parlamentario, el doctor Alfredo



FIG. 7.31. El Papa Juan XXIII recibe en audiencia especial al presidente Frondizi, 1960 (Archivo General de la Nación).

Palacios, sólo recientemente embajador de los gobiernos de Lonardi y Aramburu, se postulaba ante los votantes de la Capital para una banca de senador. Su triunfo, y el de la fracción izquierdista del socialismo (que sólo había contado con el apoyo de sectores marginales del peronismo, pronunciado de nuevo en su mayoría por el voto en blanco) fue causa de inmediata alarma interna e internacional; por primera vez la izquierda ofrecía una alternativa política válida, y para muchos observadores era dudoso que el peronismo pudiera resistir largamente a su atracción. Poco después la alarma pudo repetirse: en Añatuya, en el Chaco santiagueño, la disciplina de los votantes peronistas había obsequiado una nueva e inesperada victoria a la izquierda socialista. Aunque los veteranos dirigentes de ésta, poco entusiasmados por la perspectiva de consagrar sus últimos años a tareas distintas de las parlamentarias en que habían ganado tan justo prestigio, sumieron a su fracción de partido en una crisis que le quitaba toda peligrosidad inmediata para el gobierno, el síntoma que sus recientes victorias significaba no perdía con ello nada de su precisión: el doctor Palacios había sido llevado al Senado gracias a una tenaz propaganda que ofrecía como solución para los problemas argentinos la revolución social, y este término, al que el proceso vivido en Cuba daba un sentido más concreto que en el pasado, era usado con singular desenfado aun por figuras cuya trayectoria anterior había mostrado menos audaces. Por primera vez un país al que la dura experiencia peronista parecía haber encerrado en los términos de su propia y aislada experiencia política parecía descubrir que el peronismo no era la única alternativa al orden establecido; los primeros en advertirlo fueron los alarmados defensores de ese orden, al que veían ahora amenazado por un enemigo mucho más temible que el vencido en 1955.

Bajo esos ambiguos auspicios la tentativa de conservar una política exterior independiente comenzó a parecer cada vez más sospechosa a los guardianes civiles y militares del orden social argentino; ni aun la cautela con que el doctor Frondizi reservó la gestión de las relaciones exteriores a veteranos dirigentes del partido conservador (entre ellos el doctor Miguel Ángel Cárcano, que enfrentó con magistral destreza una campaña periódica basada en un manojito de documentos que probaban exhaustivamente la infiltración cubana en la política argentina, y cuyo único defecto era el de ser evidentemente falsos) salvó al presidente y sus ministros de ser acusados de cómplices (los críticos más caritativos no excluían que inconsistentes) de la conspiración comunista internacional. Con una tenacidad que revelaba hasta qué punto creía estar encontrando nuevas bases de poder político que le permitirían una creciente autonomía frente a sus

imperiosos asesores militares, el presidente perseveró sin embargo en su línea internacional, que lo llevó a una muy publicitada coincidencia con el doctor Quadros y a una más discreta entrevista con el doctor Ernesto Guevara, en quien esperaba encontrar un interlocutor para negociar un *modus vivendi* entre los Estados Unidos y la Cuba socialista. Esa actitud alcanzó su culminación en el discurso de Paraná, en febrero de 1962; el presidente defendía apasionadamente su política y se declaraba dispuesto a conservar relaciones con Cuba pese a las resoluciones tomadas por la asamblea de cancilleres americanos en Punta del Este. Pero unos días después se inclinaba nuevamente ante la decisión de los jefes militares, que le imponían la ruptura y el alejamiento del ministro Cárcano. Sin embargo la partida no estaba cerrada: un mes después el electorado (en la elección de renovación parcial de la cámara de diputados y en las de



FIG. 7.32. Frondizi en Grecia, 1961 (Archivo General de la Nación).

varios gobernadores de provincia) tendría ocasión de arbitrar entre el presidente y los militares, pero no sólo entre ellos: eran muchas las opciones políticas que se decidirían todas juntas ese día de marzo. El gobierno se había venido preparando para él; pese al clima internacional desfavorable y a sus graves repercusiones internas, buscaba tenazmente volver sobre la demasiado brutal rectificación de rumbos que siguió a su ascenso al poder. Por cierto no aspiraba a ser de nuevo el defensor intransigente de la independencia económica y de la justicia social; con todo advertía muy bien el peligro de identificarse en exceso con la política de austeridad que había debido adoptar bajo la doble presión de los organismos capaces de orientar el crédito externo, y de sectores sociales y de intereses cuyo poderío es sin duda grande, pero cuya popularidad en términos electorales es limitada. En esta tercera versión, la Intransigencia quería identificarse con el proceso de desarrollo que habría de superar, mediante un audaz salto hacia adelante, con las alternativas sociales y económicas frente a las cuales la Argentina peronista y posperonista no había sabido tomar su rumbo. Lanzada al futuro, no cometía el error de identificarse con ningún pasado, e invitaba a los argentinos a no dividirse frente a opciones que ya pertenecían irrevocablemente a él. Su identificación con una tentativa de superación del dilema entre peronismo y antiperonismo no restaba nada de su importancia al hecho de que la Intransigencia aparecía a la vez como la alternativa política más capaz de enfrentar con éxito a un peronismo devuelto a la acción electoral.

¿Pero ese éxito estaba realmente a su alcance? A lo largo de 1961 el gobierno nacional y los provinciales dedicaron lo mejor de su esfuerzo a asegurarlo. Ello imponía el alejamiento de Alsogaray, y no necesariamente para modificar el rumbo de su gestión económica (el ministro ya había mostrado ser capaz de inesperadas flexibilidades en la aplicación de su receta económica liberal) sino porque era intolerable que la política económica estuviese a cargo de una figura que además de no pertenecer al partido del gobierno, no tenía sino palabras de sarcasmo para la fe desarrollista tan fervorosamente profesada por el presidente Frondizi (y por el señor Frigerio, que había reaparecido a su lado a título privado).

Fuera porque no le siguió ninguna variación sustancial del rumbo o porque los limitados efectos de la ola de radicaciones e inversiones de 1958-59 se estaban agotando, la partida de Alsogaray no fue acompañada por cambios económicos capaces de influir directamente en el humor del electorado. El gobierno buscó suplir la falta de progresos

sensacionales en este aspecto mediante una amplia campaña de propaganda, planeada por un costoso equipo de asesores psicológicos, que mostraba en la victoria intransigente la única garantía para la paz y el progreso argentinos. Era una caracterización necesariamente vaga, entre otras cosas porque el partido oficial no sabía aún demasiado bien a qué contrincantes debería afrontar. A lo largo de 1961 una serie de elecciones locales mostraron a la Intransigencia realizando importantes avances electorales, que le permitían vencer al peronismo no sólo en provincias marginales sino aun en Santa Fe, donde el soborno preelectoral que el gobierno había vuelto a usar en vasta escala no es suficiente para decidir el resultado. Esa experiencia hacía menos probable que el jefe del peronismo permitiera a su partido afrontar en el conjunto de la nación una prueba que, en caso de serle adversa, significaría el fin de su personal carrera política. De este modo la Intransigencia, un partido que aunque no quería ser antiperonista buscaba constituirse en el favorito del electorado antiperonista, podía esperar conquistar a éste sin enfrentar siquiera el desafío que la presencia peronista implicaba.

Durante los afiebrados meses que precedieron a la consulta electoral, Perón cuidó de dejar abierta la posibilidad de una abstención de última hora; posteriormente explicó que lo había hecho para evitar que los partidos que lo reconocían como jefe (los neoperonistas que habían vuelto a acatarlo a cambio de un perdón general para sus dirigentes; el Partido Justicialista, organizado por los sectores más ortodoxos del peronismo, se encontraba en efecto proscripto) viesan cerrado el camino del comicio; para otros la concurrencia electoral fue impuesta por presiones de sus adictos a un Perón dudoso de las ventajas de adoptar ese temperamento. En todo caso el choque entre los bloques políticos heredados del reciente pasado quedaba cada vez más en primer plano; mientras el presidente Frondizi invitaba a votar por el futuro, su hábil ministro del Interior, el doctor Vítolo, convocaba a todos los demócratas para la batalla final contra las fuerzas de la subversión social y de la dictadura. . .

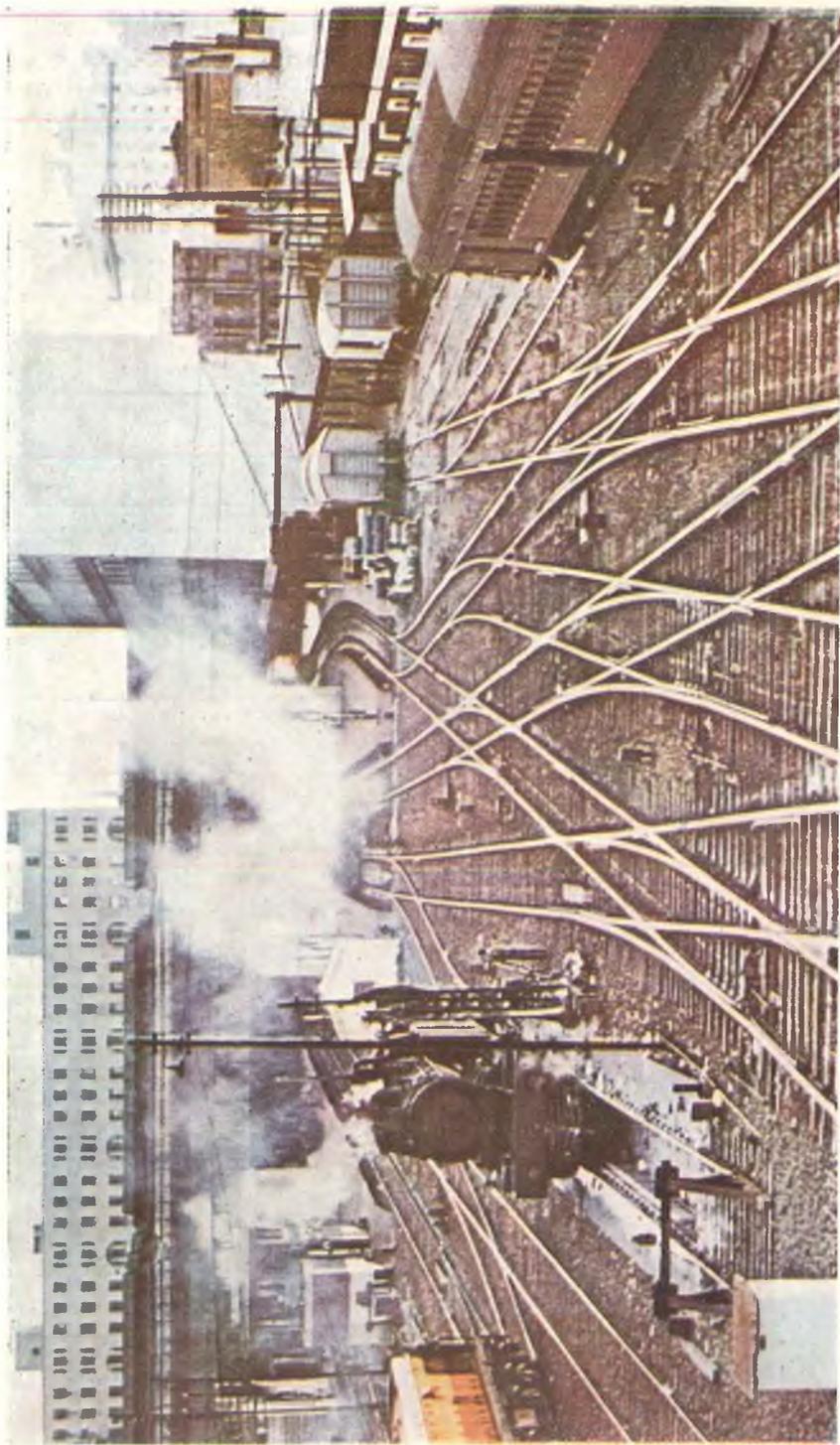
Ambas convocatorias fueron desoídas: el peronismo ganaba en casi todas las provincias, entre ellas la de Buenos Aires, de la que resultó electo gobernador Andrés Framini, dirigente del sindicato de obreros textiles. Al mismo tiempo la unificación del electorado no peronista tras la Intransigencia se revelaba incompleta; si gracias a ella en la Capital Federal el partido del doctor Frondizi se ubicaba en primer término, superando aun a los peronistas, esos resultados sólo se repetían



en Entre Ríos; en Buenos Aires los importantes avances de la Intransigencia sobre el radicalismo popular no le impedían quedar rezagada en cuatrocientos mil votos tras el millón cien mil que había apoyado la candidatura Framini; en Córdoba los progresos, mucho más moderados, de la Intransigencia, estuvieron a punto de entregar una provincia más al peronismo (al debilitar al radicalismo del Pueblo, finalmente vencedor por muy escasos sufragios).

Las cifras consagraban entonces el fracaso político de la experiencia intransigente. ¿Ese fracaso era total e irremediable? Hubo circunstancias que lo hicieron aparecer más abrumador de lo que en realidad era: la abundancia de las elecciones-piloto, a veces deliberadamente anticipadas y lanzadas en los distritos en que la Intransigencia podía hacer papel más airoso, dejaron casi todas las pruebas más riesgosas para la fecha decisiva; aun los resultados de ésta no revelaban avances importantes del peronismo salvo en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, y aquí la continuada proscripción del comunismo había facilitado el vuelco del electorado de izquierda hacia las listas peronistas (encuestas posteriores a la elección parecieron indicar que alrededor de un 15 % de los votos reunidos por éstas en esos dos distritos reconocían ese origen). Aun con esas atenuaciones, el gobierno había sido derrotado en una batalla cuyo carácter decisivo había aceptado de antemano; el presidente Frondizi se apresuró a intervenir las provincias en que el peronismo acababa de triunfar, sugiriendo que lo hacía debido a irresistibles presiones de las fuerzas armadas. Esta última sugerencia fue considerada por sus censores militares un crimen adicional, ya porque —como afirmaban algunos— el presidente se había anticipado por una vez a la expresión de los deseos de éstos, ya porque consideraban que entre las obligaciones inherentes al cargo figuraba la de asumir toda la responsabilidad de la política que le era impuesta.

Comenzaron así unos días febriles y confusos; la visita oficial del duque de Edimburgo pareció obligar a mantener las disidencias a un diapasón discreto, pero —tras una tentativa presidencial de organizar un ministerio con apoyo de otros partidos, sobriamente condenada por los dirigentes de éstos, y una declaración mortalmente precisa del general Aramburu, convocado como negociador, que requería renunciamientos patrióticos— la impaciencia militar no pudo esperar que partiera el regio visitante para alejar de la presidencia al doctor Frondizi; cuando el príncipe Felipe se decidió a anticipar su partida, el presidente que le había dado la bienvenida a la Argentina se encontraba ya atravesando una breve etapa de cautiverio en Martín García, luego de rechazar las



Estación Constitución.

alternativas de dimisión o destierro propuestas por los jefes militares, y lanzar una suerte de testamento político que lo devolvía a los temas por él tan frecuentados antes de llegar al poder: la necesidad de un frente unido entre los vencedores y los derrotados en la reciente jornada electoral, que retomara la lucha frontal contra el imperialismo y la oligarquía, volvía ahora a ser elocuentemente proclamada.

Así el doctor Frondizi venía a adaptarse más rápidamente que sus vencedores a la situación creada por su derrocamiento. Desde el comienzo



FIG. 7.34. Frondizi camino a Martín García.

pudo advertirse, en efecto, que los jefes militares no sabían qué hacer con el poder tan fácilmente conquistado. La instalación en la presidencia del doctor José María Guido, vicepresidente del Senado para casos de acefalía, provocó visible malhumor en algunos de los dirigentes del ejército: el doctor Guido era correligionario del doctor Frondizi, y por otra parte su elevación inauguraba necesariamente una etapa de semiconstitucionalidad que dejaba amplio campo a las manobras del antiguo partido de gobierno. Aun así, la solución Guido terminó por ser aceptada, después de que el nuevo presidente reiteró ante los comandantes de las tres armas el juramento ya formulado ante la Corte Suprema de Justicia. Esto no aclaraba demasiado las cosas: según las normas vigentes el doctor Guido hubiera debido convocar a elecciones a plazo breve, pero el resultado de éstas no podía sino ser catastrófico; los inspiradores militares del gobierno acariciaron por un momento el proyecto de hacer reformar la ley de acefalía por el Congreso, pero ello hubiera obligado a entrar en abiertas negociaciones con la aborrecida intransigencia radical. Finalmente las elecciones que habían provocado la caída de Frondizi fueron anuladas y el Congreso disuelto; el doctor Guido gobernaría sólo durante los dos años que restaban para completar el período presidencial del doctor Frondizi. Este progresivo alejamiento de las soluciones constitucionales era un signo más de los avances del sector militar que consideraba necesaria una larga etapa de ejercicio directo del poder; la permanencia en el cargo del sucesor de Frondizi, símbolo de una legalidad cada vez más aproximativa, era ella misma precaria.

Su destino dependía del equilibrio de tendencias entre los oficiales de las tres armas, abocados a hallar una salida para la crisis política, a la que bien pronto se sumó la crisis que azotó a la economía con severidad sin precedentes desde 1930. La gestión ministerial del doctor Pinedo, pese a su brevedad, tuvo efectos duraderos; luego de la brutal devaluación impuesta por el veterano político, el recuerdo de su gestión bastó para dar a su reemplazante, el señor Alsogaray, una paradójica popularidad aun entre los adversarios del liberalismo económico. Pero si la segunda gestión de Alsogaray no tuvo la violenta incidencia que la de Pinedo alcanzó en la economía nacional, poco hizo por borrar las consecuencias de las medidas por él tomadas. Y si la recesión, devastadora para la Argentina industrial, que la política oficial no quiso —acaso no pudo— paliar, tuvo finalmente para la economía rural los efectos positivos buscados, éstos no pudieron hacerse sentir sino a plazos más largos, demasiado tarde para atenuar el extremo malestar económico que sirvió de trasfondo a la crónica crisis política.

Pese a ese malestar las fuerzas sociales que habían hecho sentir tan imperiosamente su presión sobre el gobierno constitucional, los partidos políticos antes opositores que no habían vacilado en dar a la lucha un diapasón que contribuyó mucho a la caída de ese gobierno, mostraban ahora una extrema cautela; ni unos ni otros esperaban mucho de un enfrentamiento con los dueños del poder; todos, en mayor o menor medida, creían posible beneficiarse con el reordenamiento político y social que finalmente deberían encarar los jefes militares; la extrema indeterminación de los propósitos de éstos, que a largo plazo encerraba peligros muy serios, en perspectiva más corta les aseguraba una universal, aunque interesada, benevolencia.

La mostraba abiertamente el partido que había sido víctima inmediata de la acción militar: desde Martín García, y luego desde un más cómodo confinamiento en el Sur, el doctor Frondizi daba a sus partidarios el ejemplo de una permanente voluntad de negociación. En cambio intentaba ocultarla, aunque sin demasiado éxito, el movimiento cuyos avances electorales habían desencadenado la intervención militar: el señor Framini amenazó al gobierno con temibles reacciones si no le era entregado el cargo para el cual había sido elegido, pero éstas consistieron finalmente en su presentación en la sede de su frustrado gobierno en compañía de un escribano público. El acta oportunamente labrada documentó más allá de toda duda que el poder era negado al elegido del pueblo, que dio con ello por terminada su campaña de agitación contra el atropello del que había sido víctima, para volver al escenario sindical, donde seguiría cosechando menos disputados triunfos. En su pacífica incursión a la casa de gobierno de La Plata el señor Framini contó con la compañía de un grupo de dirigentes de otros partidos que, si entendían ganar así la simpatía del peronismo, no renunciaban por ello a sus lazos con el gobierno y sus inspiradores militares. Dar su sello a una solución electoral que volcara el caudal peronista por canales aceptables al cuerpo de oficiales era ahora la ambición de más de un jefe partidario; el doctor Horacio Sueldo, tras arrebatarse el control de la democracia cristiana a los dirigentes católico-liberales que la habían fundado y se habían revelado capaces de conquistar sólo modestos éxitos electorales, la había puesto al servicio de una política de apertura hacia el peronismo, destinada a transformarla en partido mayoritario. Pero no era el único dirigente que en esos meses confusos estaba ansioso por ofrecer lo que uno de ellos iba a llamar "un puente para la unión de los argentinos"; aun el general Aramburu, en trance de fundar su propio movimiento político, no renunciaba a asumir para sí esa tarea, y el señor Frigerio, desde un temporario refugio montevideano, había ma-

nifestado su acuerdo de principio con una solución que uniera a los votantes peronistas e intransigentes en apoyo de la candidatura del jefe de la Revolución Libertadora.

Esos desarrollos políticos no podían sino confirmar las prevenciones de los sectores militares hostiles a una salida electoral, que observaban cómo, si la legalidad del peronismo amenazaba devolver el poder a éste, su ilegalidad lo transformaba en el eje necesario de cualquier solución electoral exitosa. He aquí, sobriamente expresado, el núcleo de la argumentación de los grupos de oficiales hostiles a una rápida confrontación con el sufragio universal, y —teniendo en cuenta que se dirigía a otros sectores militares igualmente adversos a cualquier retorno del peronismo al poder— no hay duda de su pertinencia. Pero, partiendo de ese núcleo racional este grupo militar tendía a justificar su posición invocando la existencia de otros problemas a la vez más vastos y de menos indiscutible gravitación en la realidad nacional. A juicio de esos grupos militares el avance de la corrupción y el del comunismo, favorecidos con diabólica eficacia por el doctor Frondizi, impedían seguir tolerando los frívolos juegos de una clase política que, en el mejor de los casos, sólo fingía creer en la existencia real de esos peligros, y nada hacía por resolverlos. Los sectores de las fuerzas armadas que se llamaban a sí mismos democráticos, identificados con la revolución de 1955, daban así un paso más en esa suerte de reinención espontánea del fascismo, que en rigor había comenzado ya antes. De la hostilidad hacia ciertos partidos, herederos infieles de la revolución de 1955, se pasaba a la negación de las posibilidades y de la validez de la democracia representativa, que se acompañaba de una aversión cada vez más explícita por los llamados influjos foráneos, afirmada con violencia frente al bloque socialista y las actitudes que —por razones no siempre fáciles de descubrir— se juzgaban favorables a él, pero también, aunque más discretamente, frente al bloque rival, cuyos esfuerzos distensivos eran juzgados como traición a los valores eternos del Occidente cristiano.

Esta actitud militar no dejaba de encontrar apoyo en ciertos sectores de la población civil, y en particular de la clase media: así, la ola de atentados antisemitas de la segunda mitad de 1962, si se debía a grupos reducidos, era sin embargo representativa de actitudes que, a medida que la crisis se agravaba, comenzaban a hacerse más frecuentes de lo que se prefería creer. Nunca la Argentina se había hallado tan firmemente hundida en una situación prefascista; ésta, sin embargo, desembocó en pocos meses en una segunda restauración constitucional.

Fuerzas exteriores e internas empujaron hacia esta solución. El clima internacional no era favorable a las experiencias autoritarias en Améri-

ca latina: el gobierno Kennedy, luego de forzar a la Unión Soviética a retirar sus bases de proyectiles de Cuba, comenzaba a creer posible una política latinoamericana no centrada en el problema de la isla disidente; también para América latina parecía comenzar una etapa en que las periódicas alarmas de la guerra fría serían reemplazadas por la pacífica rivalidad en la conquista de la madurez económica para las zonas marginales. Sin duda esta política fue tan sólo la ilusión de un momento; aun así, mientras tuvo vigencia puso el peso de la potencia hegemónica en contra de soluciones que en el pasado había visto con menos reparos. Por otra parte ese nuevo clima internacional tuvo como consecuencia secundaria separar la ortodoxia política que se identificaba con la democracia representativa de esa ortodoxia económica que había sido, y ya no era, el liberalismo. Las agencias interamericanas se acostumbrarían bien pronto a un nuevo lenguaje, y pese a muy amplias protestas era cada vez más frecuente oír de boca de funcionarios perfectamente respetables que no siempre la política impositiva más indulgente era también la mejor, o aun que en algunos casos era necesaria una reforma agraria. Si tampoco esta nueva orientación económica iba a inspirar cambios realmente significativos, su aparición sirvió para debilitar el prestigio de esa ortodoxia a la vez política y económica, quizás algo incoherente, pero no por eso menos prepotente en cuyo nombre sectores enteros de opinión civil y militar extendían a la Argentina posperonista la dura condena formulada antes contra la peronista.

Pero esos cambios en las corrientes políticas e ideológicas que desde fuera influían sobre la Argentina no hubiesen sido suficientes para imponer a la crisis un desenlace electoral relativamente rápido. Era también necesario que un sector importante de las fuerzas armadas se inclinara por esa solución. Y ese sector existía efectivamente, y bien pronto comenzó a advertirse que su peso era, dentro del ejército, mayor que el de los adictos a soluciones opuestas. Las motivaciones del grupo que comenzó por llamarse legalista eran variadas: para los adictos al general Aramburu era sobre todo la posibilidad de que éste encabezara el nuevo gobierno constitucional el motivo para promover la salida electoral; otros oficiales, movidos por consideraciones análogas, veían en el señor Alsogaray el destinado a prolongar en un marco constitucional el régimen semimilitar presidido por la figura del doctor Guido. Pero para grupos más numerosos de oficiales el dato esencial era que el ejército no podía soportar por mucho tiempo más las tensiones internas provocadas por sus cada vez más amplias funciones políticas. Hacía ya casi veinte años que en el gobierno de la institución las consideraciones técnico-militares habían debido ser sistemáticamente pospuestas a las polí-

ticas; el resultado era un ejército deliberante que amenazaba en cualquier momento con lanzarse a una lucha contra sí mismo. Una sana organización militar exigía una vida política más normal. ¿Pero las elecciones podían asegurarla? Aunque así no fuera, los militares que las propugnaban sabían que una etapa más larga de gestión directa significaba la quiebra total de la estructura del ejército, ya dividido en facciones separadas por creciente hostilidad, pero por otra parte el apoliticismo de esos oficiales no impedía que se propusieran orientar ese retorno a la normalidad fijando sus condiciones más cuidadosamente que luego de la caída del peronismo; no había nada en la actitud de los grupos políticos que impidiera esperar una actitud muy comprensiva en el momento en que se abriera la ineludible negociación con los jefes militares, previa a la restauración constitucional.

Los oficiales adictos a esta solución no lograrían sin embargo imponerla sino por medio de una lucha abierta. De ella se tuvo un anticipo cuando, a un mes del derrocamiento de Frondizi, el general Rauch avanzó sobre la Capital para resolver mediante una acción de guerra el conflicto que lo enfrentaba al general Poggi, responsable principal de la quiebra de la legalidad y sospechoso de aspirar al poder personal. Esta sospecha llevó a la marina a mantener su neutralidad en el conflicto que dividía al ejército; si el arma naval era hostil a una demasiado rápida vuelta al régimen constitucional, no deseaba que el largo interregno moralizador que juzgaba necesario fuese utilizado para consolidar la dictadura de un jefe surgido del ejército de tierra. Gracias a ello Poggi pudo ser alejado de la comandancia en jefe del ejército y reemplazado por el general Loza, considerado neutral entre las facciones que dividían el arma.

Pero este cambio no modificó esencialmente un equilibrio militar en que las tendencias hostiles a la normalización constitucional seguían dominando, y en agosto un exitoso movimiento militar lanzado desde Jujuy por el general Federico Toranzo Montero pareció volver a colocar el control del ejército en manos de los adictos a una salida dictatorial prolongada. Este resultado era sólo provisional: en setiembre un nuevo alzamiento militar, centrado en Campo de Mayo y apoyado en los sectores nacionalistas de la aeronáutica, alcanzaba un triunfo fácil pero no totalmente incruento; no dejó de influir en él la decisión con que el presidente Guido arrojó todo el peso de su condición de símbolo —algo problemático— de la legalidad, en favor del llamado movimiento azul, que a través del comunicado 150 se pronunciaba en favor de una normalización institucional que facilitara la incorporación de los sectores justicialistas a la vida democrática, y a la vez excluyera toda influencia del ex presi-

dente Perón. El carácter autocontradictorio de este programa era machaconamente denunciado por el sector rival, que conservaba firme control de la marina de guerra, de nuevo neutral durante las etapas de abierto conflicto, pero considerada capaz de decidir con su apoyo el desenlace de futuros enfrentamientos dentro del ejército de tierra.

De este modo el grupo ahora dominante no se encontraba totalmente libre para dirigir el proceso de normalización política, y sólo podía conservar su ventaja sobre un rival a medias derrotado a condición de obtener un rápido éxito en sus planes; si éstos encontraban excesivas dificultades, un nuevo conflicto armado parecía inevitable.

El sector azul lo entendió muy bien; esperaba que también lo entendieran así los grupos políticos (el peronismo, y secundariamente el frondizismo) cuya colaboración necesitaba para llevar adelante sus planes. El doctor Rodolfo Martínez, un ex democristiano al que la victoria azul llevó al Ministerio del Interior, emprendió animosamente la tarea de organizar un amplio frente electoral, en que al peronismo y al frondizismo, ahora nuevamente unidos, debían sumarse los sectores llamados socialcristianos (católico-nacionalistas que habían apoyado la experiencia de Frondizi), los demócratas-cristianos, los socialistas de centro, y aun conservadores y radicales populares. Pero los dos últimos partidos no parecían ansiosos por incorporarse a la proyectada alianza, y con ello ésta amenazaba repetir esencialmente el alineamiento de 1958, confirmando no sólo el influjo político de Perón y Frondizi sino también el papel excepcional del señor Frigerio, que mantenía firme ascendiente sobre algunos dirigentes



FIG. 7.35. Público haciendo cola para proveerse de víveres. Crisis militar (Archivo General de la Nación).

de la Intransigencia, lo tenía decisivo sobre los socialcristianos y parecía haber reconquistado la benevolencia del ex presidente Perón.

Este se mostró de inmediato partidario de un acuerdo con los militares azules y de un nuevo pacto político en las huellas del de 1958; para facilitar lo desalojó de la jefatura local del movimiento peronista al señor Framini, que durante meses lo había orientado sobre una línea de apertura a la izquierda, y lo reemplazó por el doctor Matera, próspero cirujano considerado más adecuado para alternar en las tertulias de sabor algo pasatista en las que parecía nuevamente decidirse, con palabras medidas y ricas en sobreentendidos, el futuro de la Nación. A medida que se aproximaba a su desenlace al parecer inevitable, el esfuerzo del doctor Martínez encontró un apoyo cada vez más reticente por parte de sus patrocinadores militares. No sólo tenían motivos para decepcionarse los oficiales partidarios del general Aramburu y el señor Alsogaray; aun los que habían apoyado menos condicionadamente la posición azul tenían razones para alarmarse ante la marcha del proceso político. Encontraron otras nuevas cuando el doctor Sueldo retiró a su partido de las negociaciones frentistas, alegando que se situaban en una tradición de pactos políticos sin contenido programático que el país tenía sobrados motivos para recordar sin nostalgia; aun dejando de lado estas alegaciones, que estaban lejos de ser infundadas, es muy comprensible que la democracia cristiana, que había pensado ser aliada, salvadora y heredera única del proscrito peronismo, hallara menos interesante la alianza cuando este movimiento tenía la legalidad semiabierta, y se disponía a unirse con la mitad de los grupos políticos del país.

Un golpe más decisivo sufrieron las negociaciones emprendidas por el ministro del Interior debido a una denuncia del doctor Miguel Angel Zavala Ortiz, político del sector unionista del radicalismo del pueblo personalmente muy unido a la facción militar colorada, provisoriamente vencida en octubre por la azul. Según el doctor Zavala Ortiz, el ministro Martínez le había propuesto completar una fórmula presidencial que contaría con la adhesión de todos los partidos y estaría encabezada por el general Onganía, vencedor en octubre y desde entonces comandante en jefe del ejército. La denuncia —tan imposible de probar como de refutar— provocó, pese a la inmediata dimisión del ministro, un nuevo movimiento militar, bajo la dirección del general Menéndez. Pese a la presencia de éste y al apoyo del sector nacionalista de la aeronáutica (que ya antes se había lanzado por su cuenta a la acción, con un programa que incluía la supresión de la libertad de cultos, y había sido fácilmente reducido por los suboficiales de esa arma) el elemento esencial del alzamiento de abril era la marina de guerra, que sólo pudo ser reducida des-

pués de varios días de lucha sangrienta, en cuyo desenlace fue un elemento importante el apoyo que el sector aramburista del ejército volvió a aportar al bando azul.

La segunda victoria azul tenía por consecuencia el cambio decisivo en el equilibrio militar que la primera no había alcanzado a provocar. El avance en el poderío de la marina que la revolución de 1955 había traído consigo quedaba anulado; quedaba igualmente probado no sólo que la aeronáutica era incapaz de sostener en los hechos cualquier pretensión de dominar el equilibrio militar, sino aun que su peso no era decisivo para volcar ese equilibrio en favor del bando militar por el cual se inclinase. El ejército volvía a ser el núcleo indiscutido de las fuerzas armadas, y dentro de él era dominante el prestigio de los jefes azules.

Este nacía de la aceptación cada vez más generalizada de que —como esos jefes venían sosteniendo desde hacía meses— era necesario volver a la disciplina jerárquica y a criterios más técnicos en el manejo del cuerpo, dejando atrás la etapa desafortadamente politizada que había estado a punto de quebrar la estructura misma del arma, pero surgía también de las dotes estrictamente militares de que esos jefes azules habían dado prueba a lo largo de los combates de octubre y los más sangrientos de abril. De este modo ese ejército, al que sus victorias y su nueva cohesión daban una fuerza mayor que en el pasado, aceptaba ahora la conducción de jefes que advertían muy bien los peligros de volcar con indiscreta frecuencia esa fuerza en la liza política; era la reconquistada cohesión del arma la que corría riesgo de volver a perderse en esas aventuras.

El victorioso ejército azul —que en el comunicado 200 había dado, durante la lucha de abril, una nueva versión ligeramente más hostil al peronismo de las perspectivas políticas propuestas en octubre— volvió entonces a auspiciar las negociaciones frentistas, ante las cuales sin embargo el general Rauch, al que el desenlace de abril había llevado al Ministerio del Interior, mostraba creciente reticencia. El nuevo ministro veía con alarma el papel que en el trámite de la solución electoral conservaba el señor Frigerio, al que juzgaba un representante particularmente ponzoñoso de lo que llamaba “marxismo-leninismo insurreccional”. Al mismo tiempo ambicionaba conquistar para el gobierno una nueva popularidad imponiendo una reorientación popular de la política económica; esta ambición lo llevó a entrar en polémica abierta con otros ministros, a los que concluyó por achacar de modo igualmente público un pasado corrupto. Tantas iniciativas provocaron el alejamiento del general Rauch, reemplazado por el general Villegas, que retomó de inmediato los contactos con los dirigentes del proyectado frente electoral.

Desaparecidos los más graves obstáculos exteriores, no por ello era más seguro el desenlace de las complicadas gestiones. Sin duda el peronismo parecía resignado de antemano a tomar a su cargo los mayores sacrificios políticos, renunciando a aspirar a cargos ejecutivos y limitando al 30 % su parte en las listas de candidatos a legisladores del proyectado Frente. Esto dejaba abierto el problema de la candidatura presidencial: durante algo más de un mes concentró la atención la figura del señor Pérez Companc, devoto multimillonario que contaba con el apoyo del arzobispo de La Plata (que había vuelto a sostener dentro de la Iglesia la conveniencia de aproximarse a un peronismo probadamente capaz de sobrevivir a la ofensiva eclesiástica de 1955) y con el aun más efusivo del señor Frigerio. Bien pronto, sin embargo, esta candidatura dejó paso a la del doctor Solano Lima, veterano dirigente conservador que se había apartado de su partido al no encontrar en éste el eco que esperaba para su política de aproximación al peronismo. Aunque contaba con el apoyo abierto de Perón y Frondizi, la candidatura del doctor Solano Lima estuvo lejos de ser recibida con unánime entusiasmo entre los adictos a ambos ex presidentes. Entre los dirigentes peronistas el doctor Matera halló un modo eficaz de expresar su disidencia oponiendo a la candidatura del Frente la suya propia, que encontraba hospitalidad en las listas de la democracia cristiana; el señor Framini, de modo menos público pero acaso no menos eficaz, la hostilizó dentro del movimiento sindical, que de todas maneras se resistía a disciplinar a sus militantes en favor de una candidatura conservadora. En la intransigencia radical la oposición no era menos viva; pese al pronunciamiento del doctor Frondizi, que por una vez sostuvo con claridad sus puntos de vista, hubo en la convención partidaria una mayoría para sostener la candidatura presidencial del doctor Alende, jefe del partido durante el cautiverio de Frondizi y cada vez menos convencido de la superior sabiduría política de éste y de su apodíctico vocero y consejero, el señor Frigerio.

En estas condiciones el Frente prefirió finalmente esquivar la batalla. Quedaban en la liza el radicalismo popular, que llevaba ahora como candidato al doctor Arturo Illia, respetado político de orientación sabbatinista y de popularidad sólo provincial, el radicalismo intransigente, que —contra la oposición de muchos de sus dirigentes— mantenía sus listas y sostenía la candidatura del doctor Alende, y una nueva formación, la Unión del Pueblo Argentino, que en alianza con la democracia progresista levantaba la del general Aramburu. Esta última fue decisiva en la configuración del resultado electoral: el general Aramburu, en efecto, había juzgado oportuno, puesto que el electorado peronista le era esquivo, aumentar su ascendiente sobre el antiperonista, frente al cual tenía un serio rival en el radicalismo popular, al que ese sector ha-

bía venido en general apoyando. Fueron entonces el recuerdo de su gestión anterior y la promesa de un estilo de gobierno más autoritario los puntos básicos de una muy intensa propaganda, gracias a la cual fracciones numéricamente importantes del electorado peronista llegaron a persuadirse de que, aun más urgente que expresar su protesta mediante el voto en blanco, era fortificar con su apoyo la barrera más eficaz contra el triunfo del que había sido presidente de la Revolución Libertadora. Esta espontánea emigración de votos peronistas benefició a los candidatos de ambas ramas radicales: el doctor Illia reunía dos millones y medio de sufragios, y el doctor Alende poco más de millón y medio, seguido de cerca por la masa de votantes en blanco, que superaban también por escasa distancia a los adictos al general Aramburu.



FIG. 7.36. Propaganda electoral para las elecciones de 1963.

El radicalismo del Pueblo había obtenido así la mayoría relativa, o —como preferían decir sus rivales— la primera minoría; ello no le aseguraba la presidencia, ya que un decreto-ley del gobierno de Guido había implantado el sistema de representación proporcional para las elecciones de diputados y de electores de presidente. Sin embargo no costaría demasiado al candidato más votado por el electorado hallar en otros partidos los votos necesarios para triunfar en el colegio electoral: los socialistas, los conservadores (desesos de poner brusco fin a las especulaciones que ante la posibilidad de una *impasse* dentro del cuerpo mantenían los adictos al general Aramburu, en los que veían a sus rivales más serios ante los votantes de orientación derechista) iniciaron la reorientación que daría al doctor Illia la presidencia de la República sin forzarlo a asumir compromisos con otras fuerzas políticas fuera de aquélla en la cual militaba.

La crisis tenía así un desenlace inesperado, y la experiencia constitucional recomenzaba bajo una igualmente inesperada dirección. Sin duda el nuevo gobernante afrontaba en algunos aspectos perspectivas menos desfavorables que las que había conocido Frondizi: políticamente no debía contar con la hostilidad militante de sectores importantes, excepción hecha de los frondizistas (y éstos parecían por el momento debilitados por la división entre el grupo adicto al depuesto presidente y al señor Frigerio, reunido en el MIR y luego en el MID, y el sector fiel al doctor Alende, dueño del aparato político de la Intransigencia). El peronismo, perplejo por el desenlace de su última aventura política, aspiraba por el momento sobre todo a gozar de una etapa de calma, que le permitiera rehacer su fuerza política; la enemiga del radicalismo del Pueblo hacia ese tradicional adversario se había atenuado considerablemente; aun el doctor Balbín, todavía meticulosamente leal a su pasado de perseguido por el régimen peronista, había participado en públicas coincidencias con jefes locales del movimiento, buscando impulsar así las tendencias militares favorables a la salida electoral. . . . Entre conservadores, socialistas de derecha y centro y democristianos (algo maltrechos estos últimos luego del fracaso de sus desmesuradas ambiciones) la benevolencia era abierta; en la izquierda, si la independiente mostraba por el nuevo presidente legal una indiferencia teñida de desprecio, el comunismo se apresuraba a señalar aspectos positivos en su triunfo. A esa relativa distensión política acompañaba una situación económica igualmente favorable: ya antes de ocupar el gobierno el doctor Illia era evidente que la austeridad debería ser abandonada antes de que toda la economía industrial sucumbiera bajo su peso; el retorno a una política más popular no sería al comienzo reprochado a las nuevas autoridades ni aun por los sectores de opinión más conservadores, y a ellas les tocaría recoger las ventajas po-

líticas de la creciente producción rural que sólo ahora comenzaban a hacerse sentir.

Pero si la fuerza gobernante no era impopular, estaba en muchos aspectos peligrosamente aislada. Su electorado se reclutaba con preferencia en los sectores más reacios a intervenir directa y abiertamente en las formas institucionalizadas de conflicto social; el partido de gobierno era así tan ajeno a las organizaciones trabajadoras como a las empresarias, y esto, que en rigor no era rasgo exclusivo del radicalismo del Pueblo (tampoco la Intransigencia, salvo en las fantasías del señor Frigerio, contó con sólidos anclajes en unas u otras), se acompañaba de una indiferencia frente a la situación misma que era, ella sí, peculiar del nuevo oficialismo, aunque aun dentro de él más de uno de sus adictos la encontrara suicida. Igual aislamiento se daba entre el partido oficial y el compacto grupo de jefes militares al que la victoria de abril había otorgado completo control de las fuerzas armadas. Por cierto el doctor Illia, y —aunque con menos seguridad— el conjunto de las corrientes dominantes en su partido no habían apoyado las largas vacaciones de la legalidad que la fracción colorada había defendido con tan poca fortuna; antes de los choques decisivos habían sido sin embargo muchos los jefes del radicalismo popular que habían mantenido estrecho contacto con los militares hostiles al doctor Frondizi e impacientes por quebrar esa experiencia constitucional, y algunos de esos dirigentes, no siempre muy influyentes pero sí muy conspicuos, habían conservado hacia los grupos colorados una lealtad que había sobrevivido a sus derrotas; la instalación en el Ministerio de Relaciones Exteriores del doctor Miguel Angel Zavala Ortiz, por ejemplo, no era una causa de tranquilidad para los vencedores de octubre y abril.

Sin duda el doctor Illia se iba a mostrar reacio a imponer modificaciones importantes al equilibrio militar; si luego de más de un año de gobierno un incidente acaso deliberadamente provocado concluyó en el alejamiento del comandante en jefe del ejército, aun entonces el sector que lo reconocía por jefe no vio discutida su hegemonía sobre el arma: de sus filas provenía en efecto el general Pistarini, sucesor del general Onganía. Pero esa aceptación de la situación creada no iba acompañada de ninguna tentativa de hallar un terreno de colaboración más estrecha con la orientación militar dominante; el aislamiento del poder civil y militar en sus respectivas esferas parecía ser la solución ahora favorecida. Una solución algo diferente iba a adoptarse en cuanto a las relaciones con el movimiento obrero, en que el avance del peronismo estaba dando a éste un control creciente de los cuerpos confederales. También aquí el gobierno renunciaba a usar armas que muchos de sus adictos hubieran

esperado verle esgrimir (por ejemplo, las derivadas de la modificación de la ley sindical auspiciada por Frondizi, que había favorecido el mantenimiento del sindicato único). Pero, si renunciaba a usarlas, no renunciaba a amenazar con esa posibilidad a un movimiento obrero cuya oposición —impulsada sobre todo por las necesidades políticas del movimiento peronista— se trataba de mantener dentro de límites que la hicieran compatible con la estabilidad política y económica. De nuevo aquí, pese a que en lugar del aislamiento encontramos la intervención mediante el empleo de armas políticas y económicas muy variadas, no se trataba sin embargo de sumar al movimiento obrero como tal a los apoyos con que el gobierno contaba (el contraste con la gestión intransigente es de nuevo total: aun en los momentos en que había practicado una violenta represión antiobrero, el gobierno de Frondizi no había renunciado a soñar con un futuro en que la clase obrera se reincorporaría a ese frente interclasista en cuyo interés consideraba estar gobernando); se trataba por lo contrario de enfrentar al movimiento obrero como un elemento destinado por las cosas mismas a permanecer externo al grupo gobernante, y de asegurarse contra los peligros de una hostilidad demasiado enconada. La misma inspiración hallamos en la política económica del gobierno Illia; aparte de la reivindicación del nacionalismo económico (manifestada en la anula-



FIG. 7.37. El presidente Illia y el vicepresidente Perette acompañan hasta la puerta principal de la Casa Rosada al presidente saliente J. M. Guido, 12 de octubre de 1963 (Archivo General de la Nación).

ción de los contratos petroleros concertados durante la gestión del doctor Frondizi y en la conservación por el Estado del paquete accionario de la compañía de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, empresa creada por la administración Frondizi para reemplazar a la que había visto rescindida su dudosa concesión por el gobierno de Aramburu) ésta se orientó hacia una prudente línea intermedia entre las que sucesivamente habían venido alternando breves y arrolladoras etapas de inflación con otras más prolongadas de austeridad: el interés de una masa de consumidores predominantemente urbanos, y el del Estado (del que en parte significativa esos consumidores dependían para sus ingresos) eran para ella la primera consideración. Si de este modo se eludían peligrosas tensiones, no había en esa línea nada que invitara a los grupos sociales más capaces de ejercer directo influjo sobre la marcha del proceso político a identificarse estrechamente con el gobierno que la había adoptado. Todavía por esta razón, si el gobierno de Illia no enfrentaba las hostilidades que había despertado el de Frondizi, el aislamiento que no había logrado ni buscado superar debía ser una seria causa de debilidad apenas la tácita tregua que acompañó a su ascenso al poder diera lugar a una lucha política de nuevo intensa.

El retorno a ésta estaba inscrito en las cosas mismas. Tanto el partido del gobierno como sus rivales serios comenzaron por dar a su rivalidad el tono más desapasionado del que eran capaces. En la medida en que podía aspirar a alcanzar el poder por vía electoral, la oposición tenía también ella un interés establecido en mantener en pie una legalidad que sabía colocada bajo estrecha vigilancia militar; esto era particularmente cierto en cuanto al peronismo, al que las elecciones de julio de 1963 habían dado dos provincias, y que no podía esperar sino nuevos triunfos de las futuras jornadas electorales; no es sorprendente entonces que haya mostrado una circunspección formal que no estaba en absoluto en su estilo habitual. Tampoco es extraño que los sectores políticos que menos podían esperar del sufragio universal hayan adoptado la conducta opuesta: el entusiasmo de los pequeños partidos por la nueva legalidad se enfrió considerablemente desde que advirtieron que el apoyo que habían proporcionado al radicalismo del Pueblo, en el colegio electoral que proclamó al doctor Illia, estaba destinado a no recibir recompensa alguna. Ninguno de ellos fue sin embargo tan lejos en el camino de la oposición facciosa como el grupo, ahora reducido, que acaudillaba el doctor Frondizi: en un intento por devolver a la lucha política el dramatismo que había tenido en el pasado, el ex presidente llegó a acusar al gobierno del doctor Illia de haber tramado una conjura para asesinarlo.

Las elecciones de renovación parcial del parlamento que abrieron el año político de 1965 coincidieron en cierta medida con el cambio del

clima político: en ellas el peronismo realizó de nuevo avances impresionantes sobre los ya tan considerables de 1962; en Buenos Aires doscientos mil nuevos votantes se agregaban a los que habían apoyado al señor Framini; en Córdoba y en la Capital Federal, las victorias del partido oficial eran muy estrechas. La situación en este último distrito era particularmente ilustrativa: el radicalismo popular venecía ahora por muy escaso margen en una lucha singular con el peronismo; en 1962 la Intransigencia había logrado triunfar más ampliamente en una lucha triangular, en la que una porción considerable del electorado no peronista había permanecido leal al radicalismo del Pueblo, única alternativa al peronismo subsistente tres años más tarde. En medio de los muchos altibajos que las condiciones en que cada jornada electoral se celebraba debían necesariamente provocar en su desenlace, parecía poder discernirse sin embargo una tendencia a largo plazo que llevaba a la erosión de la importante masa electoral antiperonista; a medida que la experiencia de los diez años transcurridos bajo el predominio de Perón y su movimiento se desdibujaba en el recuerdo, el voto de protesta, aun en el electorado de clase media, hallaba cada vez menos difícil sumarse al caudal del que seguía siendo el partido popular por excelencia.

He aquí, sin duda, una causa muy real de la fragilidad del restaurado orden constitucional. Aunque apenas era mencionada por los cada vez más abiertos censores que el gobierno encontraba en las fuerzas armadas, no es dudoso que ella influyó considerablemente en la decisión que puso brusco fin a la segunda experiencia posperonista de gobierno civil. ¿Pero era inevitable que las fuerzas armadas hallasen inaceptable cualquier retorno del peronismo a posiciones que le dieran efectivo poder de decisión? Más de uno, en el peronismo, quería suponer que no: sobre todo en las provincias menos tocadas por la modernización abundaban los dirigentes peronistas que al mostrar inclinaciones conservadoras estaban lejos de violentar tendencias profundas, y que hubieran preferido gozar de lo mejor de los dos mundos reteniendo las mayorías electorales que su afiliación política les otorgaba y dando a los alarmados militares garantías precisas de respeto al orden social y político vigente. Allí los diez años de supervivencia luego del derrumbe de la máquina política erigida por Perón habían dado a su partido una fisonomía más cercana a la de los tradicionales; los jefes locales no eran ya los vehículos pasivos que conservaban la adhesión de sus adictos canalizando hacia ellos los favores dispensados por agencias estrictamente centralizadas; ahora les correspondía la función más difícil de descubrir de nuevo, en un mundo político más competitivo, las fuentes de esos favores, sólo asequibles si mostraban la ductilidad necesaria para retener, mediante un lenguaje fieramente opositor, su clientela peronista, y a la vez ponerla

al servicio de la política de sus supuestos adversarios. Esa difícil tarea la llevaron adelante muy honorablemente, alcanzando en algunos casos extremos de virtuosismo que no desmerecen en los anales de nuestra complicada política provinciana; el resultado era que esa jefatura local era ahora mucho más poderosa que antes de 1955, y no tenía ninguna razón para sentir excesivas nostalgias. No es extraño que el llamado neoperonismo (es decir, la tendencia a aceptar como nuevo marco para el peronismo el creado por la revolución que lo derrocó) haya sido para esos sectores del Interior una tentación constante.

La situación del peronismo de la Argentina litoral y modernizada era al comienzo muy diferente. Aquí el partido había perdido (y luego de diez años sólo comenzaba a recuperar en muy pequeña medida) sus apoyos fuera de la clase obrera y de los sectores más populares; si en teoría seguía siendo un movimiento interclasista, en los hechos era, más que nunca en el pasado, un partido de clase. El movimiento sindical tenía dentro de él un papel necesariamente dominante, no sólo porque constituía la única estructura sobreviviente al derrumbe de 1955, y apenas afectada en su solidez por esa catástrofe que en esta área había literalmente deshecho al peronismo político, sino también porque —como consecuencia de haberse devuelto a dirigentes peronistas el control legal de un conjunto de sindicatos— ellos disponían ahora de apoyos organizativos y financieros mayores que los de cualquier otro sector político. Aquí, sin duda, el ascendiente de los dirigentes no provenía de su papel de intermediarios en los contactos con el Estado: surgía de su capacidad para cumplir las funciones que el movimiento sindical había tomado a su cargo en la etapa peronista y había sabido retener en lo sustancial en la posperonista. Aun así una cierta benevolencia del Estado les era necesaria; su papel en las negociaciones de contratos colectivos dependía de la continuada vigencia de ciertas normas legales; también dependía de ella, en última instancia, la retención de las cuotas sindicales en el momento del pago de salarios, que aseguraba a los sindicatos más importantes un caudal de ingresos nada desdeñable. Pero estas circunstancias no prefijaban al peronismo sindical un rumbo político tan preciso como el que las cosas mismas imponían al del Interior. Si el Estado había respetado en lo sustancial el poderío de los sindicatos no había sido precisamente por benevolencia sino por prudencia; ésa era por lo menos la conclusión que los jefes del peronismo sindical creían posible extraer de una experiencia de casi diez años; creían también que si esa situación no los eximía de mantener una conducta prudente, soslayando los enfrentamientos globales con otros sectores sociales, los libraba por lo menos de la obligación de servir puntualmente la política de los sucesivos grupos precariamente instalados en el poder.

Pero las relaciones con el poder posperonista (y abierta o clandestinamente antiperonista) no eran la única fuente de problemas para el peronismo; los más importantes derivaban acaso de sus relaciones con su propio jefe ausente. En una primera etapa el peronismo sindical se había mostrado mejor disciplinado que el del Interior para seguir las cambiantes consignas del ex presidente, cuyo supremo comando sobre el movimiento no era discutido por el momento abiertamente por ninguno de sus adictos. Sin duda, el nuevo equipo dirigente de los sindicatos debía su encumbramiento a una originaria indisciplina: había participado en las elecciones organizadas por los interventores de la revolución, sin tomar en cuenta la consigna de reconocer como autoridades legales a las anteriores a 1955, reunidas en una apenas clandestina CGT negra, que Perón había establecido para sus adictos. Pero una vez instalados en el control de los sindicatos les fue fácil hacerse perdonar esta culpa inicial: el jefe desterrado necesitaba demasiado de las estructuras que ellos dominaban para mantenerlos en interdicto. Por su parte los nuevos dirigentes obreros —sin duda más representativos que los anteriores a 1955— debían contar con una masa fuertemente politizada, que, en el momento de optar, otorgaría su lealtad política al jefe del peronismo antes que a los de sus sindicatos: la conveniencia de hacer innecesaria la opción llevaba entonces a los conductores del peronismo sindical a seguir más disciplinadamente que los caudillos provincianos la cambiante línea política definida por quien podía hacerlo.

Se creaba así para el peronismo una situación necesariamente fluida; la consolidación de un orden político dispuesto a concederle un lugar aumentaba para el movimiento la tentación de abandonar su disciplinado acatamiento al jefe ausente, en el que le era señalada la causa última de las resistencias que aun lo mantenían parcialmente marginado; esta tentación era tanto más viva cuanto más real hacía el puro transcurso del tiempo el poderío de jefes que en el plano político o sindical contaban con prestigio y gravitación propios. Al comenzar la segunda experiencia constitucional, había ya en el peronismo sindical jefes dispuestos a coincidir con los caudillos del peronismo provinciano en la conveniencia de organizar en forma más regular el movimiento, creando una estructura más representativa de los dirigentes dotados de arraigo propio que de la voluble voluntad del jefe supremo. Augusto Vandor, jefe del sindicato metalúrgico, que había llegado a dominar todo el sindicalismo peronista, se mostraba decididamente partidario de adoptar ese nuevo rumbo, que lo transformaría en el primero entre los pares que dirigirían a un peronismo emancipado de la tutela de Perón.

Esa decisión se basaba en convicciones no siempre explícitas, pero muy seguras, sobre la evolución del peronismo y sobre su lugar en la Argen-

tina. En cuanto a lo primero, parecían ver con menos temor que en el pasado la perspectiva de una ruptura con el jefe del movimiento, no sólo porque suponían que en diez años de ausencia su ascendiente personal debía haber menguado, sino también porque la mezcla de extrema severidad disciplinaria y extrema volubilidad en fijar los rumbos que caracterizaban a la acción de Perón, había hecho cada vez más difícil para sus adictos saber con certeza qué sector del peronismo contaba con la gracia del conductor y cuál se hallaba provisionalmente errando en las tinieblas exteriores. En cuanto a lo segundo, parecían confiar en que el lugar del peronismo en la vida argentina no estaba ya seriamente amenazado; esta confianza no surgía tan sólo de la libertad muy amplia de que gozaba el movimiento durante el gobierno del radicalismo del Pueblo (que se mostraba más reacio que la Intransigencia a usar el estado de sitio como el arma más eficaz de su arsenal político) sino también, y acaso todavía más, de la experiencia vivida durante la etapa de supremacía militar que la precedió. No sólo la organización sindical había conservado y aun acrecentado durante ella su poderío; aun más importante era que el bando militar victorioso parecía considerarla un elemento permanente y no totalmente negativo del ordenamiento político-social argentino; las organizaciones obreras eran —según los exégetas que ese sector militar había encontrado— uno de los “factores reales de poder”; esa designación inspirada en Lasalle, e introducida en nuestro vocabulario político por algunos ensayistas del nacionalismo, se usaba cada vez más para designar a aquellos grupos —las fuerzas armadas, la Iglesia católica, las organizaciones empresarias y, precisamente, las obreras— que constituían los únicos elementos necesarios y permanentes en un sistema político marcado por la más extrema inestabilidad. Eran necesarios y permanentes —se suponía— porque las fuentes de su poderío no dependían de los vaivenes de esa política tan tornadiza...

Apoyándose en esa fortaleza sindical que comenzaban a creer erigida sobre sólida roca, los sindicalistas del peronismo creían entonces poder avanzar con paso seguro hacia el terreno de la política partidaria; la suya no era sino una en un conjunto de empresas orientadas a eliminar el hiato entre el aparato político argentino y los factores reales de poder, que debían utilizarlo para fijar el rumbo de la vida nacional; en el futuro era imaginable que un peronismo colocado bajo la dirección de sindicalistas secundados por dúctiles políticos provincianos supiera adecuarse mejor que el radicalismo del Pueblo (al parecer ciego a la existencia misma del problema) a las discretas pero imperiosas directivas emanadas de los sectores efectivamente dominantes dentro de la estructura de poder existente en el país, entre los que el peronismo contaba con esa cabecera de puente que era el movimiento sindical.

Esa imagen en suma optimista que los líderes obreros habían llegado a tener de su lugar en la Argentina posperonista ignoraba peligrosamente ciertos aspectos sin embargo no secundarios de su situación: ese lugar que consideraban tan seguro dependía más directamente que el de los otros "factores de poder" de decisiones estrictamente políticas. Aunque en el pasado éstas no habían sido tomadas, la política y la economía argentinas habían podido seguir funcionando a lo largo de años con organismos sindicales en manos de funcionarios del gobierno; el hecho de que esto no hubiera sido suficiente para desarraigar de modo permanente al peronismo del movimiento obrero hacía acaso menos probable que la tentativa se repitiera en el futuro, pero no la hacía estrictamente imposible. En particular, los dirigentes sindicales no parecían percibir un aspecto muy importante de ésa su situación peculiar: la vinculación —sin embargo evidente— del relativo respeto que gobiernos en principio hostiles concluyeron por otorgarle con la existencia de plazos y coyunturas electorales, o dicho en otros términos, con la permanencia en los usos políticos argentinos de la apelación al dictamen del sufragio universal. Por no advertirlo, los jefes sindicales parecían ver con relativa indiferencia la posibilidad de que la acción más vigorosa del peronismo en el juego político, provocara la supresión —ahora prolongada— de ese elemento representativo en el sistema de gobierno; en unas nuevas vacaciones de la legalidad no veían nada particularmente temible: significaban tan sólo el reemplazo de un equipo de políticos profesionales insensibles a las nuevas realidades argentinas por un grupo militar que por lo contrario parecía percibir muy bien sus rasgos fundamentales; esa solución alternativa parecía asegurar al sindicalismo una participación, así fuera subordinada, en el poder...

En pocos meses esa indiferencia sindical hacia la democracia representativa se fue tiñendo de hostilidad: una breve experiencia reveló a los dirigentes peronistas que el momento en que podrían vencer en abierta batalla al jefe desterrado aun no había llegado. Perón, en efecto, no vio con serenidad un designio cuyo éxito hubiera significado el fin de su carrera política; para frustrarlo envió a la Argentina a su tercera y reciente esposa. Aunque la señora María Estela Martínez no mostró particular vocación para un papel que la señora Eva Perón hubiera sin duda desempeñado con singular autoridad, las consecuencias de su presencia en el país se hicieron sentir bien pronto. Ella bastaba para hacer más difícil la continuación del clima de apaciguamiento político que había hecho más tolerable para los irreductibles del antiperonismo la presencia de representantes peronistas en distintos niveles de la vida pública; a su llegada, el aristocrático hotel en que se instaló se convirtió en centro de vastos disturbios, en que la combatividad de los elegantes

residentes del distrito no fue en zaga a la de los activistas sindicales que habían tomado a su cargo la protección de la mensajera del ex presidente. Abandonado en medio del tumulto ese primer alojamiento, la señora Perón debió aceptar la hospitalidad de sindicalistas adictos al señor Vandor; sólo usando un disfraz pudo finalmente eludir la, tras comprobar que ella ponía inesperadas trabas a su libertad de movimientos. Al recobrarla la visitante pareció encontrar un malicioso placer en visitar provincias y municipios gobernados por militantes del peronismo, que no podían eludir el otorgamiento de honras oficiales a la mensajera de su proscrito jefe, y con ello comprometían el resultado de meses y años de escrupulosa prudencia, que los estaban acercando a la tan codiciada respetabilidad política.

En cuanto al peronismo sindical los efectos de la presencia de Isabel Perón —como comenzaban a llamar a la mensajera sus adictos— fueron aun más serios. El avance del señor Vandor había avivado rivalidades personales muy comprensibles, y por otra parte los supuestos mismos de su proyecto político (que implicaban la aceptación por el peronismo de los rasgos fundamentales del orden surgido de su derrota) encontraban oposición en la llamada izquierda sindical peronista, que recordaba aún con nostalgia la etapa en que el señor Framini había definido para el peronismo un futuro más revolucionario que su pasado. Una y otra fuente de oposición iban a ser utilizadas y reunidas por la mensajera, que logró ganar además el apoyo, primero discreto y luego cada vez más decidido, del señor Alonso, que había sido colocado en la secretaría general de la CGT precisamente por influjo del propio señor Vandor. Sin embargo, el control de éste sobre el aparato sindical parecía capaz de sobrevivir a los golpes algo oblicuos que partían de la tercera señora Perón, e igualmente sólida se mostraba, pese a las circunstancias adversas, su alianza con los más poderosos caudillos del peronismo del Interior.

Por otra parte, esas modificaciones en el juego de enfrentamientos y alianzas dentro de la dirección peronista no podrían llevar a un nuevo y estable equilibrio para el movimiento hasta que las bases se pronunciaran en el conflicto que había estallado entre el jefe supremo y los más poderosos caudillos locales; ese pronunciamiento debía llegar a través de los resultados electorales, que ahora medirían no sólo el influjo del peronismo dentro del país, sino el de Perón dentro del peronismo. Era este un elemento nuevo en el proceso político argentino, que no sólo afectaba a la vida interna del movimiento peronista, sino la relación de éste con los restantes grupos políticos. Así lo entendió el gobierno, y no dejó de extraer conclusiones precisas sobre las posibilidades que la

nueva coyuntura ofrecía; si se la usaba diestramente, podía proporcionar una escapatoria para esa eterna lucha electoral entre peronismo y anti-peronismo, en la que la tendencia a largo plazo parecía favorecer al primero. Las perspectivas podían así hacerse más favorables para el gobierno y su partido, que si habían mostrado cierta capacidad de sortear dificultades en otros planos, parecían condenados a esperar pasivamente la llegada de vencimientos electorales cuyo resultado se sabía de antemano negativo. El gobierno al que se acusaba de demasiado pasivo no mostró en la coyuntura nada de esa reprochada pasividad; sin su anuencia todo el episodio protagonizado por la esposa de Perón hubiese sido impensable. El parsimonioso y prudente doctor Illia mostraba por lo contrario una audacia de la que pocos de sus adversarios hubieran sido capaces: bajo sus auspicios Perón volvía a ser protagonista abierto de la vida política, y en las elecciones de las que surgiría un nuevo gobernador provincial en Mendoza se lo vio descender a la liza contra su propio partido, en favor de un candidato disidente, mientras el gobierno local (conservador), del mismo modo que el nacional, se esforzaba por impedir que, por un exceso de discreción de los medios informativos, los votantes ignorasen la toma de posición del influyente desterrado.

Sin duda el resultado de la prueba electoral no podía tener consecuencias inmediatas excesivamente graves: Mendoza había vuelto a ser, luego de 1955, una provincia sólidamente conservadora; una alianza electoral entre el partido localmente gobernante y el Radical del Pueblo, que una oportuna reforma de la constitución provincial acababa de hacer posible, aseguraba al más votado de ambos el apoyo automático del otro. Y en efecto los comicios dieron a Mendoza un nuevo gobernador conservador a quien concedieron además un sólido respaldo en la legislatura provincial. La puja entre peronismo y antiperonismo había tenido así el desenlace favorable al segundo que dada la orientación del electorado mendocino era de antemano esperable. Pero más importante que este desenlace descontado de antemano era el de la puja entre Perón y la corriente dominante en su partido; aquí la victoria correspondía sin duda posible al ex presidente, cuyo candidato, relativamente oscuro, reunía cien mil votos, treinta mil más que los que apoyaban al doctor Serú García, abanderado local del aparato peronista en rebeldía y uno de los diputados más brillantes del bloque justicialista. El resultado condenaba retrospectivamente la interesada tolerancia del gobierno ante los esfuerzos políticos de Perón y su esposa, basada en un diagnóstico sustancialmente coincidente con el de los levantiscos jefes locales del peronismo, para los cuales la hora de Perón había pasado. Ahora la cohesión del sector peronista antes dispuesto a emanciparse de la tutela del Conductor se mostraba cada vez más frágil: las deserciones hacia el

—alineamiento rival eran cada día más frecuentes, y parecía difícil evitar la unificación del peronismo bajo la dirección de su jefe de siempre, y una casi segura victoria del movimiento así rehecho en las elecciones de renovación de la Cámara de Diputados (y —de nuevo como en 1962— de gobernadores de muchas provincias, entre ellas la de Buenos Aires) que debían convocarse para principios de 1967.

El segundo gobierno civil posperonista se acercaba entonces peligrosamente a los mismos rápidos en que había naufragado el primero, y no mostraba más capacidad que éste para eludir sus acechanzas. No iba sin embargo a tener que enfrentarlos: antes de que se alcanzara el vencimiento electoral las fuerzas armadas habrían ya puesto fin a este nuevo ensayo de restauración constitucional. Su prisa era comprensible: en junio de 1966 la instauración de un gobierno militar no era aun la barrera apresuradamente levantada contra el triunfo electoral peronista; podía entonces contar con algún apoyo dentro de ese sector (desde luego el de los que habían visto frustrada su aspiración a la independencia por el veredicto del sufragio universal, pero también el de Perón, que pese a haber demostrado de cuánto seguía siendo capaz en el terreno electoral, sabía que por medio de él no reconquistaría sólidamente posiciones en el país, y prefiriendo que se diera otra vuelta de tuerca en la interminable crisis política, ofrecía su benévola neutralidad a un nuevo



FIG. 7.38. El presidente Illia en compañía del secretario de Energía y combustible Dr. Pizzio, el teniente general Onganía y el contraalmirante Varela en el Aeroparque antes de viajar a San Rafael (Archivo General de la Nación).

episodio militar porque esperaba de él la disgregación definitiva de los movimientos políticos no peronistas, a los que el golpe privaría de esa vecindad al poder del Estado que había sido para ellos tan importante desde 1955). Es también comprensible que, para conservar esa posible apertura política, los jefes militares dispuestos a derrocar al gobierno civil y tomar su relevo hayan preferido eliminar de su diagnóstico explícito de la crisis argentina toda alusión a ese elemento sin embargo decisivo que era la gravitación permanente del peronismo y la imposibilidad de integrarlo en el sistema en términos aceptables para los otros protagonistas del juego político. En lugar de ese hecho difícil de ignorar preferían tomar en cuenta la llamada crisis de representatividad de los partidos políticos, que para uno de ellos —el peronista— no era confirmada por los hechos, y aun para los restantes era acaso más la consecuencia que la causa de los últimos diez años de crisis permanente, que a su vez se relacionaban con las normas establecidas para el juego político en la Argentina posperonista, no sin participación de las fuerzas armadas. Los revolucionarios preferían además insistir en la supuesta incompetencia del gobierno civil al que se proponían reemplazar, apoyados para ello en una masiva propaganda que encontraba adeptos en todos los sectores, ya que la política económica y social del radicalismo del Pueblo, orientada a la búsqueda de un camino intermedio entre los que hubieran llenado las aspiraciones de los bloques de intereses cuyos conflictos dominan esta etapa argentina, debía necesariamente dejar descontentos a todos. No puede dudarse de la eficacia a corto plazo de esa propaganda, a la que hallaban difícil no sumarse todos los rivales políticos del partido de gobierno; y sin embargo, en una perspectiva menos limitada, podía ser peligrosa para quienes aspiraban a heredar el poder después de desalojar de él al doctor Illia: tras persuadir a la opinión pública de su total ineptitud política y administrativa, les sería preciso, para conservar su aprecio, superar de modo evidente la eficacia mostrada en ambos aspectos por el último gobierno civil, que estaba lejos de haber sido siempre tan escasa como sus enemigos afectaban creer.

Problemas para el futuro... Por el momento la remoción del doctor Illia no planteaba ninguno demasiado grave a los jefes del ejército, que la encararon en el marco de la misma estructura jerárquica con la cual las fuerzas armadas habían sido hasta ese momento parte integrante del Estado constitucional que se trataba precisamente de destruir. Tras una advertencia formulada por el comandante en jefe del ejército en un discurso público, una etapa de exigencias militares y ultimátums al poder civil parecía comenzar. Pero duró poco, en parte porque los jefes militares estaban de todos modos decididos a poner rápido fin a la

experiencia de gobierno representativo, en parte porque el presidente no estaba por su parte dispuesto a sufrir el proceso de deterioro al que su excesiva ductilidad había condenado al doctor Frondizi. El 28 de junio de 1966, con la perfección de una operación largamente planeada, se dio la ocupación de los edificios de gobierno por las tropas revolucionarias. La etapa de historia que había comenzado en 1930 en medio del alborozo de unos y la consternación de otros, que en 1943 había abierto un nuevo capítulo ante un país misteriosamente mudo; que lo había concluido en 1955, de nuevo en medio de muchedumbres en fiesta que ignoraban aún hasta qué punto su alegría las hacía aborrecibles a esa mitad del país que se juzgaba vencida; que había inaugurado con ello una nueva y no muy exitosa experiencia, parecía alcanzar ahora su lógico punto culminante. Las fuerzas armadas asumían plenamente la tarea que antes habían preferido eludir, y no ocultaban al país que sólo volvería a conocer un gobierno representativo cuando una gestión —tan larga como fuese necesario— de sus gobernantes militares le hubiese enseñado a hacer suyas inclinaciones políticas que éstos pudiesen aprobar.

Sin duda, los nuevos gobernantes no ignoraban que la crisis política no se daba al margen de la larga *impasse* en que se debatían la economía y la sociedad argentinas; pero también ésta podría ser finalmente resuelta por la acción de un poder no acosado por las emergencias electorales. La incapacidad que para resolverlas había mostrado el sistema político instaurado luego de 1955 podía no derivar —como decían ahora los exégetas de la que se llamó a sí misma Revolución Argentina— de su escasa representatividad, sino de que era por lo contrario fielmente representativo de un país en equilibrio demasiado estable; no es dudoso, en todo caso, que esa incapacidad era perfectamente real, y ella ofrecía contra la experiencia clausurada mejores argumentos que los algo especiosos esgrimidos con frecuencia por quienes le pusieron fin brusco y violento.

Equilibrio economicosocial demasiado estable bajo las apariencias del cambio; estabilidad por lo tanto de los datos básicos de la situación política, en que ese equilibrio se refleja también; he aquí entonces los dos aspectos de la situación que ahora las fuerzas armadas preferían afrontar directamente. ¿Es esto todo? Ya hemos visto cómo los protagonistas de la nueva jornada se rehusaban a aceptar plenamente esta imagen de la situación que enfrentaban: preferían —acaso por razones de oportunidad política— no colocar en primer plano al peronismo y el problema que él había significado para la Argentina posterior a 1955; insistían también —y esa insistencia era menos fácilmente explicable por razones tácticas— en que el problema que debían resolver tenía otras dimensiones que esa imagen ignoraba. Sin duda, tras esta insis-

tencia no es difícil adivinar a menudo esa imagen apocalíptica de la coyuntura argentina, antes más popular que entre los victoriosos azules entre sus derrotados rivales. La existencia del peligro cierto e inmediato de una guerra social dirigida por jefes de orientación marxista e inspiración cubana no era, para algunos de los jefes de la Revolución, sino la consecuencia más visible de un proceso vasto y apenas secreto de infiltración de esas tendencias sobre vastos sectores de la vida nacional. De ello habían creído ya encontrar confirmación cuando, en 1963, alrededor de una decena de estudiantes universitarios de Buenos Aires y Córdoba partieron a establecer en agrestes regiones de Salta un foco guerrillero bien pronto suprimido. De ese episodio, más que el fracaso de los improvisados revolucionarios, fue su existencia misma la que pareció impresionar a los jefes encargados de afrontar la modesta amenaza que ellos suponían. Este estado de ánimo explica acaso que esos jefes creyeran con fe tan sólida en la presencia de amenazas urgentes contra el orden social, que el observador hallaba difícil de descubrir en un país que por lo contrario había sabido hasta entonces eludir con infalible instinto cuantas ocasiones su agitado curso político había ido ofreciendo para enfrentamientos violentos y cambios realmente radicales.

Sería sin embargo erróneo dejar de lado como mera consecuencia de una suerte de deformación profesional la noción, cada vez más arraigada entre los jefes militares gobernantes, según la cual el conflicto argentino había adquirido una dimensión nueva, que hacía menos fácil alcanzar, sea una sólida solución transaccional, capaz de asegurar en lo esencial los objetivos de conservación social que las fuerzas armadas parecen hacer suyos, sea una neta victoria de los sectores adictos a esos objetivos. Había por lo menos dos elementos nuevos que evidentemente contribuían a ello. Uno es muy obvio, y aunque la toma de conciencia de su gravitación suele servir de punto de partida para planteos excesivamente truculentos, su importancia no es necesariamente desdeñable. Era el conflicto mundial de poder, y las características nuevas que tomó luego de que la revolución cubana había roto la unanimidad oficial de América latina en el apoyo a Estados Unidos. El aplacamiento en la guerra fría, que había atenuado el impacto del realineamiento cubano, dejó de hacerse sentir para las zonas periféricas desde 1964, y ya antes su eficacia se había revelado limitada: Estados Unidos, abandonando su veleidad de favorecer en América latina las soluciones moderadamente reformistas, retornaba a su actitud más tradicional de apoyar a quienes lo apoyaban, sin exigirles enfadosas pruebas de lealtad a la democracia representativa. Cuba, por su parte, se resignaba mal a limitar el ámbito de su revolución a la isla originaria, y aunque así no fuera la sola existencia de un país latinoamericano reorganizado bajo el signo del socia-

lismo bastaba para dar a las relaciones entre las naciones y entre los sectores sociales y políticos en el vasto subcontinente un tono de prolongada emergencia.

El descubrimiento de las dimensiones continentales de la problemática enfrentada por la Argentina tiene así múltiples ocasiones para confirmarse. Motivos de conveniencia (Estados Unidos es fuente de auxilio técnico y a menudo no sólo técnico para las fuerzas armadas de todo el continente; las argentinas no querían reiterar la actitud que en los años 40 amenazó con rezagarlas respecto de las de los más importantes vecinos, y hallaban en esta consideración un estímulo adicional para subrayar su propia ortodoxia occidental y cristiana) se sumaban a otros más profundos para hacer que las fuerzas armadas diesen ahora prioridad a esa defensa de las fronteras ideológicas que antes eran postpuestas a otras menos simbólicas. Con ello no sólo venían a reconocer la existencia de una nada novedosa situación de hecho que les daba como primera función la definición y defensa del orden político y social interno; recogían además un dato de más reciente vigencia al admitir que también la política internacional había sido redefinida por el conflicto mundial de poder; el nacionalismo, en sentido tradicional, perdía así algo de su importancia como elemento constitutivo en la ideología de nuestros militares.

Hasta qué punto el conflicto internacional seguía gravitando en la política nacional, pudo advertirlo el último gobierno civil cuando la crisis de Santo Domingo llegó a tener sobre sus relaciones con los dirigentes militares consecuencias parecidas a las que para el gobierno de Frondizi tuvo su política cubana. Así, pese a la falta de eco directo que salvo en algunos episodios esporádicos había alcanzado la revolución cubana, pese también a la moderación que en cuanto a la dimensión social del conflicto político había venido mostrando el peronismo luego de su pérdida del poder (que no hacía por otra parte sino confirmar la orientación ya mostrada en el ejercicio de él), la evolución paralela del agudo conflicto continental y el crónico conflicto nacional contribuía a dar al segundo parte de la dramaticidad del primero.

El otro elemento que venía a agregar hondura a la crisis argentina es a la vez menos preciso y más abarcador: corresponde a un rápido y algo desorientado proceso de modernización ideológica y cultural que se desencadena sólo luego de 1955. El conservador había sido sustancialmente un régimen de *ordre moral*; el hecho de que bajo su égida la moralidad política hubiera descendido a niveles muy discutibles, no lo privaba de encontrar en la defensa de un sistema de valores morales a veces difícil de distinguir de un conjunto de costumbres tradicionales uno de los cam-

pos de coincidencia con una Iglesia católica que la restauración conservadora buscaba cada vez más resueltamente devolver al juego político; por otra parte la reafirmación de la hegemonía de los sectores tradicionales tenía por corolario un conservadorismo en el estilo de vida que, si no era necesariamente practicado por esos sectores, era favorecido por ellos en el más amplio contexto nacional. El peronismo, resultante pero también promotor de cambios importantes en el equilibrio social, parecía destinado a variar considerablemente esta situación; no fue sin embargo así, y las crecientes limitaciones a la libertad de expresión que él introdujo contribuyeron por añadidura a aislar a la Argentina de un mundo que vivía su afiebrada renovación de posguerra. En 1955 parecieron abrirse las compuertas para cambios largamente postergados; la libertad de prensa, y el fin de la obsesión exclusiva que por diez años había significado el peronismo para adictos y adversarios, permitían descubrir que, mientras la Argentina se había encerrado en su peculiarísima experiencia, había comenzado, pero también concluido, la guerra fría; frente a los mundos en blanco y negro de 1940 y 1950 un mundo más abigarrado y complejo, casi tan enigmático como esas nuevas modas indumentarias que amenazaban la demasiado prudente compostura vernácula, era súbitamente descubierto y requería ser comprendido.

Si el mundo había cambiado, la Argentina lo había hecho en algunos aspectos, demasiado poco. El peronismo había abominado de la hegemonía oligárquica, pero no sólo había usado su poderío político para defender en el plano cultural los valores por ella sostenidos; había sido sobre todo incapaz de oponer a la *élite* a la que impugnaba otra dotada de la fe en sí misma y de la capacidad necesarias para rivalizar con la que había comenzado a contar, una vez perdido el poder, con la adhesión de esos sectores intermedios que en el pasado le había sido esquiva. En 1955, luego de una larga etapa de marginación, era la *élite* argentina de 1943, con una vitalidad a la vez admirable y peligrosa, la que reaparecía casi intacta, dispuesta a retomar su lugar en un país que a pesar de todo no era el mismo, en un mundo aun más cambiado. Entre ese prestigioso pasado y los derechos de un futuro que debía ser necesariamente diferente, se daba una tensión particularmente dolorosa porque los contendientes habían atravesado juntos, y en el mismo bando, la experiencia peronista, y ahora comenzaban a encontrar que corría entre ellos más distancia que la que los separaba de ese régimen tan aborrecido. Pero esa tensión era inevitable y en algunas áreas de la vida nacional ya no iba a desaparecer: la vida cultural, en particular, tendría que atravesar brusca y violentamente una modernización postergada por diez años. Un signo de ello se tenía en la Universidad, donde mientras buena parte de los docentes de generaciones intermedias, introducidos

durante el peronismo y bajo su signo, eran desalojados por una minuciosa depuración, viejos demasiado viejos y jóvenes demasiado jóvenes trataban sin demasiado éxito de convivir pacíficamente, y algunos de los primeros, dominados por la nostalgia de un pasado irrevocable, terminaban por creer que las innovaciones introducidas por los segundos para acercar a la universidad argentina al modelo de algunas norteamericanas eran en efecto parte de un plan destinado a entregar toda la Argentina al comunismo internacional.

Pero esa modernización cultural, que hacía que tantos ilustres maestros añoraran los tiempos en que la vigilancia policíaca no les había impedido recibir los conmovedores homenajes de las nuevas generaciones, ahora inesperadamente sarcásticas, no dejaba de tener consecuencias en otros planos, y ante todo en una vertiginosa modernización ideológica: luego de diez años de repetir contra la acción peronista las jaculatorias del liberalismo constitucional, los que habían sobrevivido a ese tedioso ejercicio no parecían hallarlas demasiado lozanas, era a su modo otro de los signos del fin de una época en que la rígida contraposición política que había llevado a un congelamiento ideológico igualmente propicio a las dos ortodoxias rivales les permitía expresar más abiertamente su hastío; si la disciplina interna de la acorralada oposición intelectual basta para explicar que durante diez años se haya abstenido de formular las reservas y rectificaciones que tantos de sus catecúmenos iban a prodigar luego de 1955, en el caso del peronismo una vigilancia más externa es la que hubiera hecho impensable la publicación antes de 1955 de muchas de las apologías que para el movimiento se elaboraron luego de esa fecha. A partir de ella reinará una nueva, ávida y caótica libertad intelectual; cuando se descubre que la desmovilización cultural no va acompañada del fin del conflicto, en cuyo curso la revolución de 1955 fue sólo un punto de inflexión, una lucidez nueva impide a muchos de los que en nombre de la libertad y de la cultura nacional han permanecido diez años encerrados en el estrecho horizonte de una trinchera volver a ella. Se resisten a ello en parte porque creen que luego de un decenio de defender la libertad de pensar ha llegado por fin la hora de practicarla; en parte porque no pueden rehacer su fe en la orientación política y social sustancialmente conservadora que descubren haber defendido en el pasado cuando pensaban luchar por su propia libertad. De este modo, toda la cultura nacional ofrece un testimonio perplejo, a la vez apasionado y distante, acerca de la realidad argentina, marcado por la nostalgia de una acción eficaz sobre ella pero también por la recién descubierta imposibilidad de optar ante las concretas alternativas que plantea. El justo temor ante el peligro de que esa marginalidad se haga permanente, explica el eco que encontró la tentativa de cambiar los términos mis-

mos del conflicto que significó la renovación del radicalismo por el doctor Frondizi. Este no halló demasiado difícil persuadir a los adictos a la modernización de que ella no era posible fuera de un contexto que suponía cambios en el equilibrio social; a los adeptos a soluciones revolucionarias de que ellas no eran posibles de ningún modo; menos fácil encontró permanecer fiel a las esperanzas depositadas por unos y otros en la experiencia colocada bajo su signo. El fracaso de ésta significa un momento decisivo en un proceso rico en frustraciones; para algunos la revolución quedaba como única posibilidad, y se reprocharían haber descreído de ella al verla brotar en el rincón más impensado de América latina, al ver por otra parte cuál era la contextura real de la que por un momento había osado presentarse como alternativa política viable a una revolución por hipótesis imposible. De la experiencia Frondizi proviene la radicalización del movimiento estudiantil universitario, que ya no se detuvo pese a los altibajos en el apoyo electoral que encontraba en el cuerpo estudiantil un reformismo cada vez menos parecido al que en 1955 había ocupado orgullosamente su lugar en el victorioso frente antiperonista.

Para muchos, acaso para la mayoría, esta experiencia significó el fin de una esperanza que —según comenzaban a creer— había estado condenada de antemano. Ello no los devolvió sin embargo al papel de guardianes del cada vez más arcaizante *ordre moral*; por lo contrario marcó el comienzo de una secesión por el momento no militante, pero sí irreductible, que —necesariamente débil al haber renunciado a todo contacto con las fuerzas efectivamente actuantes en sentido disidente en el plano nacional— hallaba una apariencia de fuerza en la existencia de razones muy evidentes que exigían una modernización técnica, científica, cultural; una fuerza acaso más auténtica en el hecho de que la revolución en las costumbres sobrevivía a las agostadas esperanzas puestas en revoluciones más hondas. La cada vez más intolerable tutela ética, estética y cultural que la Argentina preperonista pretendía retener sobre la posperonista sólo se conservaba en la ilusión de quienes creían ejercerla; nuevos módulos demasiado efímeros sustituían a los demasiado fijos de tiempos más sencillos; mientras a tres cuadras de las ruinas de un Jockey Club que no se resolvía a resurgir de sus cenizas, una institución que llevaba el más célebre de los nombres surgidos de la nueva burguesía industrial ejercía “en el más alto nivel” el arbitraje de las modernas elegancias, su acción era prolongada a niveles más cotidianos por una prensa hebdomadaria cuya orientación política no era más clara que sus apoyos financieros, pero que supo por un tiempo crearse un imponente séquito de adictos como promotora de una revolución permanente, felizmente limitada al campo indumentario, literario y artístico, y todavía para

sectores más populares por un semanario humorístico que lograba la hazaña de hacer burla de la fidelidad rebañega de sus lectores y a la vez utilizarla para conducirlos por la áspera senda de un gusto elegante que se tomaba el derecho de redefinir cada semana. Todo este espectáculo a ratos algo penoso no implicaba por cierto una amenaza directa al orden social, aunque un reflexivo editorialista de *La Nación* no haya dejado de señalar el ataque oblicuo que a él se dirigía al reemplazar las jerarquías sociales tradicionales por otras definidas con criterios agresivamente frívolos. ¿Pero no reflejaba demasiado bien la situación de una Argentina que había perdido la fe en un sistema de valores y en una *élite* a los que no había sabido reemplazar?

En un plano más serio, el *aggiornamento* católico, llegado a la Argentina tardía y tumultuosamente, pareció significar el derrumbe de un nuevo lienzo en la ya maltrecha muralla erigida en defensa del *ordre moral*. Si desde el punto de vista político, la Iglesia había demostrado una ductilidad muy opuesta a la rigidez algo anquilosada de las demás instituciones que se habían consagrado a custodiar el orden establecido, esa amplitud no se había extendido por cierto al campo ideológico y doctrinario: el conservadorismo cultural no parecía menos arraigado en 1955 que en 1940 (acaso lo estaba más, porque ahora había desaparecido la alternativa ofrecida por el fascismo, que a su modo había servido para aproximar a sectores importantes del catolicismo argentino a los problemas del siglo xx). De pronto ese bloque ideológico en que la ortodoxia en materia teológica parecía prolongarse naturalmente en una sólida fe en los valores establecidos en el plano cultural, ideológico y (a pesar de todas las licencias tomadas en el plano táctico) también político, amenazaba quebrarse bajo los golpes de una turbulenta minoría renovadora, que sin esquivar el peligroso campo teológico se orientaba sobre todo a un nuevo examen del papel del cristiano y la Iglesia en el mundo; el ansia de desligar el destino de ésta de supremacías políticas y sociales creadas por la historia y destinadas a ser corroidas por ella llevaba a algunos a negar apasionadamente la licitud misma de la noción muy tradicional que reivindica para la Iglesia un papel central en la defensa del orden social amenazado por una subversión política teñida de impiedad. Para los defensores del orden occidental y cristiano, las protestas formuladas en nombre de un cristianismo que se rehusa a ser solamente occidental eran una causa adicional de desazón. ¿Cómo, en efecto, salvar a un orden que no es seguro que quiera ser salvado?

¿Pero era preciso admitir que así estaban las cosas, que en la Argentina un orden íntimamente vacilante esperaba inerte el asalto final de enemigos fundadamente seguros de sí? ¿Y —aun admitiendo que así fue-

se — hasta qué punto había sido esa noción la que había inspirado la decisión de sustituir por un orden político más rígido el demasiado frágil surgido de las experiencias semiconstitucionales posperonistas? Acaso las justificaciones esgrimidas por los responsables de esa decisión ofrezcan una guía menos segura que el uso que iban a hacer de un poder tan fácilmente conquistado. Bien pronto se hizo evidente, en efecto, que habiendo eliminado — junto con el sistema semirrepresentativo — esos urgentes vencimientos electorales que lo habían sometido a crisis recurrentes, los nuevos dueños del país esperaban haber suprimido, no el más evidente de los signos de la crisis en que la nación se encontraba, sino la crisis misma.

Se revelaba aquí en toda su ambigüedad una de las tendencias profundas de la facción militar que tras de haber conquistado la hegemonía en 1962-63 se apoderaba ahora de la plenitud del poder: una cierta preferencia por la moderación, una reticencia marcada frente a las interpretaciones que preferían contemplar la crisis nacional desde una perspectiva apocalíptica, la acercaban al temple todavía dominante en el país, al que se rehusaba a ver con la alarma — inspiradora de creciente hostilidad — característica de la que había sido la fracción rival. Sin duda, de haber intentado fundar esa inclinación en buenas razones, no hubiera sido imposible encontrarlas; pese a la rigidez de los alineamientos políticos y sociales — que no anticipaba una fácil salida de la impasse en que la nación se encontraba — todavía en 1965 una estudiosa norteamericana, Jeane Kirkpatrick, podía descubrir con sorpresa la fundamental concordancia de la opinión pública en torno a soluciones marcadas por una extrema moderación. Pero precisamente esa concordancia era capaz de sobrevivir a la porfiada discordia política; no era suficiente para eliminarla. Esa hubiera sido sin duda la tarea que el nuevo poder hubiese debido encarar con urgencia; prefirió en cambio actuar como si la considerase ya innecesaria. En su optimismo algo ciego el nuevo poder se revelaba entonces más capaz de reflejar las inclinaciones que eran todavía las del país que de orientarlas hacia una política viable. Esta última insuficiencia se había manifestado ya en 1962-63: contra sus rivales dentro de las fuerzas armadas, los triunfadores habían impuesto el retorno al sistema electivo que, sin recurrir al fraude ni a la proscripción, debía eliminar hasta la posibilidad del triunfo del partido que, según se sabía de antemano, debía surgir triunfante de cualquier puja electoral no sometida a esas limitaciones; el país había aceptado esa solución porque la alternativa propuesta — una larga dictadura destinada a depurarlo de los rasgos juzgados negativos por quienes la propugnaban y se disponían a ejercerla — era demasiado aborrecible; ahora la misma fascinación por las soluciones autocontradictorias iba

a manifestarse en la invención de la dictadura permisiva; la prudencia en la represión no era sin embargo el resultado de ninguna acabada toma de conciencia de la necesidad de no transformarla en instrumento de reclutamiento de nuevos adversarios; nacía de una confianza de nuevo algo ciega en las consecuencias de la supresión de los canales a través de los cuales la oposición política y social se había volcado durante la etapa a la que el movimiento militar había puesto fin.

Pero esa confianza escasamente previsoras no era privilegio exclusivo de los nuevos gobernantes; los dirigentes sociales y económicos la compartían en buena medida, junto con buena parte de los dirigentes políticos que no habían sufrido directamente a causa del derrocamiento del gobierno Illia; que la eliminación del régimen representativo iba a servir sobre todo para consolidar el equilibrio creado —pero reiteradamente puesto en crisis— por éste parecía ser (se ha señalado más arriba) la fe común a esos grupos. Bien pronto la gestión del régimen militar iba a revelar hasta qué punto esa fe era infundada; con la serenidad de un sonámbulo el gobierno de Onganía iba a minar de modo no deliberado pero consistente las bases mismas de la frágil y casi clandestina concordia que había sobrevivido antes a tantas tormentas. Luego de más de un tercio de siglo las soluciones primero propuestas en el marco de esa constelación mundial ya abolida que había sido la de 1930, bajo el signo entonces prestigioso del fascismo, alcanzaban así su tardío triunfo. Mucho diferenciaba sin duda de los arrogantes profetas de 1930 a los que con mansa obstinación repetían en 1966 sus fatigadas enseñanzas; algo esencial de la actitud inicial sobrevivía sin embargo en estos últimos: era la decisión de gobernar al país ignorando desdeñosamente las fuerzas sociopolíticas en él presentes. Era una decisión cuya gravedad los ahora gobernantes adivinaban acaso menos bien que quienes primero la habían propuesto; la experiencia de las más de tres décadas que los separaban de éstos parecía haber cambiado el signo del pesimismo de los primeros propugnadores de la solución autoritaria frente al país: más que la supuesta perversidad de las orientaciones politicosociales hacia las que éste espontáneamente se inclinaba, era la relativa facilidad con que regímenes que se habían movido en dirección opuesta habían podido imponerse la que preferían deducir de esa prolongada experiencia. Esa conclusión no era sin duda infundada; a la vez los nuevos gobernantes se rehusaban a sacar ninguna del hecho —sin duda sugestivo— de que todas esas experiencias políticas hayan preferido eludir el enfrentamiento definitivo con esas corrientes cuyo arraigo popular era juzgado el signo más evidente de su carácter pecaminoso; hasta 1943 la esperanza en un retorno a una marginación menos violenta de las mayorías electorales fue constantemente burlada, pero no

menos constantemente alimentada, por el gobierno Justo; luego de 1943 la hipoteca de esa oposición mayoritaria fue levantada sólo a muy alto precio: la creación de un nuevo movimiento político surgido con el favor del ejército, pero que acentuaba algunos de los rasgos que habían ganado al radicalismo la sólida enemiga militar; luego de 1955 un ejército horrorizado ante su obra se consagró a redefinir los términos mismos de la lucha política a fin de asegurar el triunfo de la más antigua —pero según ahora se veía, también menos aborrecible— de esas malas influencias que se había propuesto desterrar de la vida política. Esas laboriosas tentativas eran juzgadas sin indulgencia por los nuevos dueños del poder; en ellas veían sobre todo el innecesario homenaje brindado a una cierta concepción de la legitimidad política por quienes ignoraban la existencia misma de concepciones alternativas, más adecuadas a las realidades del mundo contemporáneo a la vez que mejor fundadas en sólida teoría. Confiados en su estrella, en sus fuerzas, en la docilidad de un país fatigado, los nuevos gobernantes preparaban así para éste nuevas y más violentas tormentas.

BIBLIOGRAFIA

Obras generales que se ocupan del período

- Germani, G., *Estructura social de la Argentina*, B. A., 1955.
Germani, G., *Política y sociedad en una época de transición*, B. A., 1962.
Rennie, Y. F., *The Argentine Republic*, Nueva York, 1945.
Romero, J., *Las ideas políticas en la Argentina*, México, 1946 (hay edic. posteriores, ampliadas).
Whitaker, A. P., *The United States and Argentina*, Cambridge, 1954.
— *Argentina 1930-1960*, B. A., 1961.

Obras sobre el período (o algunas etapas de él)

- Amadeo, M., *Ayer, hoy, mañana*, B. A., 1956.
Blanksten, G. I., *Peron's Argentina*, Chicago, 1953.
Halperin Donghi, T., *Argentina en el callejón*, Montevideo, 1964.
Magnet, A., *Nuestros vecinos argentinos*, Santiago de Chile, 1956.
Rabinovitz, B., *Sucedió en la Argentina*, B. A., 1956.
Whitaker, A. P., *Argentine upheaval*, Nueva York, 1956.

Obras sobre aspectos particulares

- Baily, S. L., *Labor, nationalism and politics in Argentina*, New Brunswick, 1967.
Belloni, A., *Del anarquismo al peronismo*, B. A., 1960.
Hernández Arregui, J. J., *La formación de la conciencia nacional, 1930-1960*, B. A., 1960.

Imaz, J. L. de, *Los que mandan*, B. A., 1964.

Kennedy, J. J., *Catholicism, nationalism and democracy in Argentina*, Notre Dame, 1958.

Kirpatrick, J., *Leader and Vanguard in Mass society: A study of Peronist Argentina*, Cambridge and London, 1971.

Marotta, S., *El movimiento sindical argentino*, B. A., 1960.

Perelman, A., *Cómo hicimos el 17 de octubre*, B. A., 1961.

Memorias y testimonios

Bruce, J., *Those perplexing argentinians*, Nueva York, 1953.

Greenup, R. y L., *Revolution before breakfast*, Chapel Hill, 1947.

Guardo, R. C., *Horas difíciles*, B. A., 1963.

Kelly, Sir D., *El poder detrás del trono*, B. A., 1962.

Perón, E., *La razón de mi vida*, B. A., s. f.

Perón, J. D., *La fuerza es el derecho de las bestias*, Montevideo, 1958.

INDICES ANALITICOS

INDICE DE NOMBRES Y LUGARES

A

Alemania, 44, 81
Alende, Oscar, 138, 139, 140
Alonso, José, 149
Alsogaray, Alvaro, 118, 119, 120, 125, 130, 133, 136
Alvarez, Juan, 50, 51
Amadeo, Mario, 90, 97
América latina, 101, 132, 133, 154, 158
Añatuya, 123
Apold, 84, 93
Aramburu, Pedro E., 97, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 112, 123, 128, 131, 133, 136, 138, 139, 140, 143
Arce, José, 46
Archivo General de la Nación, 16, 19, 20, 22, 23, 32, 48, 52, 56, 61, 63, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 82, 87, 95, 97, 98, 102, 112, 119, 121, 122, 124, 135, 142, 151
Argentina, 14, 15, 16, 18, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 38, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 54, 56, 58, 60, 63, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 110, 112, 116, 118, 120, 122, 125, 128, 130, 132, 133, 145, 146, 148, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159
Asia, 49
Avalos, Eduardo Jorge, 49

B

Balbín, Ricardo, 104, 105, 140
Bengoa, León Justo, 96
Berlín, 33, 93
Braden, Spruille, 46, 49, 55

Bramuglia, Juan Atilio, 47
Brasil, 28
Buenos Aires, 18, 21, 22, 30, 33, 40, 46, 51, 57, 58, 75, 83, 85, 86, 87, 88, 119, 126, 128, 144, 154
Bunge, A., 21
Busso, doctor, 95, 96, 97

C

Campo de Mayo, 49, 134
Capital Federal, 18, 22, 23, 24, 27, 44, 53, 57, 58, 78, 117, 126, 128, 134, 144
Cárcano, Miguel Angel, 123, 124
Casa Rosada, 16, 51, 77, 142
Castillo, Ramón, 13, 15, 16, 28, 30
Cerruti Costa, Luis, 94
Círculo Militar, 50
Colombia, 80
Confederación General, Económica - CGE, 72, 79
de Profesionales, 70
General del Trabajo - CGT, 34, 51, 60, 62, 64, 79, 83, 86, 95, 97, 107, 115, 146, 149
Congreso de la Productividad, 79
Consejo Nacional de Postguerra, 32
Córdoba, 17, 57, 86, 128, 144, 154
Corrientes, 57
Cuba, 123, 124, 133, 154
Cuyo, 25

CH

Chaco, 25
santiagueño, 123
Chile, 32
China, 18

D

del Castillo, Santiago H., 110
 Dell'Oro Maini, 103
 de Pablo Pardo, L., 96
 Duarte, Juan, 76

E

Eje (Berlín-Roma-Tokio), 17, 30, 33, 34, 55
 Entre Ríos, 126
 Escuela de Mecánica de la Armada, 19
 Espejo, José, 62
 Estados Unidos, 15, 28, 29, 30, 42, 45, 46, 80, 99, 110, 122, 124, 154, 155
 Europa, 33, 49

F

Farrell, Edelmiro J., 29, 31, 33, 50, 51
 Federación, Agraria Argentina, 73
 Universitaria Argentina, 46
 Framini, Andrés, 95, 126, 128, 131, 136, 138, 144, 149
 Franco, Francisco, 63
 Frigerio, Rogelio, 110, 114, 118, 125, 131, 135, 137, 138, 140, 141
 Frondizi, Arturo, 84, 101, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 140, 141, 142, 143, 153, 154, 155, 158
 Fundación Eva Perón, 62, 63

G

Gay, Luis, 62
 Ghioldi, Rodolfo, 98
 Goebbels, doctor, 81
 Gómez, Alejandro, 104, 108
 González, coronel, 31
 Goyeneche, doctor, 94, 97
 Gran Bretaña, 15, 42, 110
 Grecia, 124
 Grupo de Oficiales Unidos - GOU, 29, 30, 31, 34
 Guevara, Ernesto, 124
 Guido, José María, 130, 133, 134, 142

H

Hernández, Aurelio, 62
 Hospital Militar, 51
 Houssay, Bernardo, 46
 Hull, Cordell, 30, 31

I

Illia, Arturo, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 150, 151, 152, 161

India, 18
 Ingalinella, Juan, 84, 86
 Interior, 21, 25, 57, 72, 86, 145
 Intransigencia, véase Unión Cívica Radical
 Intransigente
 Italia, 32

J

Jockey Club, 77, 158
 Juan XXIII, 122
 Jujuy, 134
 Justo, Agustín P., 15, 16, 17, 32, 53, 151

K

Kennedy, John F., 133
 Kirpatrick, Jeane, 160

L

La Nación, 60, 159
 La Plata, 51, 131, 138
La Prensa, 37, 60
 Lasalle, 147
 Latinoamérica, 29
 Lenin, 101
 Libro Azul, 55
 Litoral, 107
 Lonardi, Eduardo, 86, 87, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 123
 Loza, general, 134
 Lucero, Franklin, 86

M

Madrid, 63
 Mar del Plata (P. B. A.), 86
 Martín García, isla, 50, 51, 128, 129, 131
 Martínez, María Estela, véase Perón, María Estela Martínez de
 Rodolfo, 135, 136
 Matera, Raúl, 136, 138
 Menéndez, Benjamín, 69, 136
Mercurio, 31
 Misiones, 25
 Mitre, Bartolomé, 58, 105
 Mosca, Enrique, 54
 Movimiento de Integración y Desarrollo, 140
 de Intransigencia Nacional, 104
 de Intransigencia y Renovación, 104, 140

N

Naciones Unidas, 15, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 42, 44, 90
 Natalini, 95
 Neuquén, 35
 Nietzsche, 33

O

Ocampo, Victoria, 77
 Olmedo, José Ignacio, 34
 Onganía, Juan Carlos, 136, 151, 161
 Ortiz, Roberto M., 15

P

Palacios, Alfredo, 98, 123
 Paraguay, 87
 Paraná (Entre Ríos), 124
 París, 44
 Partido Cívico Independiente, 118
 Comunista, 40, 53, 59
 Demócrata Cristiano, 97
 Demócrata Progresista, 53
 Justicialista, 126
 Laborista, 54, 57, 61
 Patriótico, 54
 Peronista, 62, 86, 97, 107
 Radical, 22
 Socialista, 22, 53
 Único de la Revolución Nacional, 61
 Patrón Costas, Robustiano, 28
 Perette, Carlos H., 98, 142
 Pérez Compagn, 138
 Perón, Eva, 49, 54, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69,
 74, 75, 76, 148
 Perón, Juan Domingo, 31, 32, 34, 35, 39, 43,
 45, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 59, 61, 62, 65,
 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 82,
 83, 84, 86, 88, 90, 102, 112, 113, 115, 118,
 126, 135, 136, 144, 146, 147, 148, 149, 150,
 151
 Perón, María Estela Martínez de (Isabel),
 148, 149
 Perú, 18
 Peter, 35
 Pinedo, Federico, 21, 77, 79, 130
 Pío XII, 66
 Pistarini, Pascual, 141
 Pizzio, doctor, 151
 Plaza de Mayo, 22, 23, 52, 71, 87
 Poggi, general, 134
 Prebisch, Raúl, 90, 91
 príncipe Felipe, 128
 Puerto Belgrano, 86
 Punta del Este, 124

Q

Quadros, Janio, 124
Qué, 110
 Quijano, J. Hortensio, 54, 69, 78

R

radicalismo del Pueblo, véase Unión Cívica
 Radical del Pueblo
 Ramírez, Octavio, 31
 Pedro, 17, 30, 31, 33

Rauch, general, 134, 137
 Rawson, A., 30
 Repetto, Nicolás, 38
 Revolución Argentina, 153
 Libertadora, 91, 139
 Reyes, Cipriano, 61
 Río Negro, 25
 Río Santiago, 86
 Rivarola, doctor, 46
 Roca, Julio A., 58
 Rojas, Isaac, 85, 96, 97, 112
 Ricardo, 47
 Rojas Pinilla, 80
 Rosario, 86, 88
 Ruiz Guiñazú, Enrique, 15
 Rusia, 42

S

Sabattini, Amadeo, 17, 49, 104, 108
 Salta, 154
 Sánchez Sorondo, Marcelo, 44
 San Juan, 54, 57
 San Luis, 57
 San Rafael (Mendoza), 151
 Santa Fe, 61
 Santamarina, Antonio, 40
 Santiago (Chile), 31
 Santo Domingo, 155
 Santo Tomás de Aquino, 34
 Sarobe, J. M., 32
 Sena, río, 33
 Serú García, 150
 Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires,
 143
 Sindicato de Empleados de Comercio, 36
 del Estado, 36
 de Prensa, 36
 Sociedad Rural Argentina, 53, 70, 72, 73
 Solano Lima, Vicente, 84, 138
 Storni, canceller, 31
 Sueldo, Horacio, 131, 136

T

Tamborini, José P., 54
 Tercer Mundo, 91
 Toranzo Montero, Federico, 134
 Tren de la Democracia, 54
 Tucumán, 25, 51

U

Unión, Cívica Radical del Pueblo, 105, 108,
 109, 120, 138, 140, 143, 147, 150
 Intransigente, 105, 106, 107, 109, 111,
 114, 115, 125, 126, 128, 136, 138, 140, 141,
 144, 147
 Junta Renovadora, 54
 del Pueblo Argentino, 138
 Democrática, 53, 56, 57, 104
 Federal, 108
 Demócrata Cristiana, 97, 108

Unión (*cont.*)
Ferroviaria, 35
Industrial Argentina, 53, 70
Unión Soviética, 29, 133
Universidad de Buenos Aires, 46
Uriburu, José F., 31
Urquiza, Justo José de, 93

V

Vandor, Augusto T., 146, 149
Varcla, contraalmirante, 151
Vaticano, 66

Villa María (Córdoba), 17
Villada Achával, doctor, 96
Villegas, Osiris, 137
Vítolo, Alfredo, 126
Volga, río, 41

Y

Yrigoyen, Hipólito, 18, 36, 44, 92

Z

Zavala Ortiz, Miguel Angel, 98, 136, 141

INDICE DE TEMAS

A

acción de Aramburu, 103
aggiornamento católico, influencia en la Argentina, 159
alzamiento militar de abril, 136 y sigs.
alzamiento militar del 16 de junio de 1955, 82 y sigs., 101 y sigs.
antiperonismo en lo político, 98 y sigs.
Asamblea Constituyente (Sta. Fe, 1957), 107 y sigs.

B

burguesía nacional, 110

C

cambios socioeconómicos posteriores a la crisis de 1929, 25 y sigs.
clases populares, 52
conflicto continental y conflicto nacional, 154 y sigs.
congelación de los arrendamientos, 58
conservadores, 14
conservadorismo, 53, 84
Constitución de 1949, 68
"cubanismo", 122 y sigs.

D

declaración de guerra a Alemania, 44 y sigs.
"descamisados", 54

E

economía
apertura del país a las inversiones extranjeras (1958), 116
cambio de rumbo (posperonismo), 89 y sigs.
consecuencias de la rectificación de la línea económica (1958), 117
crisis (1953-1955), 79
política agroexportadora y expansión industrial, 21
política económica (1962-1963), 130 (1963-1966), lineamientos generales, 143
del gobierno radical del Pueblo, 142 y sigs.
peronista, 72
política petrolera (1954-1955), 80 (1958-1962), 116
plan Prebisch, 91
ejército y gobierno radical del Pueblo, 141 y política (1962-1963), 132
facciones, 134
elecciones, de 1946, antecedentes, 53
ingerencia extranjera, 55
penetración peronista en el campo, 57 y sigs.
en las ciudades, 58 y sigs.
resultados, 56
de 1951, resultados, 69
de 1958, resultados, 111
de 1962, antecedentes, 126
resultados, 126 y sigs.
de 1963, antecedentes, 138
el fraude electoral, 138
resultados, 139
de 1965, 144

el gobierno militar frente a la clase media, 39
el 17 de octubre de 1945, 51
interpretaciones, 52
estatuto del peón, alcances, 38
limitaciones, 57

F

fraude electoral, 22, 24
frigerismo, concepto de burguesía nacional, 110
 proyecto burgués, 114
frondizismo, alejamiento de Frigerio, 118
fracaso de la experiencia, 128
 gestión económica de Alsogaray, 118 y sigs.
 límites y perspectivas, 115 y sigs.
 polarización política, 120 y sigs.
 política exterior, 123 y sigs.
 política petrolera, 116
 renuncia de Alejandro Gómez, 118
 y ejército, 117 y sigs.

G

gobierno, provisional (1955-1958)
 acción política, 103
 el problema de la sucesión, 103 y sigs.
 hostilidad de la U. C. R. Intransigente, 106 y sigs.
 radical del Pueblo y movimiento obrero, 141 y sigs.
golpe militar, de 1930, objetivos, 20
 de 1943, causas, 28 y sigs.
 espectro político, 13 y sigs.
 ausencia de una política, 30
 avance y arraigo de Perón, 34
 avance y arraigo del autoritarismo, 32 y sigs.
 de 1962, 128
 de 1966, antecedentes, 151 y sigs.
 los hechos, 152 y sigs.
GOU, 29, 30, 31, 34

H

hegemonía de los sectores intermediarios, 25

I

influencia del desenlace de la guerra en los factores del orden, 42
inversiones extranjeras, 116
izquierda socialista, 123

M

migraciones internas (1930-1943), 21
modernización y cambios en Argentina, 156 y sigs.

movimiento, azul, 134
 de resistencia, 46, 49, 50
 militar del 16 de septiembre de 1955, los hechos, 86 y sigs.
 sindical, 145

N

nacionalismo, económico, 142
 filofascista, 14
 nacionalización de sectores obreros (fines s. XIX-1940), 24
neutralidad argentina, sentido político, 15 y sigs.
 frente a la Segunda Guerra Mundial (Castillo), 15
 (Ramírez), 30
normalización política, 135

O

organizaciones políticas (1936-1945), 22
 sindicales, 24, 37

P

pacto Perón-Frondizi, 111
papel de Eva Perón, 62
peronismo, crisis económica (1953-1955), 79
 e Iglesia, 65, 80 y sigs.
 encuadramiento de los profesionales, 69
 en el Litoral (c. 1965), 145
 en el Interior (c. 1965), 144 y sigs.
 etapa final, 74 y sigs.
 fracaso de la conciliación, 78 y sigs.
 intervención estatal, 60
 la función asistencial, 62 y sigs.
 la propaganda, 59 y sigs.
 levantamiento militar de 1951, 69
 papel de Eva Perón, 62
 política económica, 72
 política petrolera (1954-1955), 80
 y ejército, 67
 y neoperonismo, 149 y sigs.
 y Perón (c. 1965), 146
 y vanderismo, 148
personalismo, 58, 59
peronismo sindical (1965), 145
 surgimiento del, 44
plan Prebisch, 91
política de neutralidad, 28, 29, 33

R

radicalismo, 53, 54, 84, 90, 101
 alvearista, 14
 e yrigoyenismo, 17
 posperonista, 100 y sigs.
 sector intransigente del, 45, 49
reforma de las normas sobre arrendamiento, alcances, 38

restauración conservadora, 13, 14, 17, 18,
20, 21, 24, 25, 26, 27, 31, 35, 40, 44, 47,
50, 91, 109, 112, 256
herencia política, 14
principio y fin, 13

S

sectores obreros, cambio en la composición,
24
nacionalización de los, 24
populares, 56, 58
sindicalismo participacionista, 147
sindicalización, 35
sindicatos (1936-1945), 23, 64
sistema panamericano, 15

socialismo, 100
surgimiento del peronismo, 44

U

urbanización, 21, 27

V

vandorismo, 146
voto femenino, 63

Y

yrigoyenismo, 17